



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRIA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

**“LA PROBLEMÁTICA PENITENCIARIA EN EL PENAL DE
CHICLAYO, VIDA COTIDIANA Y DERECHOS FUNDAMENTALES”**

TESIS

**Para optar el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTOR:

Abog. **JORGE LUÍS LARIOS MANAY**

ASESOR:

Dr. **AMADOR MONDOÑEDO VALLE**

Lambayeque, Febrero 2018

Presentada por:

JORGE LUÍS LARIOS MANAY
BACHILLER

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
ASESOR

Presentada a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para optar el Grado Académico de **MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.**

APROBADA POR:

PRESIDENTE DEL JURADO
DR. RAFAEL HERNANDEZ CANELO

SECRETARIO DEL JURADO
DR. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO

VOCAL DEL JURADO
M.Sc. MARIANO LARREA CHUCAS

Febrero, 2018

PRESENTACIÓN

En calidad de Asesor de Tesis me corresponde presentar el informe Final de Tesis intitulado **“LA PROBLEMÁTICA PENITENCIARIA EN EL PENAL DE CHICLAYO, VIDA COTIDIANA Y DERECHOS FUNDAMENTALES”**, elaborado por el Abogado JORGE LUÍS LARIOS MANAY, a efectos de optar el Grado de Maestro en Derecho, con Mención en Ciencias Penales, a otorgar por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; trabajo a través del cual postula un tema de relevante interés jurídico social como es la resocialización de los internos que se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario de Chiclayo y que el Estado peruano debe garantizar como derecho fundamental, postulando la propuesta legislativa de crear un proyecto de ley donde se regule de manera especial que los derechos del interno a la reeducación, resocialización rehabilitación y reinserción social guarden concordancia con los postulados doctrinarios de los derechos constitucionales.

A través de sus resultados, se tiene que los reclusos del establecimiento penitenciario de Chiclayo emigran sin haber cumplido cabalmente su reeducación, debido a que no existe un órgano especializado que brinde orientación adecuada para que los internos logren resocializarse y poder reintegrarse al seno de la sociedad; radicando en ello el mérito de la investigación.

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE

Asesor de Tesis

Lambayeque, Febrero del 2018

DISPERSIÓN TEMÁTICA

RESUMEN.....	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN.....	13
1.1.1. Ubicación Geográfica.....	13
1.1.2. Ubicación Temporal.....	14
1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
1.2.1. Planteamiento del Problema.....	20
1.2.2. Justificación del estudio del problema a investigar.....	20
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.....	21
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	22
1.4.1. Formulación de Hipótesis.....	22
1.4.1.1. Hipótesis.....	22
1.4.1.2. Identificación de Variables.....	22
1.4.2. OBJETIVOS.....	23
1.4.2.1. Objetivo General.....	23
1.4.2.2. Objetivos Específicos.....	23
1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica.....	24
1.4.4. Delimitación de la Investigación.....	24

1.4.5. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la Investigación Jurídica	
Propuesta.....	24
1.4.6. Población de Estudio.....	24
1.4.7. Muestra de Estudio.....	25

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

SUB CAPÍTULO I:

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES

1. LA CATEGORÍA DE LA LIBERTAD.....	26
2. CONCEPTO DE LIBERTAD.....	27
3. EL DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL.....	29
4. DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO.....	31
5. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.....	33
5.1. Origen.....	33
5.2. Concepto.....	35
6. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	36
7. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	37
8. CLASES DE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	40
8.1. Derechos de Primera Generación.....	41
8.2. Derechos de Segunda Generación.....	42
8.3. Derechos de Tercera generación.....	44
9. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	45

SUB CAPITULO II

BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y SISTEMA PENITENCIARIO

1. INTERNOS.....	48
1.1. Concepto.....	48
1.2. Conducta Criminal.....	48
1.3. Teorías Psicoanalíticas de la criminalidad.....	50
2. LAS CÁRCELES.....	53
3. SISTEMA PENITENCIARIO.....	54
3.1. Concepto.....	54
3.2. Caracteres.....	56
3.3. La Orientación Ideológica de la Ejecución Penal en el Perú.....	57
3.4. Criterios de clasificación de internos para determinar el penal de destino.....	60
3.5. El Régimen del Interno en el Régimen Penitenciario.....	62
4. RÉGIMEN PENITENCIARIO Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.....	68
5. POLÍTICA PENITENCIARIA.....	69
6. DERECHO PENITENCIARIO.....	70
7. BENEFICIOS PENITENCIARIOS.....	72
7. 1. Permiso de Salida.....	73
7. 2. Semilibertad.....	75
7. 3. Redención de la Pena por el Trabajo y la Educación.....	76
7. 4. Liberación condicional.....	77
7. 5. Visita Intima.....	78
8. EL INPE.....	80

SUB CAPITULO III

REEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN PENITENCIARIA

1. CONCEPTO DE PENA.....	82
2. TEORÍAS DE LA PENA.....	84
2.1. Teorías de la Retribución.....	84
2.2. Teorías de la Prevención.....	86
2.2.1. Teoría de la Prevención Especial.....	87
2.2.2. Teoría de la Prevención General.....	88
2.3. Teorías Mixtas o Eclépticas.....	89
2.3.1. La teoría aditiva de la Unión.....	90
2.3.2. La Teoría Dialéctica de la Unión.....	90
3. CRISIS Y FINALIDAD RESOCIALIZADORA DE LA PENA.....	92
4. DERECHO A LA REEDUCACIÓN PENITENCIARIA.....	95
4.1. La Educación Penitenciaria.....	95
4.2. Objetivos de la educación y capacitación penitenciaria.....	97
4.3. Fundamentación Constitucional.....	100
4.4. La Reeducción en el Campo Penitenciario.....	104
5. EL DERECHO A LA REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INTERNO.....	106

CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	107
3.1.1. Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.....	107
3.1.2. Población y hacinamiento en el establecimiento penitenciario de Chiclayo: 2012-2017.....	120

3.1.3. Libertad por beneficio penitenciario y género: 2012-2017.....	124
3.1.4. Vida cotidiana de los internos. Encuesta a reclusos año- 2018.....	128
3.2. Análisis de los Resultados.....	135
3.3. Contrastación de Hipótesis.....	147
3.4. Pre-conclusiones.....	148
CONCLUSIONES.....	161
RECOMENDACIONES.....	163
PROYECTO DE LEY.....	165
BIBLIOGRAFÍA.....	171
Libros.....	171
Hemerográficas.....	178
Legislación.....	179
Linkográficas.....	180

RESUMEN

El hombre cuando comete actos contrarios al ordenamiento penal, es sujeto pasible de ser sancionado por el Estado peruano, a través de un proceso penal y si es hallado culpable recibe una sentencia condenatoria a través de la cual se le impone una pena que puede ser pena privativa de la libertad efectiva y terminar recluso en un establecimiento penitenciario.

El fin último de la pena es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, conforme lo prescribe el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; es decir preparar al recluso para que comprenda el delito que ha cometido y el mal que ha causado, siendo que la reeducación permite al interno poder resocializarse, readaptarse y reintegrarse al seno de la sociedad.

De lo anterior se tiene que, no se da en nuestra realidad, siendo que entre los sectores sociales que con mayor frecuencia ve vulnerados sus derechos humanos es el de los reclusos en centros penitenciarios, justificada en la naturaleza de la represión penal, con relación a los fines preventivos y de socialización de la pena privativa de libertad. De allí que es necesario precisar que los reclusos pierden sólo el derecho de libertad de libre tránsito u otros que en sentencia se señalen, pero no pierden el resto de sus derechos, entre los que aparecen la educación con calidad y una adecuada y coherente rehabilitación.

PALABRAS CLAVES: Reeducación, Resocialización, rehabilitación y Reincorporación a la sociedad

EL AUTOR

ABSTRACT

The man when he commits acts contrary to the criminal law, is subject to be punished by the Peruvian State, through a criminal process and if found guilty receives a conviction through which he is imposed a penalty that may be punishable deprived of effective liberty and ending up in a penitentiary.

The ultimate goal of punishment is the reeducation, rehabilitation and reincorporation of the prisoner to society, as prescribed by paragraph 22 of Article 139 of the Political Constitution of Peru; that is, preparing the inmate to understand the crime he has committed and the harm he has caused, since reeducation allows the inmate to resocialize, readjust and reintegrate into the bosom of society. It must be said that this is not the case in our reality, since among the social sectors whose human rights are most frequently violated is that of prisoners in prisons, justified in the nature of criminal repression, in relation to the preventive and socialization purposes of the custodial sentence. Hence, it is necessary to specify that inmates lose only the right to freedom of free transit or others that are indicated in court, but do not lose the rest of their rights, among which appear quality education and adequate and consistent rehabilitation.

KEYWORDS: Reeducation, Resocialization, Rehabilitation and Reincorporation to society.

THE AUTHOR

I. INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario en nuestro país está caracterizado por ejecutar las penas privativas de la libertad a través del INPE y mantener a la población intramuros, además se caracteriza porque las cárceles peruanas no se encuentran adecuadas para que los reclusos cumplan con el fin de la pena como es la reeducación, rehabilitación, la resocialización para reintegrarse al seno de la sociedad, sino por el contrario viene a constituir una forma de especialización en el delito, porque el interno que emigra sale más desadaptado que cuando entró. Debiendo entender por “reeducación” al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad. En cambio la expresión “reincorporación social” nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado, originalmente considerado antisocial. Recuperación que implica la introducción en la sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Y la rehabilitación expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.

La investigación ha sido estructurada en tres capítulos claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí; teniendo su parte introductoria. El primer capítulo referido al Análisis del Objeto de Estudio, en donde se abordan temas precisos sobre la ubicación del objeto de estudio, el

surgimiento del problema, la manifestación y características del problema, así como aspectos metodológicos como la formulación de la hipótesis debidamente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como específicos.

El segundo capítulo de la investigación corresponde al MARCO TEÓRICO, estructurado en tres sub capítulos, el primero referido a la pena privativa de la libertad y los derechos fundamentales; el segundo sub capítulo aborda, los beneficios penitenciarios y el sistema penitenciario; el tercer sub capítulo abarca lo referente a la reeducación, rehabilitación y resocialización penitenciaria. De donde resulta que el marco teórico se encuentra estructurado por los diversos planteamientos doctrinarios tanto de autores nacionales como extranjeros que sirven de sustento a los fines de la presente investigación.

El último capítulo lo conforma el análisis y discusión de los resultados obtenidos de la recolección de datos proporcionados por el INPE y del Establecimiento penitenciario de Chiclayo, así como la aplicación de la encuesta innominada aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, tabulándose dicha información en cuadros y gráficos estadísticos, todo ello con la finalidad de contrastar la hipótesis y dar sustento a las conclusiones y recomendaciones; las cuales se ponen en consideración de la comunidad jurídica, local y nacional, para las críticas a que hubieran lugar.

Lambayeque, Febrero de 2018.

Abog. JORGE LUIS LARIOS MANAY

TESISTA

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN

1.1.1. Ubicación Geográfica

El objeto de estudio de la presente investigación se localiza sobre la problemática que sucede en el establecimiento Penitenciario de Chiclayo- ex Pisci del Distrito Judicial de Lambayeque, así como también en todos los centros penitenciarios a nivel nacional acerca de la aplicación del fin de la pena consistente en la reeducación, rehabilitación, resocialización y reincorporación a la sociedad al sentenciado a pena privativa de la libertad de carácter efectiva.

Ahora bien, al no cumplir con el fin resocializador de la pena, no se corresponde con la categoría jurídica de los derechos fundamentales, es decir que se vienen violando los derechos fundamentales del interno con el no cumplimiento del fin resocializador de la pena, siendo el Estado el obligado a proporcionar de las formas más adecuadas a través del régimen penitenciario para reeducarse, resocializarse, rehabilitarse y que al emigrar pueda reincorporarse satisfactoriamente al seno de la sociedad.

Directamente hablando, la presente investigación se desarrollará en el Instituto Nacional Penitenciario- Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, así como en la ciudad de Chiclayo con respecto a la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque.

1.1.2. Ubicación Temporal:

El objeto de estudio de la presente investigación se ubica en el actuar penitenciario del INPE- Establecimiento penitenciario de Chiclayo, durante el período comprendido entre los años 2011 a 2017 en el Distrito Judicial de Lambayeque.

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA

Con el presente trabajo de investigación abordaremos el tema relacionado a la problemática que se cierne en torno a la reeducación y rehabilitación de los internos que se encuentran reclusos en el centro penitenciario de Chiclayo, y su correlación con las doctrinas que desarrollan el contenido de los llamados Derecho Fundamentales, en tanto que es a través de la privación de la libertad que la sociedad busca reincorporar a una nueva persona a la que se le dan las oportunidades o el servicio público de la reeducación y la rehabilitación.

Actualmente se vive una situación de inseguridad social, por lo que de esta manera la ciudadanía pide enormes prestaciones al Derecho Penal, resultando que éste ha derivado progresivamente en penalizar conductas ilícitas, ubicándose entre las penas de “*mayor fuerza coercitiva*” la pena privativa de la libertad, la cual priva de la libertad ambulatoria a la persona, la misma que a través de su coerción, la persona termina reclusa en un centro penitenciario o comúnmente denominada cárcel, la cual viene a constituir el último escalón de la condición humana en la que puede llegar a caer una persona; empero, en lugar de que estos centros penitenciarios sirvan como centros para resocializar a los trasgresores de la ley penal y que al salir de ellos ya no vuelvan a delinquir, la realidad es totalmente diferente, ya que el recluso al salir de una cárcel egresa no precisamente resocializado y más por el

contrario, muestra mayores signos de violencia y desadaptación que antes de entrar en ellos. Así, la prisión constituye una forma de deshumanización de las personas, debido a muchos factores, como por ejemplo la incapacidad de los sistema de justicia penal en nuestro país, para hacer frente a la criminalidad que día a día crece de manera incontrolable y se hace mucho más fuerte, trayendo como consecuencia un debilitamiento de la justicia, la no credibilidad en las autoridades e instituciones penales encargadas de reducir la tasa de delincuencia e inseguridad jurídica en la ciudadanía.

Por otra parte, se tiene que entre los sectores sociales que con mayor frecuencia ve vulnerados sus derechos humanos es el de los reclusos en centros penitenciarios, justificada en la naturaleza de la represión penal, así como por el poco desarrollo doctrinal desde el punto de vista de los derechos humanos. De allí que, una de las mayores preocupaciones del investigador es la defensa de los derechos a la reeducación y rehabilitación de las personas privadas de libertad en el medio donde ejerce su labor cotidiana, es decir de aquellas personas que se encuentran en calidad de “*Reclusos*” en el Establecimiento Penitenciario de Pícsi, el mismo que se encuentra distribuido en tres pabellones: uno de varones comunes, otro de mujeres, y uno de máxima seguridad; a cargo del Instituto Nacional Penitenciario en el interior y en la parte exterior, custodiado por la Policía Nacional del Perú. Por su parte, la Constitución Política de 1993, si bien, no especifica a estos derechos como derechos fundamentales, Implícitamente si lo podría estar en el artículo 3°, cuando señala que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo “*de los derechos fundamentales no excluye los demás que la constitución garantiza, ni*

otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre". Es decir, por ser la libertad un derecho fundamental de vital importancia para el desarrollo integral de la persona humana.

De otro lado, se tiene que el Proyecto del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, señala que *"La responsabilidad de la sociedad y del Estado frente a las personas reclusas en un establecimiento no termina con la expedición del mandato de detención o la sentencia condenatoria firme, tal cual parece ser la concepción predominante. Debemos asumir que el problema penitenciario es parte de todo un sistema jurídico en el que gravita la política penal y judicial del Estado; la política de seguridad ciudadana y en general la seguridad interna del país, entre otros factores. Pero, paradójicamente, ante la sociedad y la opinión pública, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el gran responsable de todas las desgracias que asolan al problema carcelario; las instituciones del sistema cubren sus responsabilidades y debilidades a costa de dicha institución administradora de los centros penitenciarios"*. Aún cuando lo expresado, no exime de responsabilidad al INPE por contribuir con el caos que envuelve a todo el Sistema Penitenciario.

Todo acto contrario a ley y, materializado en agravio de estas personas privadas de su libertad atenta contra sus derechos fundamentales como son la dignidad, la vida é integridad personal, derecho a la familia, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la presunción de inocencia -Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa – y, otros; problemas evidenciados en el

hacinamiento o masificación, en las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, en el imperio de la violación, extorsión y corrupción, así como en la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos.

Recordemos que nuestro sistema penitenciario tiene una clara orientación positiva y se adscribe a la ideología del “*Tratamiento*”, en virtud a lo cual la imposición de una pena privativa de la libertad, tiene por finalidad la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, conforme a lo prescrito en la Constitución Política del Perú en su artículo 139º inciso 22 en lo referido al Régimen Penitenciario, donde regula: “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.

Del inciso antes mencionado, se tiene que es un tema de debate para los criminólogos y para la ciencia penal, en general, suscitándose una vigente polémica, ya que en primer término, no se entiende bien si se refiere a la finalidad del régimen penitenciario o de la pena, que son dos aspectos distintos. Pues, el régimen penitenciario ha de entenderse como el conjunto de previsiones estatales para la readaptación social de los penados. Mientras que la pena, en sentido lato, es sinónimo de castigo, de allí que resulte válido señalar que lo que se busca para un delincuente es con la imposición de una pena es, en primer lugar, el castigo, para luego reeducarlo.

Así de esta manera, debemos entender que el régimen penitenciario se basa en la necesidad de rescatar para la sociedad a quienes han delinquido, de allí se explica la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Así lo establece

también el inciso 3) del artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Perú es suscriptor, donde señala que *“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento, cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”*. De igual manera y con el mismo temperamento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el inciso 6) del artículo 5º establece, quizá con mayor tecnicismo; *“Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”*.

En ese mismo margen de ideas, es necesario señalar que la realidad de las cárceles peruanas es muy triste y a la vez denigrante para los internos; de allí que se haya sostenido con acierto que, en su estado actual, este deviene en el último eslabón en la que puede caer un ser humano, porque el hombre en lugar de corregirse o rehabilitarse para su reinserción a la sociedad y ya no vuelva a delinquir, sucede todo lo contrario, puesto que ésta sale de un centro penitenciario mucho peor de lo que entró, es en otras palabras por decirlo así, un *“centro de perfeccionamiento delincuencia”*, cumpliéndose así con una reeducación inversamente proporcional a la señalada para la educación penitenciaria orientada a la reincorporación a la vida útil en sociedad, ya que los internos que egresan de los penales salen algo capacitados en aspectos de *“como se debe robar para que no te capturen”*, *“como pasar droga sin que la policía te descubra”* u *“organizarse mejor y hacerse más fuertes para delinquir”*, etc.

Entonces debemos entender que desde el mismo momento en que una persona - sin distinción de género- es recluida en un establecimiento carcelario, nacen para él ó ella ciertos derechos que no pueden ser desconocidos bajo ningún pretexto,

porque constituye mandato de Ley, imperativos morales, fundamentales aspectos del debido proceso, acatamiento a pactos internacionales, pero en primer lugar, a que se le garanticen y protejan los derechos humanos, ya que todo sindicado privado de su libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a todos los derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos; a ser atendido o visitado por un médico oficial y en su defecto por uno particular, cuando lo necesite; a tener una adecuada alimentación, a que se le facilite todos los medios y oportunidades de ocuparse en el trabajo y el estudio; a tener un intérprete de su lengua, si lo necesitare y otros, todo lo cual se compendia en el respeto a su dignidad humana y al principio de humanidad, que requiere que mientras se decida la situación jurídica del recluso o interno, el tratamiento al que se le somete debe estar acorde con el más severo respeto a su dignidad humana, pues contemporáneamente, este principio conduce a la necesidad de disminuir cada vez más la presión individual y social constituida por la pena, de allí la preponderancia del principio de mínima intervención y la urgencia de descriminalizar, despenalizar, desprisionizar, etc.

Por lo que de esta manera, nos formulamos las siguientes interrogantes: ¿existe una adecuada política educativa penitenciaria?, ¿El INPE, cumple eficientemente con sus funciones de reeducar al interno?, ¿Los internos al salir de un establecimiento penitenciario muestran su readaptación en la sociedad?, ¿Qué niveles de enseñanza muestran los internos al momento de emigrar de un reclusorio penitenciario?, ¿Qué tipo de inversión(Estatal o privada) se viene dando actualmente, para la educación de los internos?, ¿en que medida la situación

carcelaria de los internos afecta su educación y rehabilitación para su reinserción en la sociedad?.

1.2.1. Planteamiento del Problema

¿Se corresponde con la categoría jurídica de los Derechos Fundamentales el fin resocializador de la pena, y como tal llega a constituirse en una obligación ineludible que el Estado debe proporcionar a los privados de libertad a través del régimen penitenciario?

1.2.2. Justificación del estudio del problema a investigar

A nivel temático, la investigación se justifica porque permite profundizar las doctrinas a nivel de los derechos fundamentales del interno como son la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación en la sociedad. Así también, es de vital importancia el tratamiento educacional, ya que en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, debido a las deficiencias, tanto materiales como de política penitenciaria, no permite que el interno reciba una adecuada reeducación, rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad. Siendo que el nivel de desarrollo que cumple ésta área es casi nulo, en gran parte, debido al desamparo estatal en cuanto a la asignación de recursos económicos necesarios.

La presente investigación tiene como finalidad medir el grado de eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y judiciales, respecto del tratamiento de la educación de los reclusos en el centro penitenciario de Chiclayo, como medio resocializador integral que reciben los internos; planteando alternativas de solución a los problemas derivados de la encarcelación en los Centros Penitenciarios del País. Estableciendo, de igual forma, la importancia que la

educación proporciona a las personas privadas de su libertad y como medio fundamental para lograr su rehabilitación, para que ya no vuelvan a reincidir o vuelvan a delinquir y su reincorporación a la sociedad.

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

La investigación se manifiesta a través del estudio de como se viene efectuando el fin de la pena en el establecimiento penitenciario de Chiclayo-ex Picsi, es decir como se viene dando la reeducación, la rehabilitación, la resocialización para lograr que el condenado a pena privativa de la libertad pueda reincorporarse satisfactoriamente al seno de la sociedad.

El problema materia de estudio se caracteriza porque no sólo se produce en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, sino también en todos los centros carcelarios del país, los mismos que según los estudios y de conocimiento general se encuentran inmersos en un mar de problemas y donde con mayor notoriedad de ven vulnerados los derechos fundamentales de las personas, representado en los internos a través de mala o casi nula reeducación, rehabilitación y resocialización que recibe el penado a pena privativa de la libertad.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

1.4.1. Formulación de Hipótesis

1.4.1.1. Hipótesis:

“Si se proporcionaran los fundamentos teóricos doctrinarios para que, los derechos en la vida cotidiana del Interno como a la Reeducación, Rehabilitación y Reinserción social, guarden concordancia con los postulados doctrinarios de los Derechos

Fundamentales de obligatorio cumplimiento por parte del Estado; ENTONCES, se lograría el respeto pleno de los derechos del privado a la libertad ambulatoria, así como el cumplimiento de los fines resocializadores de la pena”.

1.4.1.2. Identificación de Variables:

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos:

A. Variable Independiente:

Concordancia de la doctrina entre los derechos en la vida cotidiana del Interno como a la Reeducación, Rehabilitación y Reinserción social y los postulados de los Derechos Fundamentales de obligatorio cumplimiento por parte del Estado.

B. Variables Dependientes:

- Respeto pleno de los derechos del privado a la libertad ambulatoria, en tanto ser humano digno de protección estatal.
- Cumplimiento de los fines resocializadores de la pena.

1.4.2. OBJETIVOS

1.4.2.1. Objetivo General

Proporcionar los fundamentos teórico-doctrinarios para que los derechos en la vida cotidiana del interno, a la reeducación, la rehabilitación y reinserción social sean considerados como Derechos Fundamentales de obligatorio cumplimiento por el Estado.

1.4.4.2. Objetivos Específicos:

1. Analizar desde la óptica constitucional los Derechos del Interno a la Reeducación, Rehabilitación y Reinserción social como fines resocializadores de la pena.

2. Identificar los fundamentos teórico-doctrinarios para que los fines resocializadores de la pena sean considerados Derechos Fundamentales.
3. Determinar cuáles son los derechos de los privados a la libertad ambulatoria que se ven más disminuidos o afectados por el sistema penitenciario peruano, en el establecimiento penitenciario de Chiclayo.
4. Establecer el grado de eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y judiciales, respecto del tratamiento educativo como medio resocializador integral que reciben los internos.
5. Precisar el porcentaje de reclusos que emigran del establecimiento penitenciario de Chiclayo que hayan recibido talleres educativos.

1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica

- a. **Área de estudio:** Dimensión Praxiológica
- b. **Nivel Epistemológico:** Valoración.
- c. **Tipo de Investigación:** Teórica, cuantitativa y cualitativa.

1.4.4. Delimitación de la Investigación:

- a. **Espacial:** Provincia de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque.
- b. **Temporal:** El periodo de investigación abarcará desde los años 2011 al 2017, como referentes para la presente investigación.
- c. **Cuantitativa:** Total de datos estadísticos ubicados en el centro penitenciario de Chiclayo.
- d. **Cualitativa:** Valoración los diversos aspectos, fácticos y normativos, que se llegan a presentar en el penal de Chiclayo con respecto a la educación que reciben los internos.

1.4.5. Métodos y Técnicas

- A. Métodos:** Entre los métodos tenemos: Inductivo-deductivo, exegético, analítico, sintético, descriptivo-explicativo, dogmático.
- B. Técnicas:** Tenemos: la Observación, Bibliográficas, documental, fichaje y encuesta, estadística descriptiva.

1.4.6. Población de Estudio

Los datos concernientes al problema de investigación planteado se recopilaron del centro penitenciario de Pícsi- Chiclayo de cuyo lugar, sobre la reeducación, resocialización, rehabilitación de los internos entre los años 2011 al 2017, además, se recopilarán los datos estadísticos contenidos en sus archivos o legajos copiadores de datos. Así también, la población o universo será determinada por el bloque de Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, en cuanto a su opinión referente del tema en un total de 5000 personas

1.4.7. Muestra de Estudio

Se aplicará un porcentaje necesario para la recopilación de datos estadísticos provenientes del INPE- establecimiento penitenciario de Chiclayo entre los años 2011- 2017. Así también, se aplicará el 5% del total de la población, es decir 250 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la opinión de la reeducación, resocialización, y rehabilitación del penado a pena privativa de la libertad que reciben en los establecimientos penitenciarios.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

SUB CAPÍTULO I:

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES

1. LA CATEGORÍA DE LA LIBERTAD

La libertad por si mismo, es un bien inestimable del hombre, es un derecho humano tan igual o mejor que la vida misma. Se ha dicho que la vida sin el ejercicio de la libertad, en alguna de sus manifestaciones o vertientes, no es vida.

Al respecto, el profesor FERNÁNDEZ SESSAREGO (1998) sostiene que:

El derecho a la libertad está radicalmente ligado al derecho a la vida desde que esta es una experiencia de libertad dentro de los condicionamientos propios a que está sujeto el ser humano, tanto de aquellos provenientes de su propio mundo personal como por los que tienen su origen en el nivel histórico y en la circunstancia social en que le toca vivir (p, 41).

Por su parte, ROY FREYRE (1986), inspirado en la filosofía de Nicolai Hartmann, afirma que:

La libertad es la facultad de ordenar nuestro comportamiento, tanto del mundo del ser como del deber ser, de acuerdo con una previsión causal y una estimación valorativa de las acciones que por interesar al individuo y a sus semejantes, han merecido reconocimiento tácito o expreso del derecho (p, 248).

SALINAS SICCHA (2008) entiende que:

La libertad viene a ser una categoría entendida como la capacidad que tiene todo ser humano para elegir, decidir, vivir y pensar como a bien tenga, sin coacciones de algún tipo (libertad individual). Asimismo, es la capacidad que tiene un grupo de

personas para organizarse y realizar determinadas actividades en común (libertad social). La libertad es pura decisión o elección, siendo que por esta se escoge ser, decidimos hacer tal o cual cosa, mas la decisión se pone en marcha con la conducta y tiene que luchar contra las resistencias, sucumbiendo ante ellas, pacta o las vence (p, 428).

En palabras del profesor PEÑA-CABRERA FREYRE (2010), la libertad es

Un cúmulo de conceptos, puesto que no es factible dotar de un contenido específico, a un bien jurídico de tanta envergadura, con ello aludimos, a la libertad de elegir a los gobernantes y de salir elegidos, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de domicilio, a la impenetración de las comunicaciones privadas, al respeto a la intimidad, a la libertad de creación, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, etc., tal como se desprende del artículo 2° de la ley fundamental. En consecuencia, la Libertad se erige como un verdadero sistema, que agrupa una serie de subsistemas, que, en el caso de la ordenación punitiva, el legislador ha pretendido dotar de un nivel marco, comprendiendo en su seno, una serie de subespecialidades si se quiere decir de algún modo (p, 459).

2. CONCEPTO DE LIBERTAD

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1°, prescribe que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; y, en su artículo 3°, regula que “Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona”.

En consecuencia, pues, la Declaración Universal enfatiza en su artículo 1° la

libertad y la igualdad y las pone en el nivel de la dignidad humana y de sus derechos. Añade la responsabilidad de comportarse fraternalmente con los demás que es un principio aplicable a la sociedad internacional de Estados, pero también a cada sociedad nacional en particular. En el artículo 3° consigna la libertad y la seguridad de la persona.

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre tiene una disposición más escueta pero también recoge la libertad y la seguridad, en su artículo I: "Todo ser humano tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona".

En el ámbito nacional, la libertad puede ser descrita de dos formas: una es la jurídica y está contenida en el literal a) del inciso 24, del artículo 2° de la Carta Magna dice que consiste en que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

Al respecto, MUÑOZ CONDE (2001), expresa en un sentido amplio:

La libertad es un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere y no quiere y para trasladarse de un lugar a otro o situarse en sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas (p, 150).

El sostener la libertad como derecho humano tiene indeludiblemente estas dos consideraciones en la Constitución:

Es una norma de medios formales para garantizar que ninguna persona o autoridad con poder pueda limitarla más allá de la ley establecida específicamente en tal sentido.

Pero también debe ser correlacionada con otros derechos y principalmente con el del libre desarrollo contenido en el inciso 1 del artículo 2° de la misma Constitución y que muestra la necesidad de la realización de la persona. Libre desarrollo entendido en esta forma y libertad son dos derechos indeliguables que se apoyan uno al otro.

Modernamente la libertad ha sido especializada en muchas libertades de culto de tránsito de pensamiento de opinión de expresión de asociación de contratación etc. No hay que olvidar que todas ellas se reducen a un núcleo genérico como en que tiene el designio de dar al ser humano la libertad de actuar para realizarse mejor. Para comprender cabalmente a las especies es necesario no sólo mirar sus particularidades sino lo que tienen de común en el género.

3. EL DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL

El contenido de este derecho suele ser recogido doctrinariamente en términos negativos, dado que el reconocimiento del mismo surgió en un escenario de facultades ilimitadas del poder estatal, erigiéndose, así como una forma de límite ante actos abusivos e injustificados del Estado. Esta conceptualización negativa se proyecta aún hasta nuestros días, pues la protección de la libertad personal constituye una garantía frente a detenciones a cargo de agentes públicos, lo cual suele ser la razón por la cual aún el concepto de la libertad personal se encuentra identificado como el rechazo o exclusión de interferencias (GARCÍA MORILLO, 1995, p, 30).

Debemos entender el contenido de la libertad personal a la luz de que este derecho fundamental actúa como una concreción del principio de libertad. Dado este

panorama, se debe entender que la libertad personal no solo actúa en calidad de protección ante cualquier acto o pretensión de privación de la libertad, ya que comprende a su vez la libertad física y ambulatoria o de locomoción. Así pues, la libertad personal debe ser asumida desde una lógica de autodeterminación personal, en los alcances del artículo 2º, inciso 24, literal a) de nuestra Constitución Política, que admite que todo lo que no está prohibido se encuentra permitido; ya que la libertad personal incide precisamente en la capacidad de obrar y de actuar y de no ser obligado a realizar aquello que no nos agrade.

En el ámbito internacional, el derecho a la libertad personal se encuentra manifiestamente protegido, con lo que se reconoce su especial trascendencia y reafirma su calidad del vehículo para la concreción de otros derechos. Podemos advertir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9º inciso 1, recoge la prohibición para que ninguna persona se vea socavada en su derecho a la libertad personal por causas que no se encuentren fijadas por leyes o que no cumplan con los procedimientos diseñados por estas.

En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7º numeral 2, señala la misma prohibición y amplía la exigencia formal para validar una limitación del derecho a la libertad personal, al decir que las causas y las condiciones se encuentran “fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

En el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha contribuido en dotar de contenido a este derecho a través de su jurisprudencia, como lo expresado en la sentencia contenida en el expediente N° 019-2005-PI/TC: El derecho a la libertad

personal es un derecho Subjetivo, calificable como vital para un Estado social y democrático de derecho, que concretiza el valor libertad que se reconoce en nuestra Constitución como es el requisito necesario para el ejercicio de otros derechos (párrafo 11), garantizando que ninguna persona pueda ser sometida a una limitación o restricción de su libertad física o ambulatoria, siempre que esta sea arbitraria. A pesar de su condición esencial en un Estado democrático, señala en la sentencia contenida en el expediente N° 2496-2005-PHC/TC que: este derecho cuenta con límites que deben ser impuestos por la misma norma que lo reconoce, o por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o varios bienes jurídicos de carácter constitucional (párrafo 5).

4. DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO

La libertad de tránsito es un derecho que cuenta con reconocimiento constitucional e internacional. Tanto su contenido, características y límites se encuentran en la Constitución y en los Tratados sobre Derechos Humanos. De igual manera el Tribunal Constitucional ha identificado a través de su jurisprudencia los actos lesivos a este derecho, siendo uno de los casos más frecuentes la instalación de rejas metálicas en las vías públicas.

El derecho a la libertad de tránsito se encuentra reconocido en el artículo 2° inciso 11) de la Constitución de 1993 de la siguiente forma: “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 11. A elegir su lugar de residencia a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”.

Al interpretar los alcances de este artículo, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia contenida en el Expediente N° 3482-2005- PHC que la libertad de tránsito implica que toda persona:

Pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta que, en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer como o por donde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo o simplemente salida o egreso del país (Fundamento Jurídico 5, caso Luis Brain Delgado y Otros).

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12°) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22°) reconocen el derecho que tiene toda persona a circular libremente por el territorio de un Estado, a escoger libremente su residencia, a salir libremente de cualquier país y a no ser privado del derecho de entrar en su propio país. En consecuencia, pues, tanto el Pacto Internacional como la Convención Americana establecen un contenido similar sobre la libertad de tránsito al previsto en nuestra Constitución, no obstante, se debe resaltar que ambos tratados adicionalmente reconocen la garantía que tiene toda persona a no ser impedida de ingresar a su propio país.

Por otra parte, como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, sino que en su ejercicio se deben respetar otros derechos fundamentales o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Al respecto, la Constitución Política señala que la libertad de tránsito puede limitarse por

razones de sanidad, **mandato judicial** y por aplicación de la ley de extranjería, así RUBIO CORREA (1999) precisa lo siguiente:

- Las razones de sanidad se refieren al peligro de ingreso de enfermedades del exterior o por restricciones debido a epidemias de ocasión.
- El mandato judicial implica que el juez podrá restringir este derecho en ejercicio de sus competencias dentro de un proceso regular.
- La aplicación de la ley de extranjería se relaciona con el supuesto de expulsión de los extranjeros que incumplan las normas de ingreso o permanencia del país (p, 297).

5. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

5.1. Origen

La evolución del castigo a lo largo de la historia evidencia que, en su origen, predominó un condicionamiento de las sanciones frente a criterios puramente preventivos. En esta dirección, las sanciones penales han estado históricamente vinculadas a diferentes fases de desarrollo económico. Previo a la pena de prisión, tuvieron lugar y amplia difusión las penas corporales, cuya aplicación ha reconocido formas de lo más variadas, tales como: mutilaciones, azotes, torturas psíquico-físicas y otras penas atroces. En la actualidad, dado el reconocimiento de derechos y la proclamación del respeto a la persona y dignidad humana del condenado, no cabe admisión a ellas.

A fines del siglo VI, los métodos sancionatorios comenzaron a sufrir lentos pero profundos cambios, debido esencialmente al interés de explotar la mano de obra de los encarcelados. Este transcurso, no fue la consecuencia de un proceso de

humanización del castigo, sino el resultado de criterios económicos que valoraban que el cuerpo del recluso podía ser más útil en el desempeño de tareas, que en su función ejemplarizante.

En el origen de la prisión moderna, las Casas de Corrección, cuyos antecedentes se pueden encontrar en los siglos XVI, XVII y XVIII dirigidas a la explotación racional, no a la intimidación individual o colectiva, ni a la reeducación del sancionado, juegan un papel significativo, en tanto suelen considerarse los antecedentes más próximos de la pena privativa de libertad.

Estas casas, cumplían una función económica, pues formaban parte de la tendencia general de la necesaria acumulación del capital y ruptura del monopolio de los gremios para la creación y circulación del capital. En ellas se recluían a los pequeños delincuentes, con el propósito de hacerles trabajar en una actividad productiva a favor del Estado (ESPINOZA VELÁSQUEZ y MENGANA CASTAÑEDA, 2007, p, 15).

De esta forma, no es hasta el siglo XVI que comienza el proceso histórico que dará lugar en el XVIII a la consolidación de la pena privativa de libertad en su sentido actual. Hasta entonces, la historia de la humanidad reservó generalmente a la prisión funciones distintas, en especial, la de servir de custodia de quienes esperaban ser juzgados, la actual prisión preventiva.

Fue el pensamiento ilustrado, quien vino a descubrir la privación de libertad como una forma de pena racional y ajustada a las necesidades de un sistema penal más humano y basado en la proporcionalidad del delito y la pena. A pesar de que a la pena privativa de libertad se le acogió con tremendo entusiasmo, por cuanto supuso

un notable avance en el proceso de humanización de las sanciones penales, se pudo comprobar que los efectos nocivos físicos y psíquicos que produce sobre la persona que la sufre, son graves y múltiples. Tal como sostiene la doctrina, entendemos que la cárcel es dolor y sufrimiento, y la pena privativa de la libertad, el estadio más violento del derecho.

5.2. Concepto

La privación de libertad fue resultado de una evolución positiva; sin embargo la cruda realidad nos indica que la cárcel se ha convertido, de momento, en el castigo típico, en una sanción universal de los Estados socialmente más avanzados. Por lo que, se llega a la conclusión que “sí no podemos suprimir la pena privativa de libertad, entonces debemos mejorarla”. A ello apuntan los sistemas alternativos a la pena privativa de libertad regulados por las diferentes legislaciones del orbe.

En la actualidad, y pese a existir un Código de Ejecución Penal inspirado en la ideología del tratamiento y el humanismo, “la pena privativa de la libertad se ejecuta aún en ambientes donde reinan la anarquía, la promiscuidad, la explotación, la enfermedad y el hambre realidad tan cruel que convierte en sádica ironía las aspiraciones de reinserción social proclamadas en la Constitución Política del Estado, y en el Artículo I del Título Preliminar del C. E .P”. Siendo que, otro hecho que caracteriza a las cárceles del país, es que “aquellas se encuentran están hacinadas de presos sin condena, los cuales suman alrededor del 70 % de la población Penal” (SÁNCHEZ MORENO, 1998, p, 21).

Por lo que, cabe señalar que la pena privativa de la libertad es una pena que surgió como sustitutoria a la pena de muerte y con carácter más humana que la anterior

que consiste en privar del derecho fundamental a la libertad y recluirlo en establecimientos especializados. Pero actualmente, esta pena reina no ha cumplido con los objetivos resocializadores del penado y no se respeta sus derechos fundamentales.

6. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

En su origen, el consenso que construye la idea de los derechos fundamentales, parte de un disenso anterior sobre la situación de la Monarquía absoluta; siendo que el punto de partida será ese desacuerdo, y esa imposibilidad de desarrollar los planteamientos individualistas de la burguesía (PECES- BARBA, 1999, p, 138).

El término Derechos Fundamentales es de origen alemán (Grundrechte) y es utilizado por primera vez en la Constitución del 20 de Diciembre de 1848 aprobado por la Asamblea Nacional en la Paulkirche de Frankfurt (CHANAMÉ ORBE, 2007, p, 93).

Los derechos fundamentales fueron nombrados como “derechos individuales”, de acuerdo con la concepción del derecho natural, considerando que los hombres tienen facultades anteriores a la formación del Estado. En Francia, antes de la Revolución en 1770, se empezó a especular sobre el “*Droits fondamentaux*” que condujo directamente al establecimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 (CHANAMÉ ORBE, 2007, p, 101).

Los derechos fundamentales van más allá de la estructura conceptual tradicional del derecho subjetivo, las transformaciones cualitativas y condicionamiento del resto del ordenamiento jurídico y sistema social que propician hacen que estos derechos siendo fundamentales sean más que derechos subjetivos, particularmente porque

no se establecen de la lógica del funcionamiento del ordenamiento jurídico como todo derecho subjetivo, sino porque ellos establecen esa lógica que condiciona al resto del ordenamiento jurídico y social. Son pues mucho más que cualquier expectativa positiva o negativa asignada a un sujeto por una norma jurídica, tanto que basta ver en ellos no sólo su naturaleza de ser derechos subjetivos sino su carácter objetivo de valor, que da pie a un efecto irradiación, una eficacia frente a terceros o una concepción como mandatos de acción y deberes de protección.

7. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

El modelo peruano se caracteriza especialmente por otorgar a los derechos fundamentales una protección extraordinaria en el marco de la jurisdicción constitucional, siendo que, esta función de los tribunales constitucionales aparece, sin duda, íntimamente vinculada a la concepción del Estado que inspira esta constitución.

Los derechos fundamentales son reconocidos, igual que en la tradición del derecho natural como propios del individuo, previos e independientes de aquél (BACIGALUPO, 1999, p, 13). Por lo tanto, son derechos que limitan desde el principio la autoridad del Estado y operan como fuente de obligaciones del mismo. Un rasgo esencial de este sistema consiste en que el ejercicio de un derecho fundamental por un individuo no necesita justificación alguna, por el contrario, la limitación por el Estado de los derechos fundamentales tiene que ser justificada. Así como un individuo no se concibe sin una sociedad y un Estado, es claro que los derechos fundamentales pueden ser sometidos a limitaciones por parte del Estado y que en el ejercicio de esta función los poderes de éste pueden vulnerarlos.

PÉREZ LUÑO (1998), entiende que los derechos fundamentales son:

Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional (p, 46).

Los derechos fundamentales deben crear y mantener las condiciones elementales para asegurar una vida en libertad y la dignidad humana (HESSE, 2001, p, 89). En ese sentido, señala PRIETO SANCHIZ que los derechos fundamentales son: La traducción normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad (1992, p, 20).

El profesor nacional CASTILLO CÓRDOVA (2008) señala que los derechos fundamentales son:

Manifestaciones de valores y principios jurídicos que vienen exigidos necesariamente por la naturaleza humana, es decir la dignidad humana, libertad e igualdad. Son valores o principios que no tienen su existencia limitada al campo moral o axiológico, sino que trasciende de él y se instalan en el ámbito de lo jurídico, de modo que la sola existencia del hombre hace que sea exigible su reconocimiento y consecuente tratamiento como ser digno, libre e igual que es. Este reconocimiento y tratamiento es lo que es debido al hombre por ser hombre, es decir, es lo justo; y en la medida en que es lo justo, se hace igualmente debido y exigible (p, 6).

Para LUIGI FERRAJOLI, desde un punto formal, los derechos fundamentales son:

Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendido por derecho subjetivo cualquier

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status, la condición de un sujeto, puesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas o autor de los actos que son ejercicio de estas (p, 19).

SALDAÑA BARRERA (2005) los define señalando que:

Son elementos esenciales del Ordenamiento Jurídico de cualquiera que en rigor quiera denominarse un Estado Constitucional y tienen un doble carácter, son a la vez que derechos subjetivos (su dimensión o función subjetiva), elementos básicos para la comprensión de todo el ordenamiento jurídico, cuyo respeto y cumplimiento debe ser ineludible (su dimensión o función objetiva) (p, 37).

QUISPE CORREA (2007), entiende que los derechos fundamentales son:

Derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana (p, 89). Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano definiendo a los derechos fundamentales como “bienes susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en la sociedad (Expediente N° 0050-2004-AI/TC, fundamento jurídico 72), constituyendo componentes básicos estructurales del conjunto del orden jurídico-objetivo, puesto que son la expresión jurídica de un sistema de valores que informan todo el conjunto de la organización política y jurídica de la sociedad democrática y el Estado constitucional (Expediente N° 1042-2002-AI/TC, fundamento jurídico 2.2), siendo verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos.

8. CLASES DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

La clasificación más conocida de los derechos fundamentales es aquella que distingue las llamadas tres generaciones de los mismos, y el criterio en el que se fundamenta es un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos

8.1. Derechos de Primera Generación

Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales (En: <http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-primera-generacion-o-derechos-civiles-y-politicos>).

Estos derechos surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos, imponiendo al Estado respetar siempre los Derechos Fundamentales del ser humano (a la vida, la libertad, a la igualdad, etc.)

El fin primordial de estos derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades públicas. En este grupo se incluyen los derechos a la seguridad y a la integridad física y moral de la persona humana, así como también los derechos políticos en el más amplio sentido de la palabra, tales como el derecho a la ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del Estado.

Estos derechos son:

- Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.

- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
- Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
- Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
- En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
- Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
 - Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión
 - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.
 - Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

8.2. Derechos de Segunda Generación

La constituyen los derechos de tipo colectivo. En la primera mitad del siglo XX surgen estos derechos; concretamente, después de la segunda guerra mundial. Estos derechos se consagraron en la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, aprobada el 2 de mayo de 1948 y la “Declaración universal de los derechos humanos” proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Son aquellos derechos humanos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales hallamos el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales.

Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los Derechos Humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de la segunda generación.

La razón de ser de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos.

La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos.

En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral en relación con la distribución que hace el Poder Público de sus ingresos en razón de la justicia social.

Estos derechos son:

- Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
- Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
- Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
- Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
- Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
- La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

8.3. Derechos de Tercera generación

Se denominan derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El Profesor mexicano Héctor Fix-Zamudio los denomina derechos difusos y los define como aquellos “derechos subjetivos e intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales distribuidos en

varios sectores, y que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros”.

En este grupo se clasifican el derecho a la paz, el derecho a la calidad de los bienes, productos y servicios comerciales, el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho al espacio público, etc.

9. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Si para formular los derechos del hombre se partiera de una concepción del hombre como ser exclusivamente individual, entonces no habría inconveniente para que la formulación se realice en términos ilimitados y absolutos. Pero partir de tal concepción no solo supone un desconocimiento de la naturaleza humana al obviar su vértice social, sino que también implica la negación de una realidad: el hombre existe y desarrolla su vida con otros, en comunidad. Además, téngase en cuenta que los derechos del hombre deben ser expresados normativamente para tener relevancia jurídica, de modo que terminan insertándose en un ordenamiento jurídico constitucional que es el fundamento de las reglas o regulación que hace posible la convivencia humana.

De ahí que los derechos de la persona no pueden formularse en términos absolutos e ilimitados, sino que, por el contrario, su formulación debe partir de el hecho de que el contenido de los derechos es un contenido limitado, y que debe convivir con las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente como principios de la organización social.

Solo admitiendo que el contenido de los derechos no es ilimitado, puede hablarse de definición o determinación de los contornos del contenido jurídico de un derecho fundamental. Si esto es así, entonces toda actividad que recaiga sobre los mencionados derechos no puede ser una actividad limitadora del contenido de estos, sino que será una actividad delimitadora de las fronteras jurídicas que, de modo natural si se quiere, tiene todo derecho en su contenido. Y delimitar no es lo mismo que limitar. Por tanto, si bien el contenido del derecho es limitado, ese contenido no puede ser limitable de ningún modo por nadie –ni por el poder político ni por los particulares-, sino que sólo permitirá una actividad delimitadora de su contenido. En esto consiste la nueva definición de los llamados “*límites*” de los derechos fundamentales. Los límites dejan de ser intervenciones que influyen sobre su contenido y que provienen desde fuera del derecho mismo, para convertirse en unos contornos que debe ser sacados a la luz, exteriorizados y que son contornos que, por su propia naturaleza y concreta finalidad, tiene atribuido cada derecho, al cual le son immanentes.

Por otro lado, en una visión conflictivista de los derechos fundamentales, la colisión en la que incurren los derechos debe ser salvada mediante el trazo de límites desde fuera de cada de cada derecho mismo; incluso algún autor a escrito que “la colisión de derechos fundamentales se ha de entender como una problemática especial de la limitación de los derechos fundamentales”. De modo que en referencia a las posiciones conflictivistas, suele afirmarse que “los derechos no son ilimitados, esto es, que tienen límites, entendiendo principalmente por tales no sus propias

fronteras, sus contornos inmanentes o internos, sino ciertos factores externos de demarcación (SERNA y TOLLER, 2000, p, 13).

Los diferentes derechos cuentan con rasgos propios que limitan sus alcances. Por lo que, cuando se afirma que “determinar el contenido esencial es (...) mirar hacia los límites internos de cada derecho en litigio, hacia su naturaleza, hacia el bien que protegen, hacia su finalidad funcional; es atender a sus respectivos contornos y a sus esferas de funcionamiento razonable” (ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, 2000, p, 407).

En consecuencia, se puede decir que el problema de los límites de los derechos fundamentales, se convierte en un problema de delimitación del contenido de los mismos, el cual una vez definido no podrá ser limitado válidamente por el poder político en cualesquiera de sus manifestaciones, normativas o no.

SUB CAPITULO II:

BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y SISTEMA PENITENCIARIO

1. INTERNOS

1.1. Concepto

Los internos son las personas que por el hecho de haber cometido un hecho que se encuentra tipificado como delito por el Ordenamiento jurídico Penal, son privadas de su libertad, y confinadas en una prisión, en donde “viven y trabajan separados de la sociedad todos los aspectos de sus vidas se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad”, los *reclusos* “son otro pueblo en un mismo pueblo que tienen sus hábitos, sus instintos, sus costumbres aparte”. En ese mismo sentido OSORIO señala que interno es el Condenado por sentencia a una pena privativa de libertad que cumple en local penitenciario (2005, p, 764).

Por nuestra parte podemos señalar que interno, es aquella persona que por trasgredir a la ley penal, es recluido en un centro penitenciario privándolo de su libertad personal o ambulatoria o de libre tránsito.

1.2. Conducta Criminal

La conducta criminal se distingue de la conducta desviada. Lo que se considera “desviado” depende de las normas vigentes reconocidas; no existe conducta desviada si no hay una norma de conducta; pero el ámbito normativo es difuso y poco preciso. En el fondo, sólo las “normas” técnicas o, en su caso, estadísticas carecen de significación, ya que este tipo de normas no necesitan una estabilización contrafáctica, pues ni se infringen ni se corrigen. En cambio, las normas que sirven de base al concepto de desviación son “contrafácticas”, es decir, su infracción no

sólo no las conmueve, sino que incluso, al ser sancionada, sale reforzada su vigencia (MUÑOZ CONDE, 1989, p, 52).

La Criminología no sólo incluye la criminalidad, sino todo lo que entra dentro del concepto de conducta desviada, como por ejemplo drogodependencia, enfermedad mental, suicidio, desviaciones sexuales. La investigación criminológica y, en general, sociológica de las normas, sus infracciones y sanciones, se ve así enriquecida al incluir fenómenos más allá de los característicos de la conducta punible, ya que en cualquier ámbito de nuestra vida se encuentran situaciones y roles normativamente regulados.

La desviación, el delito y la criminalidad son considerados como fenómenos condicionados por factores científicamente investigables. La eliminación estratégica o cualquier otro tipo de modificación de tales factores influyen, según este planteamiento, también en la conducta desviada. La nueva Criminología, que se denomina a sí misma como “interaccionista” (“labeling” o “social reaction approach”), hace, en cambio, del concepto de desviación su preocupación fundamental, aunque naturalmente de un modo diferente a como lo hace el Derecho Penal con el concepto, de delito.

Las aportaciones de esta “nueva” criminología podrían resumirse en estas palabras: la criminalidad no “existe”, sino se “hace”. Su punto de partida es que las cosas - entendiéndose como tales también las normas y sucesos sociales como la criminalidad- no existen fuera de su aprehensión, y que todo es producto de una convención o constitución (intra) personal. Estas convenciones o constituciones

tienen vocación de permanencia y no pueden ser revocadas espontáneamente, hasta el punto que una vez estabilizadas se convierten en instituciones sociales.

1.3. Teorías Psicoanalíticas de la criminalidad: Dentro de estas tenemos:

a. Teoría Freudiana: Estas teorías tienen sus raíces en el postulado freudiano de la neurosis y en la aplicación que ha hecho de ella el mismo Freud para explicar ciertas formas de comportamiento delictivo (BARATTA, 2004, p, 44).

Según Freud, la represión de los instintos delictivos a través de la acción del superyó no destruye estos instintos, sino que deja que se sedimenten en el inconsciente. Ellos se ven, sin embargo, acompañados en el mismo inconsciente por un sentimiento de culpa, una tendencia a confesar. Precisamente con el comportamiento delictivo el individuo supera el sentimiento de culpa y realiza la tendencia a confesar. Desde este punto de vista, la teoría psicoanalítica del comportamiento criminal representa una radical negación del tradicional concepto de *culpabilidad* y, por tanto, también de todo derecho penal basado sobre el principio de culpabilidad.

b. Teoría de Theodor Reik: Sobre la aludida teoría freudiana del “delito por sentimiento de culpa”, Theodor Reik funda una teoría psicoanalítica del derecho penal basada en la doble función de la pena, siendo ala primera, que la pena sirve a la satisfacción de la necesidad inconsciente de castigo que impulsa a una acción prohibida; y, la segunda que, la pena satisface también la necesidad de castigo de la sociedad mediante su inconsciente identificación con el delincuente. El efecto catártico de la pena y el proceso de identificación de la sociedad con el delincuente son los dos aspectos de una teoría psicológica del derecho penal según la cual las

dos concepciones fundamentales de la pena, la concepción retributiva y la preventiva, no son sino racionalizaciones de fenómenos que hunden sus raíces en el inconsciente de la psiquis humana. En efecto:

1. La teoría retributiva encuentra su correspondencia en los autocastigos inconscientes que hallamos entre los neuróticos y que están reguladas por la ley del talión: “Desde este punto de vista la teoría de la retribución es psicológicamente consecuente, pero contradice los progresos de la cultura y de la humanidad. La retribución como fin de la pena es simplemente la representación de un impulso, transformada en teoría.

2. Las teorías de la prevención acentúan la función de la pena ante la sociedad (prevención general) y ante el autor de un delito (prevención especial).

c. Teoría de Staub y Alexander: Staub y Alexander enriquecen la teoría psicoanalítica de la sociedad punitiva con dos temas: El primero, de estos temas, es una variación del fundamental principio freudiano de la identidad de los impulsos que mueven al delincuente y a la sociedad en su reacción punitiva. Este principio es transportado ahora a las características psicológicas generales del mundo de los delincuentes y de las personas que encarnan los organismos del sistema penal. Hay entre estas personas una afinidad que en general se explica con la presencia de fuertes tendencias asociales no suficientemente reprimidas, las cuales impulsan a las personas pertenecientes al segundo grupo a un diligente ejercicio de la función punitiva (BARATTA, 2004, p, 48).

Con este tema, el ámbito de aplicación de la teoría de la sociedad punitiva se desplaza, en cierto sentido, de la sociedad en general, es decir de la reacción no

institucional, a la institucional y se individualiza en las personas que se encuentran a su servicio (jueces, policías, verdugos, agentes de custodia).

La pena adquiere, un significado de recompensa por la renuncia al sadismo; este mecanismo de identificación con la sociedad punitiva lleva a la disminución de la cantidad de agresiones que deben ser inhibidas y, por consiguiente, a un aligeramiento de la labor de inhibición. La identificación se ve favorecida por el carácter ritual y espectacular de los procedimientos judiciales y en particular por la ejecución de la pena capital.

d. Teoría de Paúl Reiwald, Helmut Ostermeyer y Edward Naegeli: Un mecanismo de proyección similar al que se verifica en la mentalidad primitiva, y que lleva a la representación de las fuerzas demoníacas hostiles en las cuales quedan transferidas las propias agresiones, explica cómo la sociedad punitiva, separándose, como el bien del mal, del sujeto delincuente, transfiere a él las propias agresiones. La pena no basta, observa Helmut Ostermeyer, para descargar todas las agresiones reprimidas. Una parte de ellas es transferida al exterior, a otros individuos, por medio del mecanismo de proyección. Reiwald también pone en relación con este mecanismo de proyección la función de la Literatura y de los filmes sobre crímenes. Es el mismo mecanismo de la alarma social suscitado por la representación de los crímenes a través de los mass media, que por intermedio de la fantasía lleva a los miembros de la sociedad a proyectar las propias tendencias asociales en figuras de delincuentes particularmente temibles o en tipos de sujetos desviados. Fenómenos similares son estudiados por la literatura anglosajona

respecto a la representación que los mas media han dado de grupos marginales, por ejemplo de los *rockers*, y de su peligrosidad social.

2. CÁRCELES

El término cárcel también es conocido como prisión, establecimiento penitenciario, hacinamiento penitenciario, etc. En sentido amplio, quiere decir un edificio o local destinado para la custodia y seguridad de los presos. Dentro de ese concepto genérico, existen otras denominaciones, relacionadas con los locales destinados a la reclusión de delincuentes o presuntos delincuentes. Corrientemente se llama cárcel la destinada a las detenciones preventivas (cárceles de encausados) o al cumplimiento de penas de corta duración, y prisión o presidio, los lugares en que se cumplen condenas más graves. La estructura y distribución de las cárceles, presidios y prisiones varía no solo según su destino, sino también según el sistema penitenciario adoptado (OSSORIO, 2005, p, 143).

La prisión, como institución destinada a la ejecución de la pena privativa de libertad, es la última instancia de los órganos de control administradores de justicia dentro de los aparatos del Estado. Por lo tanto, aunque sus funciones puedan revestir un objetivo de castigo o de resocialización, siempre comportarán un carácter político; y además su actuación está inscrita en la trayectoria común del conjunto que forran las instancias de control. Más concretamente, la función de la cárcel reviste las mismas premisas ideológicas que están presentes e informan a las demás instancias, formales e informales, por lo que en la cárcel entran en juego las mismas pautas de actuación de estas instancias, cuya ideología se inscribe en las normas del consenso como opción política de corte liberal-autoritario, modelo en el que se

ha estructurado el Estado democrático actual para paliar las crisis de legitimidad que afronta.

La cárcel, como toda institución social, es una creación propia del modelo económico y social, y por tanto, no es ni un mal necesario, ni algo inevitable, sino simplemente, una realidad fabricada históricamente que hemos de situar dentro de las estructuras políticas de la sociedad encargadas de funciones básicas - todas ellas relacionadas con la reproducción de las relaciones sociales - de legitimación, organización y control de la vida social (TORIBIO BARBA, 2005, p, 147).

Finalmente, somos de opinión que las cárceles son establecimientos destinados a que los penas a pena privativa de la libertad efectiva cumplan su pena privados de su libertad en lugares acondicionados para ello.

3. SISTEMA PENITENCIARIO

3.1. Concepto

El Sistema Penitenciario es la organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones penales (penas y medidas de seguridad) que importen privación o restricción de la libertad individual como condición sine qua non para su efectividad. Por tanto el Sistema Penitenciario supone una organización y estructura coherentes, con fines y metas claros, bajo cuya orientación subyacen o pueden primar determinadas teoría o principios penitenciarios.

En este contexto JULIO ALTMANN (1962) señala que:

En el terreno penitenciario, Sistema es la reunión ordenada de las modernos principios de la Ciencia Penitenciaria aplicados a una determinada realidad,

debiéndose considerar factores como el lugar, la época, los medios materiales y culturales del país en donde se le hará funcionar (p, 29).

Por su parte, LÓPEZ REY indica que:

El sistema es el conjunto de reglas y principios mas o menos efectivos cuyo objeto es indicar como debe ser llevado a cabo el fin asignado a la función penal (1975, p, 492).

El Sistema Penitenciario viene a ser la organización general que, en materia penitenciaria, se adopta en un país determinado; organización general que sigue diversos criterios y dentro del cual quedan dos o más regímenes penitenciarios, por que difícil que en una determinada realidad nacional sea suficiente en un solo régimen de ejecución penal para la multiplicidad de personalidades delictivas condenadas, lo que hace imprescindible que se adopten varios regímenes en función a dicha diversidad.

En resumen, dentro de un Sistema Penitenciario Nacional se incluyen varios Regímenes, generales y particulares; y dentro de cada régimen es posible que se apliquen diversas formas de Tratamiento Penitenciario.

3.2. Caracteres

El sistema Penitenciario implica elementos subjetivos: “los integrantes de la profesión penitenciaria”; y objetivos: los datos del tratamiento: educación, trabajo, atenciones de salud, relaciones con el exterior, etc. siendo el tratamiento individualizado e interdisciplinario. Debe existir un régimen de clasificación: por una parte, separación entre procesados y sentenciados, varones y mujeres, adultos y menores de edad; por otra, instituciones adecuadas, según categorías (no penales,

necesariamente; criminológicas y penitenciarias) a esto corresponden los establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, las colonias y los campamentos penales, los hospitales psiquiátricos y para infecciosos, y las instituciones abiertas (GARCÍA RÁMIREZ, 1990, p, 87).

Según estos criterios existen variedades de sistemas conforme a las características que cada Estado imprima a su organización penitenciara. Sin embargo no sólo basta la existencia de la organización coherente, todo un aparato administrativo penitenciario, sino que para ello es importante contar con el personal idóneo para poner en marcha tal sistema. En países donde no existe un real sistema penitenciario, ni se cuenta con un mínimo de recursos humanos idóneos, no es suficiente contar con buenas leyes de ejecución pues pueden quedar como meros enunciados.

El sistema encargado de la cuestión penitenciaria nacional, para llevar a cabo los propósitos para los que existe, debe delinear acciones a corto, mediano o largo plazos, y para ello es necesario un Diagnostico Penitenciario completo en sus diversos aspectos; ya que en base al conocimiento previo en que se halla la realidad penitenciaria, recién se podrán delinear los objetivos y metas, así como las medidas adecuadas para hacer efectiva una política penitenciaria que modifique las estructuras y costumbres negativas de dicha realidad. En caso contrario, el desconocimiento de los problemas existentes, puede ser un obstáculo que impida el cumplimiento de un adecuado plan Penitenciario Nacional que haya obviado el diagnóstico.

Los planes adoptados por el Sistema Penitenciario, deben partir de un análisis integral de la realidad penológica nacional, tanto en los aspectos materiales (económicos y de infraestructura), humanos, legales y de todos los aspectos ligados a esta problemática, lo que debe servir para delimitar la política Penitenciaria del Sistema, precisando sus objetivos y metas para su logro a corto, mediano o largo plazos.

3.3. La Orientación Ideológica de la Ejecución Penal en el Perú

El sistema penitenciario nacional tiene como elemento esencial el tratamiento, pues pretende la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, tal como lo establece el artículo 60° del Código de Ejecución Penal. El tratamiento penitenciario puede ser individualizado o grupal, y consistirá en el empleo de métodos médicos, biológicos, sicológicos, siquiátrica pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno.

Desde la perspectiva de las teorías de la pena, es evidente que dicha legislación tiene una clara orientación preventiva especial, pues se propone como objetivo central evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. Tal como lo recuerda Felipe Villavicencio, en la historia del derecho Penal se registran distintas versiones de la prevención especial, aunque la influencia más poderosa la tuvo la escuela sociológica encabezada por Franz Von Listz, quien señaló que el derecho penal tenía como fin la función preventiva especial de la pena en base a la intimidación, corrección e inocuización (VILLAVICENCIO TERREROS, 2006, p, 63).

A decir de ENRIQUE BACIGALUPO (2004), a partir de la década de los 60:

Los lineamientos de la prevención especial experimentaron una nueva transformación de su fisionomía, pues las clasificaciones de delincuentes que habían guiado la definición de los fines preventivo-individuales de la pena fueron abandonadas y dieron paso a conocimientos pedagógicos sociales mucho más evolucionados. En primer lugar, el fin de la pena se definió de manera uniforme a través del concepto de resocialización. En segundo lugar, se procuró dar cabida, a las consideraciones que ponían de manifiesto la corresponsabilidad de la sociedad en el delito, abandonando el causalismo antropológico y biológico de la época anterior, cuyo déficit de verificación empírica lo hacía científicamente insostenible. En tercer lugar se subrayó la importancia de la ejecución penal basada en la idea del tratamiento (p, 35).

La prevención especial ha sido objeto de diversa crítica. La más importante radica en la esencia misma de su propósito, cual es la resocialización del penado. Así, se afirma que es absolutamente indemostrable el presupuesto de la resocialización, no sólo porque el cumplimiento de los fines preventivos-especiales demanda recursos que la administración penitenciaria no tiene, sino especialmente por la gran contradicción que significa pretender reeducar a una persona para vivir en libertad, manteniéndola en una prisión.

Sin duda, este último aspecto resulta fundamental, pues la cárcel no es precisamente el mejor escenario para modificar conductas ni enseñar valores. Todo lo contrario, son centros reproductores de violencia y capacitación en el delito, que en ocasiones causan un deterioro indeleble en la personalidad del interno. Por ello, Prado Saldarriaga sostiene que la pena es, ha sido y sigue siendo en nuestro país,

sólo prevención general negativa o mera retribución (PRADO SALDARRIAGA, 2000, p, 40).

Sin duda, el buen propósito del tratamiento se hace más complejo aún si tenemos en consideración que desde hace muchas décadas, nuestro sistema penitenciario enfrenta una crisis aguda en diversos ámbitos. Altos niveles de sobrepoblación que en ocasiones exceden el 350% como es el caso del penal de Lurigancho, elevado número de presos que alcanza al 69% a nivel nacional, mal estado en la infraestructura de casi el 80% de los establecimientos penales, bajo presupuesto, preocupantes niveles de corrupción y limitada capacitación del personal penitenciario, que han llevado a una situación objetivamente contraria al principio constitucional de resocialización (PEDRAZA SIERRA, 2007, p, 40).

De otro lado, no se trata de las posibilidades materiales de la administración penitenciaria, sino del cuestionamiento de la concepción ideológica de la teoría, pues a la luz de los resultados empíricos no se ha podido demostrar su materialidad en hechos tangibles. Sin duda, resulta una paradoja convertir un recinto carcelario en un centro formador o reformador de hombres para la vida en libertad.

Sin embargo consideramos que la prevención especial positiva continúa siendo la respuesta penal más democrática a la finalidad de la pena. Wilfredo Pedraza proporciona una nueva perspectiva que el tratamiento a los internos debe formularse sobre la base de los siguientes ejes: tratamiento sólo a quienes lo necesiten; Rigurosa clasificación de internos; Separación de internos en grupos homogéneos; fortalecimiento del vínculo familiar del interno; Implementar acciones de protección de los grupos más vulnerables de la población penal a través del

acceso preferente a los servicios; Actividades laborales y educativas en perspectiva productiva y de profesionalización; Práctica continua de actividades deportivas, sociales o culturales masivas; Política de apertura de las prisiones a la sociedad civil; Prohibición de traslados intempestivos de internos; respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (PEDRAZA SIERRA, 2006, p, 12).

3.4. Criterios de clasificación de internos para determinar el penal de destino

Desde la perspectiva de un interno, la determinación del lugar de su reclusión es una de las decisiones más trascendentes de la administración penitenciaria, pues de ella dependerán sus condiciones de vida mientras dure su internamiento.

Ahora bien, un mandato de detención no sólo constituye una limitación a la capacidad locomotiva del afectado, sino que representa un anormal sistema de vida, no solo por las limitaciones y rigores que naturalmente origina el encierro, sino especialmente porque el detenido deberá enfrentar y convivir con otro aspecto cotidiano de la vida carcelaria: la violencia interna que esta presente en mayor o menor grado en todo establecimiento penitenciario, y que puede constituir un peligro concreto y permanente para la integridad personal o la vida del privado de libertad. Evidentemente, no es igual estar detenido en el penal de Lurigancho, pues las condiciones de vida y el nivel de violencia interna en ambos recintos son absolutamente opuestos.

Por otra parte, la Junta Técnica de calificación es un órgano que actúa con total autonomía. Los profesionales que la integran deberán evaluar individualmente al interno y asignar un puntaje al concluir su examen. Finalizado el proceso, se

sumarán los puntajes asignados por los tres profesionales, obteniéndose un ponderado que finalmente determinará el penal de destino del privado de libertad.

Ahora bien, el artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que la determinación del establecimiento penal de destino se deberá realizar conforme los criterios señalados en el artículo 46° del citado reglamento, que promueve la conformación de grupos homogéneos diferenciados a partir de los siguientes criterios de clasificación: varones de las mujeres; sentenciados de los procesados; primarios de los que no son; menores de 21 años y mayores de 60 del resto de internos, los fácilmente readaptables de los de difícil readaptación, los extranjeros de los nacionales, los alcohólicos y toxicómanos de los que no son, entre otros criterios.

En la práctica, en el proceso de asignación del penal de destino, tiene especial relevancia la condición de primario o reincidente, y prioritariamente, el tipo de reincidente, y prioritariamente, el tipo de delito cometido, así como el número de ingresos al sistema penitenciario. Estos dos últimos criterios se encuentran en la directiva de clasificación que cotidianamente utiliza la referida junta técnica.

3.5.El Régimen del Interno en el Régimen Penitenciario

Teniendo en cuenta los diversos tipos de penas establecidas por el Código Penal peruano, podemos apreciar diversas modalidades de ejecución penal, en función a las particularidades de tales sanciones, como son:

- Ejecución de las penas Privativas de la libertad,
- Ejecución de las penas Restrictiva de libertad,
- Ejecución de las penas Limitativas de derechos, y

- Ejecución de la pena de Multa.

De todas ellas, el Código de Ejecución Penal encarga al Instituto Nacional Penitenciario la ejecución de las tres primeras, así como las medidas de seguridad, pero fundamentalmente de las penas privativas de la libertad. El régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, ha logrado mayor desarrollo debido a que esta modalidad de sanción penal es la que prácticamente originó el surgimiento de la Ciencia Penitenciaria y luego del Derecho Penitenciario o de Ejecución Penal, debido al tiempo que demanda de su ejecución. Por ello, gran parte del Código de Ejecución Penal está centrado en regular la ejecución de esta pena, que evidentemente sigue siendo la más importante, aunque sujeta a muchas críticas.

En nuestra realidad, las penas privativas de libertad se ejecutan generalmente bajo la modalidad de regímenes penitenciarios institucionales, esto es dentro de un centro carcelario: Al respecto nuestro Código de Ejecución Penal (CEP) considera tres regímenes de ejecución de la pena privativa de libertad, dentro de una institución carcelaria, que son el: cerrado, semiabierto y abierto. Sin embargo, en la práctica sólo existe el régimen de ejecución cerrado de las penas privativas de la libertad (SOLÍS ESPINOZA, 2008, p, 11-18).

a) Régimen Cerrado de Ejecución penal: se cumple dentro de un establecimiento penitenciario cerrado, el mismo que puede tener diverso grado de seguridad. Los lineamientos iniciales de este régimen se estipularon por el Decreto Ley N° 17581 del 15 de abril de 1969, que reguló por primera vez que el régimen aplicable a los condenados a pena privativa de libertad sería de tipo (cerrado) progresivo. Mas tarde, el Código de Ejecución Penal de 1985 estipuló también, que

el “*tratamiento penitenciario se realiza mediante el sistema progresivo*”; y el vigente Código de Ejecución Penal de 1991, en su artículo IV repite lo mismo, empleando un término inadecuado ya que debió decir Régimen cerrado progresivo.

Posteriormente, debido a los cambios en los tipos de penas del Código penal y al haberse incluido la cadena perpetua en nuestra legislación, se pueden considerar dos modalidades de sanción privativas de libertad: una temporal y otra perpetua, cada una con sus propios regímenes de ejecución, el régimen cerrado temporal de duración variable y el régimen cerrado perpetuo.

1. Régimen de Ejecución Penal Cerrado Temporal (hasta 35 años): Estipulado por el Código de Ejecución Penal (C.E.P), el Reglamento del C.E.P.; el Decreto Legislativo N° 984 (21 de Julio 2007), entre otros. Este régimen cerrado temporal, es para la ejecución de las penas privativas de libertad, cuyo máximo actual de privación de la libertad es de 35 años, y que concordado con el inciso 1º del artículo 97º y el artículo 98º del C.E.P. tiene dos modalidades: un Régimen progresivo cerrado Ordinario y un Régimen progresivo cerrado Especial.

El primero; es decir, el régimen progresivo cerrado ordinario: según las primeras leyes y en parte el artículo IV del Título Preliminar y los artículos 97º y 98º del CEP se estipuló esta modalidad, que en sus años iniciales formalmente constaba de tres etapas. Actualmente el régimen cerrado tiene un periodo de observación y otro de tratamiento (artículo 58º del Reglamento del CEP).

Ahora bien, la fase de la observación, está a cargo de un Equipo Técnico interdisciplinario que de acuerdo a cada legislación tiene diversos nombres: “Equipo Técnico de Observación”, Órgano Técnico de Tratamiento (artículo 108º, CEP de

1991), y que en base a los exámenes médico, psicológico, social (artículos 62° y 63° del C.E.P y artículo 98° del Reglamento el CEP), debe establecer lo siguiente: Diagnóstico criminológico; Pronóstico criminológico; Clasificación del interno según sus posibilidades de readaptación social, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda; Programa de tratamiento individualizado.

De otro lado, el programa de tratamiento individualizado se debe iniciar con la ubicación del interno en el establecimiento o la sección que se haya recomendado en la fase de observación. En este periodo el recluso será sometido al tratamiento indicado, ya sea a través de métodos sociales, educativos, psicológicos, médico-biológicos y otros que permitan su resocialización.

De acuerdo al artículo 11° C del CEP, adicionado también por el Decreto Legislativo No. 984, y concordado con los artículos 58°, 59° y 60° del Reglamento del CEP, los internos que se hallan en el régimen cerrado ordinario se clasifican en las siguientes etapas: Máxima Seguridad: caracterizado por estricta disciplina y mayor control; Mediana seguridad, y Mínima seguridad.

Por otra parte, con respecto con Régimen progresivo cerrado Especial, este se encuentra normado por la segunda parte del artículo 98° del CEP, y los artículos 62°, 63°, 64° y 65° del Reglamento del C.E.P., y el artículo 11° B del CEP adicionado por el Decreto Legislativo 984. Este régimen se halla estipulado para sentenciados de difícil readaptación y excepcionalmente procesados con tal condición. (También para terroristas y autores de traición a la patria, al haberse dejado sin efecto el D. Supremo 005-97-JUS (24 junio de 1997).

Además, el artículo 11° B del CEP, estipula que los internos vinculados a una organización criminal y según la evaluación de su perfil criminal serán ubicados en una de las etapas del Régimen Cerrado Especial. Según el artículo 62° del Reglamento del CEP este régimen tiene dos etapas que “se cumplirán en los establecimientos penitenciarios correspondientes o en los pabellones habilitados para tal finalidad” (artículo 63° Reglamento del CEP).

2. Régimen de Ejecución Penal Cerrado Perpetuo: Se encuentra Estipulado por ley penal especial y modificada por el Decreto Legislativo N° 921. Inicialmente la pena de cadena perpetua se instituyó para condenados por terrorismo, pero luego fue ampliada para autores de diversos delitos especialmente graves.

Este régimen tiene dos etapas: La primera, de Máxima seguridad: para dirigentes y por participación en grupos de aniquilamiento; y, la segunda, de mediana seguridad para autores de diversos delitos comunes.

En ese sentido, se tiene que, un establecimiento especial para la ejecución de esta pena, en su fase de máxima seguridad es el Régimen especial del Centro de Reclusión de Máxima de Seguridad de la Base Naval del Callao, y que según el Decreto Supremo N° 024-2001-JUS, dicho CEREC es para jefes o dirigentes principales por terrorismo, traición a la patria, delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de Drogas y delitos contra la humanidad.

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 921 (17/01/2003), la condena a cadena perpetua, en sus fases de máxima seguridad y mediana seguridad, al cumplirse los 35 años de privación de libertad se revisará de oficio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que impuso dicha pena, disponiendo que el Consejo Técnico

Penitenciario organice el expediente según artículo 54° del CEP. Luego de dicho trámite el Órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida, ordenando en este caso la excarcelación del condenado.

b) Régimen Semiabierto y Abierto de Ejecución penal: Según nuestro Código de ejecución penal, el régimen SEMIABIERTO se caracteriza por una mayor libertad en las actividades comunes, relaciones familiares, sociales y recreativas del interno, sin embargo, hasta ahora este régimen sólo existe a nivel legal o normativo. Igualmente, el régimen ABIERTO se halla regulado en la ley penitenciaria nacional para los condenados a pena privativa de libertad (artículo 97°, inciso 3), aunque tampoco se ha logrado implementar en la realidad. Legalmente se pueden diferenciar dos variantes, considerando que el C.E.P. delimita ambas modalidades en artículos independientes (100 y 101): Prisiones o establecimientos de régimen abierto, y Colonias o pueblos agrícolas, agropecuarios e industriales.

4. RÉGIMEN PENITENCIARIO Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

El Régimen penitenciario, es conceptuado como el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de condenados que presentan características similares. Cada régimen penitenciario cuenta con una reglamentación o norma particular que lo diferencia de los otros. Por ellos, el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, viene a ser la especie dentro del género, que es el sistema. Para López rey *“regímenes es el tipo de vida resultante de la aplicación del sistema”*, cabe hablar de régimen general y de regímenes especiales asignados a un grupo de condenados según la sentencia, condiciones personales, etc.

De otro lado, el tratamiento penitenciario es considerado como la acción o influencia dirigida a modificar la conducta delictiva del condenado, que tiene sus particulares características personales. La influencia o medidas que se adopten, pueden ser de las más variadas dentro de cada régimen penitenciario. El tratamiento puede ser desarrollado tanto en un régimen libre, e semilibertad o en una institución cerrada.

En la Exposición de Motivos del Código de Ejecución Penal se consigna expresamente: *“el tratamiento es el elemento esencial del sistema Penitenciario”* adscribiéndose, por tan, a los lineados de la criminología crítica, por que tiene un enfoque multidisciplinario de la criminalidad, que parte del delito Jurídico la personalidad y peligrosidad del desviado, y propende a su rehabilitación por medio del tratamiento penitenciario. Tratamiento al que se sujeta el condenado de manera integral desde su ingreso al establecimiento penitenciario hasta su liberación (artículo 3° C. E. P.).

El tratamiento será individualizado y grupal y consistirá en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales. Laborales y todos aquellos que permiten obtener el objetivo del tratamiento, de acuerdo a las características propias del interno (artículo 61° C. E. P.).

5. POLÍTICA PENITENCIARIA.

El logro del objetivo nuclear de la ejecución penal, que es la resocialización del condenado, presupone delimitar claramente lineamientos de Política Penitenciaria que propicien la consecución de tal finalidad además la realidad penitenciaria que es muy heterogénea, según las características de cada país, plantea a su vez la necesidad de delimitar dicha política acorde a cada contexto social.

Toda política penitenciaria debe pues tomar como referencia básica los principios filosóficos gestores del sistema, y el conocimiento o diagnóstico previo de la realidad penitenciaria correspondiente, para delinear las recomendaciones más adecuadas que corresponda a los requerimientos primarios que plantea la situación vigente. Sin embargo, la adaptación del delincuente no puede ser enfocada solamente desde una óptica penitenciaria, ya que estos problemas tiene también aspectos jurídicos y de índole social, es por ello que dentro de los planteamientos de una política penitenciaria es necesario considerar también lineamientos de tipo social como jurídico-penales, además de los estrictamente penitenciarios.

6. DERECHO PENITENCIARIO.

Existen diversas acepciones que se han desarrollado hasta nuestros días, pero quizá la mayoría de ellas inspiradas en las nociones centrales elaboradas por G. Novelli (1943, p. 426), quien en 1933, en una conferencia sobre la autonomía del Derecho Penitenciario, que fue publicada en la Revista di Diritto Penitenziario (1933) lo definió como *"el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, a comenzar desde el momento en que se convierte en ejecutivo el título que legitima la ejecución"*. Tal concepto encuadraba con su punto de vista que propugnaba la existencia de un Derecho Penitenciario autónomo, con una concepción unitaria de los diversos problemas que supone la ejecución penal, visión que se afirmaba, según el parecer de Novelli, en dos principios: la individualización de la ejecución penitenciaria, y en el reconocimiento de los derechos subjetivos del condenado (SOLPIS ESPINOZA, 2008, p, 4).

Otro grupo de autores han desarrollado conceptos que diferencian entre Derecho de Ejecución Penal y Derecho Penitenciario, en gran parte bajo la influencia del profesor español Eugenio Cuello Calón (1958) para quien el Derecho de Ejecución Penal es el estudio de las normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, mientras que el Derecho Penitenciario es de menor amplitud y se limita a *"las normas que regulan el régimen de detención y prisión preventiva y la ejecución de las penas y medidas de seguridad detentivas"*, quedando las normas de ejecución de las penas y medidas de seguridad restantes fuera de su jurisdicción. Prácticamente, según este criterio, el Derecho Penitenciario es parte del Derecho de Ejecución Penal. En ese mismo sentido, Ricardo Núñez, explica que el Derecho penitenciario es, sin lugar a dudas, la parte más importante del derecho de ejecución penal. Es este derecho el que regula, como etapa final, la efectiva realización del derecho penal (NÚÑEZ, 1998, p, 18).

De otro lado, se tiene que el Régimen Penitenciario viene a ser el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de internos que presentan características similares. Asimismo, cada régimen cuenta también con una reglamentación o norma particular que lo diferencia de los otros. Por ello, el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, viene a ser la especie dentro del género que es el sistema. Para Manuel López Rey (1975), régimen es el tipo de vida resultante de la aplicación del sistema y que cabe hablar de régimen general y de regímenes especiales asignados a grupos de condenados según la sentencia, condiciones personales, etc. Por su parte, Berdugo, Zúñiga y otros (2001, p.185), dicen que el régimen penitenciario, "se

constituye como un medio para conseguir un fin, pero este medio tiene diversos objetivos, especialmente diferentes en relación con la situación procesal de los reclusos, según que éstos se hallen en la situación de preventivos o se trate de personas condenadas” (NÚÑEZ, 1998, p, 7-8).

Finalmente, el tratamiento penitenciario viene a ser la acción o influencia dirigida a modificar la conducta delictiva del condenado, en función de sus peculiares características personales. Las influencias o medidas que se adopten, pueden ser de las más variadas dentro de cada régimen penitenciario, sin embargo, no podemos dejar de señalar que, según Manuel López Rey, tratamiento supone un concepto más amplio de acuerdo al criterio que él le asigna (NÚÑEZ, 1998, p, 7-8).

7. BENEFICIOS PENITENCIARIOS

La imposición de una pena privativa de la libertad, tiene por finalidad “la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, lo que significa que nuestro sistema penal sigue la filosofía de las teorías utilitarias de la pena, por cuarto están dirigidas a promover actitudes positivas del condenado, con miras a su reintegración a la sociedad (PEDRAZA SIERRA, 1998, p, 9).

Los beneficios penitenciarios son instituciones de inspiración preventiva especial. Pertenecen a la fase de la ejecución de la sentencia, durante la cual debe ponderarse individualmente la oportunidad de su concesión. Su inspiración descansa en la preparación para la libertad y la mitigación del aislamiento producido por la pena de prisión, que no puede sino fundamentarse en la reinserción social. Por ello, aun teniendo en cuenta las críticas formuladas a la ideología del tratamiento, no puede ignorarse que la orientación constitucional de estas penas

evita una concepción puramente segregacionistas de la prisión, pues permite del la aplicación principio de humanidad de las penas y recoge la finalidad preventivo especial, que posibilita renunciar a la pura retribución y proporciona fundamento constitucional a instituciones por las que se evita la prisión o se mitiga la dureza de su cumplimiento; preparando para la libertad, como es el caso de os beneficios penitenciarios.

En Sistemas Penales como el nuestro, la existencia de beneficios penitenciarios y su oportuna concesión, constituyen importantes mecanismos de estímulo para la población penal, pues es evidente que, para lograr esta finalidad, el interno se esforzará en respetar las reglas de convivencia interna (buena conducta) y desarrollará, aunque sólo sea para tal propósito, actividades laborales o educativas. El beneficio Penitenciario más antiguo en nuestra legislación es el de la “*Liberación Condicional*”, que ya figuraba en el Código Penal de 1924; y, los más nuevos son la “*visita íntima*” y las “*recompensas*” a partir del Código de Ejecución Penal de 1985.

7.1. Permiso de Salida

Sobre el permiso de salida, entiende ELÍAS NEUMAN (1997) que:

Es un avance penológico considerable y sus resultados son provechosos, siempre que se otorguen con tino mediante una adecuada fiscalización. Consiste en permitir por distintos motivos a uno o más reclusos, el abandono temporal del establecimiento donde se alojan, para trabajar durante el día en oficinas, talleres e incluso organismos ministeriales o municipales sin que nada denote su procedencia; en segundo lugar, razones de humanidad a fin de calmar la ansiedad del

condenado derivada de circunstancias familiares (enfermedades graves o muertes); en tercer lugar, para armonizar las necesidades sexuales; etc. (p, 67).

El permiso de salida en el Perú, como beneficio penitenciario, permite al interno, sea este procesado y sentenciado, el egreso del establecimiento penal bajo la autorización del director del establecimiento, siempre y cuando concurra las circunstancias que establece el Código de Ejecución Penal. Es concedida en situaciones de urgencia o emergencia para el interno, como en el caso de la enfermedad grave o muerte del familiar más cercano a él, como un mecanismo coadyuvante al proceso de rehabilitación, por un plazo máximo de setenta y dos horas y bajo la custodia permanente del agente penitenciario asignado para esta función, en ocasiones, se concede el beneficio para realizar algunas gestiones o actos fuera del recinto carcelario que requiere estrictamente la presencia del interno (SMALL ARANA, 2006, p, 73).

Se considera que, a los reclusos, casados o solteros, se les debe otorgar permisos de salida ordinarios para visitar a su familia, por 48 horas como mínimo, uno de cuyo aspecto sería el facilitar la relación íntima, así como tener un contacto familiar en toda su dimensión. Estas visitas familiares, mediante permisos de salida ordinario, permitiría solucionar en parte la abstinencia sexual del recluso, además de que fundamentalmente facilitaría la integración familiar del interno, disminuyendo su ausencia en el núcleo social que constituye su familia.

Por otro lado, la constitución establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan al individuo perfeccionarse progresivamente. En este

sistema fundamental y todos los pactos internacionales de derechos humanos suscritos, el legislador se inspira para establecer en el régimen penitenciario toma un catalogo de derechos que permitan proteger los derechos de las personas, y mantener los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente, en este caso, para ser devuelto a la sociedad en capacidad de respeto a la ley. Resaltándose que lo fundamental en el trato penitenciario no es solo que sea igualitario, sino que sea un trato correcto. El trato correcto no es más que el “el conjunto de actividades desarrolladas en los recintos penitenciarios, de respeto de los derechos de los reclusos, mediante el cual se busca como fin último del proceso la preparación de la persona para su reinserción social cuando salga en libertad (ANTOLISEI, 1988, p, 572).

7.2. Semilibertad

El código de ejecución Penal precisa que el beneficio penitenciario de semilibertad permite que el interno con primera condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando: 1) cumpla la tercera parte de la pena; 2) No tenga proceso pendiente con mandato de detención; 3) se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario; 4) cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia; 5) cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total. Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez.

7.3.Redención de la pena por el trabajo y la educación

La redención de la pena por el trabajo, señala el artículo 44 ° del Código de Ejecución penal que: el interno ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante el trabajo a razón de un día de pena por días de labor efectiva. En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de labor efectiva. En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado especial la redención será a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva. En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día por seis días de labor efectiva. En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado especial, a la redención será a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva. Los regímenes penitenciarios y las etapas aplicables a los internos se encuentran regulados en el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

La redención de la pena por el estudio, señala el artículo 45 ° del Código de Ejecución penal que: el interno ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante la educación a razón de un día de pena por días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días de estudio, aprobando previamente la evaluación

periódica de los estudios. En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día por seis días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios. En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por siete días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

Es necesario señalar que redimir, en otras acepciones, significa librar de una obligación o extinguirla, poner término a una penuria, siendo que la redención de la pena permite poner término a la pena reduciendo el tiempo de su duración mediante el trabajo, bajo el control de la administración penitenciaria.

7.4. Liberación condicional

Este beneficio se encuentra regulado en el artículo 49° del Código Penal el cual permite que el interno con segunda condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando: 1) cumpla la mitad de la pena, 2) no tenga proceso pendiente con mandato de detención, 3) se encuentre ubicado en la etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, 4) cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia, 5) cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total. Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez.

Este beneficio penitenciario, es importante porque con él se busca la rehabilitación y resocialización eficiente del condenado, mediante un mecanismo que permite anticipar la liberación del interno del establecimiento penitenciario como parte readaptación social al haber cumplido los requisitos legales que establece la norma para su otorgamiento. Con lo cual se busca reinsertar al recluso que reporta buena conducta y síntomas de rehabilitación y ha cumplido una parte de la pena efectiva establecida por la ley, de tal manera que constituye una oportunidad para el condenado de demostrar a la judicatura que es un sujeto socialmente útil, es por ello que dicha oportunidad esta sujeta a su revocación inmediata por su naturaleza condicionante, si el sentenciado incumple las normas de conducta a las que esta obligado.

7.5. Visita íntima

La relación sexual es un hecho connatural a la persona humana, y el campo penitenciario propende, en principio, el mantenimiento del vínculo familiar como medio indispensable para el tratamiento resocializador del interno. La visita íntima, además de cumplir la importante función de aliviar las tensiones y la ansiedad de los reclusos, tiene otros efectos colaterales benéficos como el mantener el vínculo matrimonial que, sin ella, probablemente se hubiera deshecho (SMALL ARANA, 2006, p, 285).

En ese mismo sentido, se puede indicar que, este beneficio constituye una de las medidas de solución más importante frente al problema sexual carcelario, la cual implica castidad forzada de los internos casados o en convivencia. Nuestro Código de Ejecución Penal señala que esta visita íntima tiene como objeto principal el

mantenimiento de las relaciones del interno con su cónyuge o concubino, bajo recomendaciones de higiene y planificación social, así como de profilaxis médica. Es el permiso de relación sexual que según las Naciones Unidas debe otorgarse prescindiendo de la calificación de la conducta del reo, dado que el preso está privado de su libertad ambulatoria; pero no, de su libertad sexual, así el permiso consiste en el ingreso de la esposa o concubina a una celda o lugar especialmente acondicionado a tales efectos para permitir a los esposos la relación sexual, no significando un premio sino la satisfacción de una necesidad del interno y de su cónyuge libre.

La visita íntima se encuentra regulada en la ley como un “beneficio penitenciario” al que pueden acceder todos los internos e internas que mantengan vínculo matrimonial o de convivencia. Sólo en los casos de internos o internas procesados y condenados por el delito de terrorismo no tiene derecho a la visita íntima. Los requisitos para acceder a los mismos se encuentran en el propio RCEP. Según la norma, las mujeres privadas de libertad tienen derecho a permanecer con sus hijos en el penal hasta que cumplan tres años de edad. Según el CEP, todo privado de libertad puede alcanzar sus quejas al director del penal, al (MP) y (DP). En el ámbito de aplicación de sanciones disciplinarias el RCEP prevé un procedimiento que establecen garantías del debido proceso que incluyen la posibilidad de interponer recursos de queja y apelaciones según sea el caso (ESCOBAR, 2007, p, 335).

Este beneficio constituye una de las medidas de solución más importante frente al problema sexual carcelario, la cual implica castidad forzada de los internos casados o en convivencia. Nuestro CEP señala que esta visita íntima tiene como objeto

principal el mantenimiento de las relaciones del interno con su cónyuge o concubino, bajo recomendaciones de higiene y planificación familiar, así como de profilaxis médica (SOLÍS ESPINOZA, 1999, p, 45).

8. EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

En 1985, con el primer Código de Ejecución Penal (CEP), se creó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que sustituyó a la Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social, como un organismo público descentralizado, con autonomía normativa, económica, financiera y administrativa, integrante del sector Justicia y con pliego presupuestal propio. Años después, con el nuevo CEP de 1991, la estructura orgánica de la entidad rectora del sistema penitenciario peruano sufrió algunos cambios, que fueron delineados por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INPE, del 11 de febrero de 1993; sin embargo, cinco años después, por Resolución Ministerial N° 199-98-JUS, del 10 de setiembre de 1998, se aprobó un nuevo Reglamento, el mismo que luego de más de dos años de vigencia, fue reemplazado por el actual Reglamento de Organización y Funciones del INPE, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2007-JUS, del 9 de octubre del año 2007.

De acuerdo con el CEP de 1991 y el Reglamento de Organización y Funciones del INPE (artículo 2º.), se trata de un Organismo público descentralizado del Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería jurídica de derecho público y autonomía normativa, económica, financiera y administrativa.

El Objetivo principal del INPE (artículo 134º del CEP y artículo 4º. del ROF): es dirigir y controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional,

asegurando una adecuada política penitenciaria tendiente a la resocialización del interno. Además, conforme al artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, la ejecución de la pena, tiene por objeto, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.

Actualmente se halla conformado por una Alta Dirección (Consejo Nacional Penitenciario y Secretaría General), órganos de control y de asuntos internos, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea, órganos desconcentrados, y órganos de capacitación e investigación.

SUB CAPITULO III:

REEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN PENITENCIARIA

1. CONCEPTO DE PENA.

El vocablo pena es sinónimo de “castigo”; en general, indica el dolor, el sufrimiento que se inflige a quien ha violado un mandato. Su carácter esencial es la aflictividad; por lo que, una pena no aflictiva constituye un verdadero “*contradictio in terminis*” (ANTOLISEI, 1988, p, 483). De lo que se deduce que la pena es un mal jurídico con que se amenaza a todas las personas, aplicado precisamente a los que delinquen, en calidad de retribución del acto delictivo cometido, pero con el fin de impedir la comisión de delitos (PEÑA CABRERA, 1977, p, 301).

Existen diversos conceptos en la doctrina que tratan de definir la pena, sin poder llegar a un acuerdo, así tenemos a Peña Cabrera, que dice: “En definitiva, la pena es un mal jurídico con que se amenaza a todas las personas, y aplicado, precisamente, a los que delinquen, en calidad de retribución del acto delictivo cometido, pero con el fin de impedir la comisión de delitos” (PEÑA CABRERA, 1977, p, 301).

FRANCISCO ANTOLISEI, por su parte señala que la pena es:

El sufrimiento conminado por la ley e irrogado por la autoridad judicial mediante un proceso a quien viola un mandato de esa misma ley (1988, p, 484).

Para CALDERÓN CEREZO la pena es:

Una consecuencia jurídico-penal del delito, que deviene en la más importante junto a la medida de seguridad; o, también puede conceptuarse como una privación o

restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al autor que ha cometido el delito (2001, p, 67).

El profesor español, MUÑOZ CONDE (1975), explica que pena es:

El mal que impone el legislador por la comisión de un delito, distinguiéndose tres aspectos: su justificación, su sentido y su fin. La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas de una comunidad. Sin la pena, la convivencia humana en la sociedad actual sería imposible. Se trata de un elemental recurso al que debe acudir el Estado para posibilitar la convivencia entre los hombres” (p, 69-70).

Por su parte, GUNTER JACOBS (2003) señala que:

La pena es coacción; es coacción de diversas clases, mezcladas en íntima combinación. En primer lugar, está la coacción en cuanto portadora de un significado, portadora de la respuesta al hecho: el hecho, como hecho de una persona racional, significa algo, significa una desautorización de la norma, un ataque a su vigencia, y la pena también significa algo, significa que la afirmación del autor es irrelevante y que la norma sigue vigente sin modificaciones, manteniéndose, por lo tanto, la configuración de la sociedad. En esta medida, tanto el hecho como la coacción penal son medios de interacción simbólica, y el autor es tomado en serio en cuanto persona; pues si fuera incompetente, no sería necesario contra decir su hecho (p, 23). En consecuencia, podemos afirmar que la pena es considerada como la sanción legal derivada de la realización de un hecho punible por sujeto imputable, que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional.

2. TEORÍAS DE LA PENA

2.1. Teorías de la Retribución

Llamadas también absolutas, los representantes más caracterizados de esta concepción son KANT (*Methaphysik der Sitten*, 1797, 11a parte, I. E.) y HEGEL (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1821, §§ 90 y ss.) (BACIGALUPO, 1996, p, 12-13).

Son las que atienden sólo al sentido de la pena, prescindiendo totalmente de la idea de fin. Para ellas, el sentido de la pena radica en la retribución, imposición de un mal por el mal cometido. En esto se agota y termina la función de la pena. La pena es, pues, la consecuencia justa y necesaria del delito cometido, entendida bien como una necesidad ética, como un "imperativo categórico" al modo que la entendió Kant, bien como una necesidad lógica, negación del delito y afirmación del derecho, como la concibió Hegel (MUÑOZ CONDE, 2002, p. 71). Para los defensores italianos y alemanes de esta teoría tales como CARRARA: la pena solo tiene un fin en si misma, que no es otro que el restablecimiento del orden externo de la sociedad (1972, p, 615).

GARCIA-PABLOS DE MOLINA (1995), afirma que las teorías absolutas en su concepción retribucionista tienen:

Un aspecto positivo y otro negativo: El primero, es su significación liberal ya que las exigencias de una pena proporcionada a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor, de un mal adecuado a un mal del delito, significan una garantía para el ciudadano ante los posibles abusos del estado. La pena retribucionista produce unos efectos más satisfactorios en orden a la prevención general y a la especial que

cualquier otra sanción que no respete la proporcionalidad con la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor. Su eficacia intimidadora es superior, porque la realización del derecho de la pena “*justa*” hace ver a la comunidad el contenido ético de aquélla y confiere a las prohibiciones un respaldo social del que carecen los mandatos legales injustos o desproporcionados. El segundo, se le reprocha que lejos de delimitar los presupuestos del *ius puniendi*, confieren un autentico cheque en blanco al legislador, lo que es cierto que estas teorías solo precisan “como” se debe castigar, pero no “que” conductas “cuando”. Legitiman cualquier intervención penal, en lugar de ofrecer criterios claros y eficaces para limitar aquélla (p, 75-76).

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (2004), expresa que las teorías absolutas son teorías que:

Se basan en la represalia, en la venganza, pero en ningún momento han sido demostradas. El retribucionista castiga como represalia por el delito que culpablemente ha cometido su autor. Esto implica que la culpabilidad del autor se compensa con el mal del autor. Pero, y aquí se encuentran las dificultades indemostrables, ¿es cierto que existe esa culpabilidad basada en la libertad de voluntad? Y, ¿es posible afirmar cuál es el quantum de culpabilidad? Y por último afirma que de la sucesión de males o de “la vulneración de la vulneración” no se deduce bien alguno, ni tampoco es cierto que un mal desaparezca porque se le añada otro mal. En todo caso, expresa, debe reiterarse que imponer el sufrimiento de un mal (el cumplimiento de una pena) sin finalidad alguna, es absolutamente irracional y que solo soporta la idea de venganza (p, 39-40).

La utilidad de la pena queda totalmente fuera del fundamento jurídico de la misma. Sólo es legítima la pena justa, aunque- no sea útil. Así como una pena útil, pero no justa, carecerá de legitimidad.

2.2. Teorías de la Prevención

Llamadas también o “teorías relativas”, las cuales procuran legitimar la pena mediante la obtención de o la tendencia a obtener un determinado fin. Su criterio legitimante es la utilidad de la pena. Si este fin consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará de una “teoría” preventivo-general de la pena. Si por el contrario, el fin consiste en obrar sobre el autor del delito cometido para que no reitere su hecho, estaremos ante una “teoría” preventivo-especial o individual de la pena (BACIGALUPO, 1996, p, 13).

A las teorías relativas se les objeta desde distintos ángulos, desde la teoría del Estado, desde una cosmovisión fenomenológica y ius naturalista; así, se tiene que desde los postulados Kantianos se argumenta que el hombre no puede ser tratado como un mero medio para fines de otros. Desde una perspectiva ético-social, señala el penalista alemán WELZEL, que “la sola justificación del fin no basta, ya que la finalidad como tal no santifica el medio, sino también como fin en sí mismo (ZARZOSA CAMPOS, 1993, p, 45).

En conclusión, las teorías preventivas asumen los postulados de: intimidación, disuasión, corrección, pedagogía social y tratamiento en afectación de un cometido retributivo de la pena, destinado a la efectiva realización de la justicia; las mismas que llegan a ser clasificadas de la siguiente forma:

2.2.1. Teoría de la Prevención Especial

La posición diametralmente opuesta a la teoría de la retribución se encuentra en la interpretación de que la misión de la pena consiste únicamente en hacer desistir al autor de futuros delitos. Según ello “el fin de la pena apunta a la prevención que va dirigida al autor individual, de donde surge la prevención especial como fin de la pena; que, al contrario de la concepción de la pena retributiva, es una teoría relativa, pues se refiere al fin de prevención de delitos (ROXÍN, 1997, p, 85).

Según la concepción de VON LISZT, considerado su portavoz, “la prevención especial puede actuar de tres formas: asegurando a la comunidad frente a los delincuentes, (mediante el encierro de estos); intimidando al autor (mediante la pena, para que no cometa futuros delitos); y, preservándole de la reincidencia (mediante su corrección)”.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (2004) critica a las teorías de la prevención especial: Tanto en lo concerniente a su posibilidad misma como en relación con la forma de llevarse a cabo. Si la finalidad resocializadora es que no se vuelvan a cometer delitos por parte del delincuente que ya lo cometió y el pronóstico es claro y rotundo: no cometerá otro delito, entonces, la consecuencia ha de ser que no debe ser sometido a tratamiento, pues, ya está conseguido lo que se pretenderá obtener con dicho tratamiento. ¿Sería esta conclusión aceptada por la sociedad?. La idea resocializadora, aceptable en su perspectiva más simple, se torna peligrosa en cuanto se examina más de cerca su protección concreta y sus consecuencias. Se trata de una fundamentación que otorga al estado grandes posibilidades en aras del ideal resocializador, como es ala imposición coactiva de unos valores a un grupo

social que no los comparte; al tiempo, no resultan nada precisos los límites de la actuación estatal (p, 48-49).

2.2.2. Teoría de la prevención general

Esta teoría nos propone una instrumentalización “del hombre por el hombre”, bajo fines sociales, de asegurar mediante la amenaza legal el mantenimiento del orden social. Entonces, la crítica desde la filosofía kantiana, viene dada en el sentido de que el individuo no debe ser utilizado como medio para realizar las intenciones de otro ni quedar incluido dentro del derecho de cosas. La pena así concebida, dice Roxin, convierte al hombre en “*medio al servicio de otros fines... en objeto de fines preventivos*”; entonces, al agente no se le castiga en proporción al daño cometido y según su culpabilidad, sino para servir de ejemplo a los demás, para que aquellos no delincan.

Ante la coyuntura actual, donde la realidad social viene asumida por una violencia estructural de escalas desbordantes –violencia, riesgo y amenaza como fuente de percepción cognitiva-, los miembros de la sociedad, especialmente la chiclayana, demandan mayores respuestas al delito, en razón de la inseguridad ciudadana que se percibe como manifestación vivencial; demandándose entonces, una represión más severa contra la criminalidad; reclamo que finalmente es acogido por el legislador quien en su afán de protagonismo político, procede a afianzar su poder extendiendo sustancialmente las redes de la represión penal.

Se ha criticado, de la prevención general, que su formulación sin límites significa una política expansiva del Derecho Penal, que no contiene o que no cuenta con un dique de contención ante una pretensión punitiva expansionista del Estado. En otras

palabras, se critica a la prevención general porque lleva a la prevención demasiado lejos, con ausencia de límites propios y con imposibilidad de trazar criterios que precisen los presupuestos de la intervención penal si se parte de este solo concepto. La finalidad, lo gravitante, es el obtener resultados eficaces en la prevención de delitos, de donde se tiene que el utilitarismo desemboca, en una política penal sin límites caracterizados por regímenes totalitarios y dictatoriales.

2.3. Teorías Mixtas o Eclépticas

Llamadas también Teorías de la Unión. Llámense mixtas las teorías que hacen incidir sobre la pena un carácter absoluto y uno o más relativos. Reconocen que al lado de la necesidad debe considerarse la utilidad, sin acordar a ninguno de estos dos principios un carácter exclusivo o excluyente. Son éstas las teorías más variadas y que gozan actualmente de mayor difusión (SEBASTIÁN SOLER, 1992, p, 384).

2.3.1. La teoría aditiva de la Unión

Esta teoría resalta la idea de justicia (retribución) sobre la utilidad (prevención), aunque acepta que en alguna medida juegue la idea de utilidad de la pena. Parte de un concepto de culpabilidad como fundamento de la pena y para ello recoge las ideas retributivas que fundamentan la pena en la culpabilidad. En efecto, el retribucionismo considera que el castigo presupone la culpabilidad de la persona, pero al mismo tiempo se afirma que la persona es libre y que la delinquir ha hecho un mal uso de su libertad, y por tanto, es culpable y debe ser castigado con una pena.

La teoría aditiva de la unión a esa idea de justicia le añade por mera adición la idea de la pena útil. De manera que la pena se fundamenta en la culpabilidad, ha de ser la pena justa y, únicamente, dentro de los márgenes de la pena justa es posible buscar la pena útil (LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 2004, p, 49-50).

2.3.2. La teoría dialéctica de la unión

Roxín elaboró la teoría dialéctica de la unión, manifestando que es preciso contemplar la pena en su total dimensión y en cada uno de sus componentes; siendo que aquello es justamente lo que no han realizado las teorías clásicas, aportando una visión parcial de la pena. Así, este nuevo planteamiento ubica las diversas teorías conforme el orden secuencial del delito, a saber:

a. Al momento de la conminación legal: La pena tiene la función de proteger bienes jurídicos, lo cual se realiza a través de la prevención general intimidatoria. Para poder realizar esta función, se señala, es necesario saber qué puede prohibirse; *“de donde resulta que la respuesta a esta pregunta dependerá de la función que le asigne el Estado a la pena, en cuya fijación se derivará el fin que ha de cumplir el Derecho Penal”*. En esta etapa prima entonces la prevención general, conforme al Artículo I del Título Preliminar del Código Penal de 1991.

b. Al momento de la determinación judicial: Se complementa la prevención general; es decir, al imponer el juez la pena, reafirma la seriedad de la amenaza anterior. Además, la pena no puede sobrepasar el límite de la culpabilidad del autor. De lo que resulta que la culpabilidad no sirve para fundamentar la potestad de penar, pero sí para limitarla; lo cual resulta necesario porque los conceptos de dignidad humana y autonomía de la persona, que presiden nuestra ley fundamental

y la tradición occidental, indiscutiblemente presuponen al hombre como ser capaz de asumir su culpabilidad y responsabilidad. Por tanto, el momento de determinación judicial esta referido al período en el cual se está procesando al inculpado; en esta etapa predomina la retribución absoluta, porque lo que busca la sentencia es la proporción entre la pena y el hecho cometido conforme al Artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal. La determinación de la pena, al individualizar al autor y calificarlo, está utilizando la prevención especial, pero no tiene que ver con la resocialización.

c. Al momento de la ejecución: Después de la sentencia; la cual tiende a la resocialización del delincuente; es decir, la reincorporación del delincuente a la sociedad -prevención especial-*“Aquí debe incluirse el posibilitar la utilización de las facultades propias del delincuente, evitando su atrofia, en los casos en que aquél no precise un propio tratamiento terapéutico –social–”*. Según es de verse del Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal.

En realidad, la teoría dialéctica de la unión, conforme dice el propio Roxín, está muy lejos de sus pretensiones, a causa de las inevitables contradicciones de los fines concretos en los que se basa; lo único que puede llevar a cabo es una *“ponderación recíproca y una ordenación”*; siendo que no presenta una concepción unitaria, ya que al producirse esta situación –concepción unitaria- la pena se vuelve un medio ineficaz para lograr la satisfacción social.

3. CRISIS Y FINALIDAD RESOCIALIZADORA DE LA PENA

Los primeros antecedentes de la ideología preventivo especial, y en especial de la resocialización, los encontramos, en las doctrinas pedagógicas de la enmienda formulada, en sus orígenes, por Platón, que, según él, la pena, entendida como castigo, es concebida como una forma de medicina para la conducta desviada del hombre: “el castigo modera a los hombres, los hace más justos y viene a ser como la medicina de la maldad”. Esta idea es perfeccionada por Tomas Moro quien, elabora utópicamente la primera concepción de la privación de la libertad personal como pena orientada a la reeducación.

Una manifestación posterior de estas concepciones preventivos especiales o correccionalistas se encuentra en las conocidas tesis del positivismo criminológico y de la doctrina de la Defensa Social. De acuerdo con estas tesis, la defensa de la sociedad frente a la delincuencia debe efectuarse investigando las causas del delito, siguiendo para tal efecto el método de las ciencias naturales. Según esta concepción, la pena privativa de la libertad debe perseguir un doble fin, dependiendo de las características antropobiológicas del sujeto condenado: curar al condenado considerado enfermo y/o neutralizarlo en razón de su peligrosidad (GARCÍA PABLOS, 1995, p, 317).

Tres son las grandes críticas que se han planteado contra las tesis resocializadoras. En primer lugar, desde una perspectiva normativa, se ha observado la incompatibilidad de las doctrinas reeducativas y resocializadoras, entendidas éstas como políticas que se imponen al condenado privado de libertad, con los postulados de una sociedad democrática y pluralista que concibe en su seno concepciones valorativas diversas incluso a aquellas incompatibles con la propia democracia.

Como señala Ferrajoli: “cualquier tratamiento penal dirigido a la alteración coactiva de la persona adulta con fines de recuperación o de integración social no lesiona solo la dignidad del sujeto tratado sino también uno de los principios fundamentales del Estado democrático de derecho es el igual respeto a las diferencias y la tolerancia de cualquier subjetividad humana, aún la más perversa y enemiga (FERRAJOLI, 1995, p, 270).

En segundo lugar, desde una perspectiva empírica, es generalizada la opinión respecto de la ineficacia del tratamiento penitenciario para alcanzar el objetivo resocializador. Dicha ineficacia se ha pretendido sustentar a través de investigaciones empíricas, realizadas principalmente en ¡Países nórdicos, cuyos resultados demostrarían una experiencia negativa de la aplicación de terapias resocializadoras.

Finalmente, desde una perspectiva metodológica, se cuestiona el discurso resocializador en razón de lo contradictorio que supone resocializar o reeducar en un contexto de privación de la libertad. Y es que la libertad constituye el presupuesto y la condición para cualquier programa educativo o reeducativo, por lo que la represión resultaría incompatible con este tipo de programas. En esta línea sostiene Baratta que para el delincuente “la pena carcelaria (...) no representa en lo absoluto una oportunidad de reintegración en la sociedad”. Por el contrario, señala el referido autor, “la cárcel impone condiciones negativas en relación con esta finalidad”, esto es, la cárcel resulta un ámbito altamente criminógeno (BARATTA, 2004, p, 30).

Frente a estas críticas, los criminólogos y penalistas consideran que una reinterpretación del concepto de resocialización debe tomar en cuenta necesariamente tres consideraciones, a efectos de hacerla mínimamente compatible con nuestro modelo de Estado democrático de Derecho asentando sobre el valor de la dignidad de la persona. En primer término, debe considerarse que la resocialización del condenado debe lograrse no a través de la pena privativa de la libertad sino a pesar de ella, es decir, la ejecución de la pena privativa de la libertad debe ser orientada a hacer menos gravosa la situación del condenado y a evitar su desocialización. En ese sentido, una nueva interpretación del contenido de la resocialización nos exige la implementación de estrategias e instituciones de descarceración.

En segundo lugar, la resocialización debe entender al condenado no como un objeto que pasivamente recibe instrucciones y adiestramientos sino como un sujeto de derechos (a excepción de la restricción de la libertad). En esa perspectiva, el tratamiento penitenciario debe ser concebido como un servicio puesto a disposición del condenado, mas no como la imposición de un sistema de valores al mismo (SERRANO PIEDECASAS, 1994, p, 67-68).

Finalmente, la resocialización, en concreto la reinserción social, debe pretender también corregir las condiciones de exclusión social de los grupos de donde proviene el condenado. Ello a efectos de que la situación pospenitenciaria no determine el regreso de aquel a una situación que podría ser criminógena.

4. DERECHO A LA REEDUCACIÓN PENITENCIARIA

4.1. La educación penitenciaria

En los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional se promueve la educación del interno en cumplimiento al Código de Ejecución Penal para la formación profesional o capacitación ocupacional. El interno analfabeto participa obligatoriamente en los programas de alfabetización y educación primaria de adultos. Se mantiene el derecho del interno de disponer de libros, periódicos y revistas permitiendo vinculación con el exterior.

El servicio educativo se presta a través de Centros de Educación Ocupacional, Primaria y Secundaria de adultos, programas de alfabetización y educación a distancia en concordancia con los dispositivos vigentes en la materia de Educación.

- El interno que no tenga profesión u oficio conocido está obligada al aprendizaje técnico, de acuerdo a la aptitud, interés y vocación.
- La Administración Penitenciaria promueve la educación artística, la formación moral cívica y las practicas deportivas.
- La Administración Penitenciaria da facilidades al interno para que estudie por correspondencia, radio y/o televisión.

La Redención de la pena por la educación, es un beneficio Penitenciario que permite reducir el tiempo de pena al interno que desempeña una actividad educativa, bajo el control de la Administración Penitenciaria. Este beneficio fomenta el interés del interno por la educación, en consecuencia, la educación cumple un rol despenalizador dentro de la ejecución Penal.

Ahora bien, debemos entender por “reeducación” al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad. En cambio, la expresión “reincorporación social” nos remite al

resultado fáctico de recuperación social de un condenado, originalmente considerado antisocial. Recuperación que implica la introducción en la sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. La rehabilitación expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos (ARÍAS MARTÍNEZ, 2001, p, 45).

De lo descrito puede apreciarse que mientras la reeducación nos remite a un determinado medio para alcanzar un objetivo, la reincorporación social alude al resultado obtenido con aquel proceso. Sin embargo, la Constitución no hace mención a un término usualmente utilizado en el discurso político criminal de los fines de la pena, sobre todo de los fines preventivo especiales. Nos referimos a la “resocialización”. Asumiendo la tesis de Joaquín Urías, este concepto comprende tanto al proceso reeducativo como al resultado, la reincorporación social, sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de este resultado y que es determinada por la rehabilitación.

4.2. Objetivos de la educación y capacitación penitenciaria

Entre los objetivos de la educación penitenciaria tenemos LITA UBIDIA en el link: <http://www.ilustrados.com/tema/2633/fines-pena-medidas-seguridad.html>

1. Reeducar y capacitar a los internos a través de Cursos y Programas Educativos.

2. Reinsertar a la sociedad a los internos que hayan cumplido y aprobado las acciones educativas para que puedan desempeñarse laboralmente en el Medio Libre.
3. Mejorar la metodología y técnicas de aprendizaje de los profesores de los Establecimientos Penitenciarios con asesoramiento y apoyo del Ministerio de Educación.
4. Sistemizar y uniformizar todas las acciones educativas que se desarrollan en todos los centros de Educación Ocupacional (CEOS) del país.
5. Gestionar la ampliación de servicios Educativos para los internos de los Establecimientos Penitenciarios dándoles formación Primaria y Secundaria de Adultos.
6. Gestionar y ampliar la creación oficial de CEOS.

Por atraparte, las sociedades, desde épocas muy antiguas han podido consolidarse y evolucionar a partir de la satisfacción de necesidades esenciales para la vida, mismas que han permitido establecer pautas de conducta, agenciarse y dar continuidad a roles a través de las generaciones de acuerdo a las clases sociales establecidas, así mismo el pensamiento de cada época y las demandas del pueblo han girado en torno a expectativas de la formación del individuo integral capaz de desenvolverse en la cotidianidad, ante esta inquietud surge la educación como un agente de progreso y desarrollo intelectual, social, emocional y material.

Los establecimientos educativos que funcionan en instituciones penitenciarias desarrollan sus actividades en un campo de tensiones permanentes, generadas no

solo por la particularidad de su alumnado sino por un difícil contexto de funcionamiento en el que priman las cuestiones de seguridad.

Se destacó el hecho de que la educación en la cárcel reduce la situación de vulnerabilidad de la persona privada de libertad, y sirve como dispositivo para la prevención del delito o baja de la reincidencia. Ella representa, además, una oportunidad social -para desarrollar trayectorias educativas provechosas, derecho humano y proyecto de vida. y, sobretodo, de un “derecho llave”. De otro lado, algunas autoridades penitenciarias y funcionarios de seguridad tienden a considerar los programas educacionales como una actividad periférica, que contribuye al “buen orden” de la institución, ya que ayuda a mantener a los reclusos provechosamente ocupados, otros, especialmente los educadores y personal civil (trabajadores sociales, sicólogos, etc.), tienden a destacar el aspecto ético de la educación como parte de la finalidad rehabilitadora del encarcelamiento. Un elemento evidente de este objetivo pero que a menudo se posa en silencio es el deseo de influenciar el comportamiento futuro de los delincuentes mediante una modificación de sus valores y actitudes. Este aspecto queda implícito en la designación de las instituciones y sistemas calificados de correccionales.

Es decir, la educación es elemento indispensable del tratamiento del interno, porque al considera el hábitat o medio carcelario, lo primero que debemos reconocer es que se ha formado allí un gran laboratorio humano para ser penetrado por las ciencias penitenciarias -la pedagogía, la psicología y psiquiatría- que son los instrumentos de la educación de la pobre alma del condenado; y en caso contrario, nos enfrentamos a la utilización inútil del cuerpo y del tiempo del hombre del

encierro, que aumenta sus fuerzas en términos de utilidad económica, y que disminuye esas mismas fuerzas, en términos de su re-adaptación, de su corrección, y en términos de todo lo que ha significado la resocialización, entre lo que reeducar implica la mayor tarea del sistema.

4.3. Fundamentación Constitucional

El Derecho a la reeducación se encuentra amparada por la Constitución Política peruana en el inciso 22 del artículo 139°, el mismo que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: Inciso 22.- El principio de que el Régimen Penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.

Ahora bien, el inciso en comento establece como principio que el régimen penitenciario tiene por objeto (RUBIO CORREA, 1999, p, 145-148):

1. Reeducar al delincuente es decir formarlo interiormente para que deje de lado sus tendencias antisociales y por el contrario construya su yo social y positivo.
2. Rehabilitar al delincuente es decir darle las habilidades necesarias para que pueda ejercitar su vida social positiva.
3. Reincorporar al delincuente es decir permitir que se reinstale en la sociedad de manera que pueda asumir una nueva vida formal dentro de ella.

Falta mucho para que podamos siquiera decir que el Perú está cerca de cumplir estos objetivos Sin embargo debe ser un proyecto al que debemos dedicar esfuerzos significativos. La violencia delictiva es un daño muy serio a la vida social actual y a la formación de los futuros peruanos. La educación en la paz es una necesidad y un objetivo no romántico sino muy pragmático consiste en desarrollar

las potencialidades de paz y progreso del individuo y también en darle la oportunidad para que pueda ejercitarlas. De nada vale formar a una persona para la paz o rehabilitar el si luego no va a encontrar un sitio en la sociedad. Evidentemente sus sentimientos antisociales serán rápidamente recuperados.

Está bien buscar estos beneficios para el delincuente con el régimen penitenciario, pero hay que decir sin embargo que la verdadera rehabilitación del ser humano y la superación de las causas de la delincuencia sólo se pueden obtener en la sociedad es decir dentro y fuera de las prisiones, pero no sólo dentro de ellas.

Desde nuestra perspectiva, los beneficios penitenciarios no solo son instituciones compatibles con el mandato de resocialización, sino que son instituciones intrínseca e inherentemente vinculadas a dicho proceso, esta permisión a la absoluta discreción legislativa en la configuración de tales beneficios nos induce a considerar que, para nuestro supremo interprete de la Constitución, los beneficios penitenciarios no son parte esencial de dicho principio. En este aspecto, nuestro Tribunal parece acercarse a la posición de la jurisprudencia constitucional española que niega el carácter de derecho fundamental a la finalidad reeducadora, rehabilitadora y reincorporadora del condenado a la sociedad. Al parecer, nuestro Tribunal enfatiza más en el resultado (reinserción) que en el proceso (la reeducación) de la resocialización. En efecto, si se pusiera un mayor énfasis en el proceso de la reeducación se facilitaría el entendimiento del mandato de resocialización como un derecho fundamental del condenado a acceder a los tratamientos y las instituciones penitenciarias previstas para favorecer su reincorporación a la sociedad.

La concepción del principio de resocialización como derecho fundamental nos permite deducir otras manifestaciones de garantía para los condenados a penas privativas de la libertad. Así, en primer lugar, se deduce un derecho a los beneficios penitenciarios ya establecidos por el legislador. La resocialización, entendida como derecho fundamental, requiere para su plena vigencia de un desarrollo legal. Se trata, entonces, de un derecho que básicamente se hace posible con el establecimiento de una ley que regule su ejercicio, pero cuya eficacia concreta excede a la misma. En ese sentido, una vez que el legislador ha graduado el tipo de beneficios penitenciarios que se adscriben a determinada clase de delitos, aquellos se incluyen como parte del derecho fundamental del condenado a la resocialización, esto es, como parte del derecho a acceder a los beneficios ya previstos en la ley. En ese sentido, no compartimos las consideraciones del Tribunal Constitucional al señalar que los beneficios penitenciarios si bien constituyen derechos subjetivos expectaticios previstos en la ley, no supone que tengan naturaleza constitucional (STC del 30 de enero de 2004, párrafo 18).

Desde la perspectiva de la resocialización como derecho fundamental, el ciudadano condenado a pena privativa de la libertad "tiene derecho no solo a no perder un determinado beneficio adquirido, sino también a avanzar en el proceso de "curación" que es la reeducación. En consecuencia, no es que sea inconstitucional la nueva disposición que restringe el acceso a determinados beneficios penitenciarios, sino que resulta inconstitucional que tal norma pretenda aplicarse a aquellos condenados que ya han comenzado un proceso de reinserción plasmado en la obtención gradual de los referidos beneficios. Ello evidentemente no impide

que el juzgador considere excepcionalmente y en casos concretos que existen otros bienes constitucionales que impidan la concesión de determinados beneficios. Sin embargo, la excepcional negativa a conceder determinados beneficios, a pesar de cumplir con los requisitos formales para ello, debe encontrarse especialmente fundamentada por el operador judicial. Esta exigencia sería una manifestación adicional del derecho fundamental a la resocialización, además del derecho de todo ciudadano a la motivación escrita de las resoluciones judiciales (artículo 139, inciso 5).

Por último, otra de las manifestaciones del derecho a la resocialización la encontramos en la proscripción a tomar en cuenta los eventuales antecedentes penales del condenado cuando este se considere legalmente rehabilitado. Se trata de efectos post penitenciarios de este derecho fundamental los cuales pretenden no solo remover los obstáculos que impiden una mejor reinserción del penado en la sociedad, sino también el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales sin discriminación cuando aquel se encuentre en libertad.

A partir de lo expresado puede observarse que queda aún una tarea pendiente por parte de los operadores jurídicos y jurisdiccionales en el desarrollo de las garantías del principio de resocialización, ello sin perjuicio de reconocer la necesidad de reinterpretar el contenido de dicho principio y los mecanismos para alcanzar sus objetivos, ahora menos pretenciosos.

4.4. La Reeducción en el campo penitenciario

La educación del buen detenido transcurre, en parte, también en el ámbito de la comunidad de detenidos, puesto que la aseguración de un cierto grado de orden,

del cual los jefes de los detenidos se hacen garantizar (a cambio de privilegios) hacia el *staff* forma parte de los fines reconocidos en esta comunidad (BARATTA, 2004, p, 370).

La educación para el resto opera a través de la aceptación de las normas formales del instituto y de las informales puestas en movimiento por el staff. En general, se puede decir que la adaptación a estas normas tiende a interiorizar modelos exteriores de comportamiento, que sirven para el ordenado desarrollo de la vida en la institución. En esto se convierte el verdadero fin de la institución, mientras la función propiamente educativa queda ampliamente excluida del proceso de interiorización de las normas, aun participando también en actividades de reinserción, y favorece la formación de costumbres de conformismo pasivo y de oportunismo. La relación con los representantes de los organismos institucionales, que en esta forma se convierte en característica del comportamiento del detenido, está dotada contemporáneamente de hostilidad, de desconfianza y de una sumisión sin consentimiento.

Lo señalado, en relación con los límites y con los procesos contrarios a la reeducación, que son característicos de la cárcel, va integrado con un doble orden de consideraciones, que tocan de raíz la contradicción de la ideología penal de la reinserción. Estas consideraciones se refieren a la relación general entre cárceles y sociedad. Ante todo, existe una relación entre quien excluye (sociedad) y quien es excluido (detenido). Cada técnica pedagógica de reinserción del detenido va contra la naturaleza misma de esta relación de exclusión. No se puede al mismo tiempo excluir e incluir.

En segundo lugar, la cárcel refleja, sobre todo en las características negativas, a la sociedad. Las relaciones sociales y de poder de la subcultura carcelaria tienen una serie de características que las distinguen de la sociedad externa, y que dependen de la particular función del universo carcelario, pero que en su estructura más elemental no son más que la ampliación en forma menos mistificada y más "pura", de las características típicas de la sociedad capitalista. Son relaciones sociales basadas en el egoísmo y en la violencia ilegal, en el interior de las cuales los individuos socialmente más débiles son llevados a desempeñar funciones de sumisión y explotación.

Antes que hablar de educación y de reinserción es oportuno hacer un examen del sistema de valores y de los modelos de comportamiento presentes en la sociedad en la que se quiere reintegrar al detenido. Un examen así no puede sino conducir, sostengo, a las conclusiones de que la verdadera reeducación debiera comenzar en la sociedad antes que en el condenado; antes de querer modificar los excluidos es menester modificar la sociedad excluyente, llegando así a la raíz del mecanismo de exclusión. De otra forma quedará, en quien quiera juzgar realmente, la sospecha de que la verdadera función de estas modificaciones sea la de perfeccionar y hacer indiscutible tal exclusión, integrando más que los excluidos de la sociedad, la relación misma de exclusión de la ideología legitimante del estado social.

5. EL DERECHO A LA REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INTERNO.

Asignándole a la pena un propósito readaptador, se puede expresarse en tres formas genéricas de tratamiento:

- a. Tratamiento Médico Institucional: Una de sus variantes se produce en medios

cerrados de mediana o máxima seguridad, en los casos que la condena penal haya impuesto una pena privativa de libertad efectiva. Otra alternativa, o variante, es el tratamiento en un medio abierto, en los casos que el condenado sea puesto bajo un régimen penitenciario abierto o de prisión abierta o experiencias afines.

b. Tratamiento en medio semi-institucional: En sus variantes de reclusión nocturna, arresto de fin de semana, limitación de días libres.

c. Tratamiento extra-institucional o en libertad: Cuando el condenado es puesto bajo régimen de prueba o de suspensión de ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, o bien en trabajo comunitario los fines de semana o en regímenes similares.

CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Con la finalidad de analizar y su posterior discusión de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, Así como la extracción de datos proporcionados por el INPE, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos.

3.1.1. Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

CUADRO N° 01: CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

GRÁFICO 1.

CUADRO N° 02: EL DERECHO DE LIBERTAD AMBULATORIA.

GRÁFICO 2.

CUADRO N° 03: CONCEPTUALIZACIÓN DE INTERNO.

GRÁFICO 3.

CUADRO N° 04: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO.

GRÁFICO 4.

CUADRO N° 05: POLÍTICA PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

GRÁFICO 5.

CUADRO N° 06: CONCEPTUALIZACIÓN DE REEDUCACIÓN PENITENCIARIA.

GRÁFICO 6.

CUADRO N° 07: RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO.

GRÁFICO 7.

CUADRO N° 08: FIN DE LA PENA Y RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO.

GRÁFICO 8.

CUADRO N° 09: INVERSIÓN PRIVADA EN LA EDUCACIÓN PENITENCIARIA.

GRÁFICO 9.

CUADRO N° 10: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN EL RÉGIMEN
PENITENCIARIO.

GRÁFICO 10

CUADRO N° 11: RESOCIALIZACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

GRÁFICO 11.

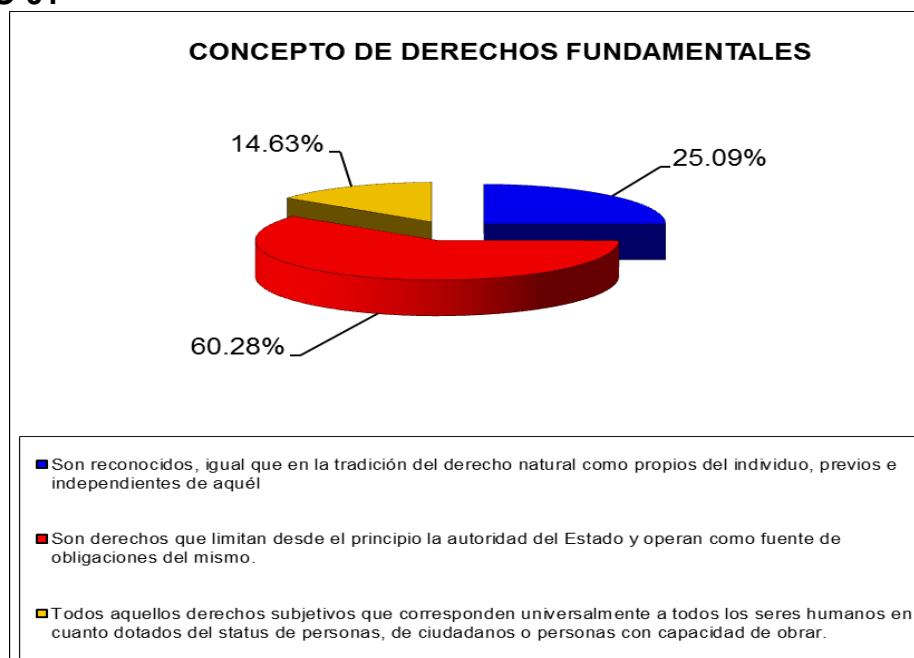
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 01: CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
1. ¿Cuál de los siguientes conceptos logra ajustarse con mayor precisión doctrinaria a la idea de Derechos Fundamentales? (puede marcar más de una opción).	Son reconocidos, igual que en la tradición del derecho natural como propios del individuo, previos e independientes de aquél.	72	25.09%
	Son derechos que limitan desde el principio la autoridad del Estado y operan como fuente de obligaciones del mismo.	173	60.28%
	Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar.	42	14.63%
T O T A L		287	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 01



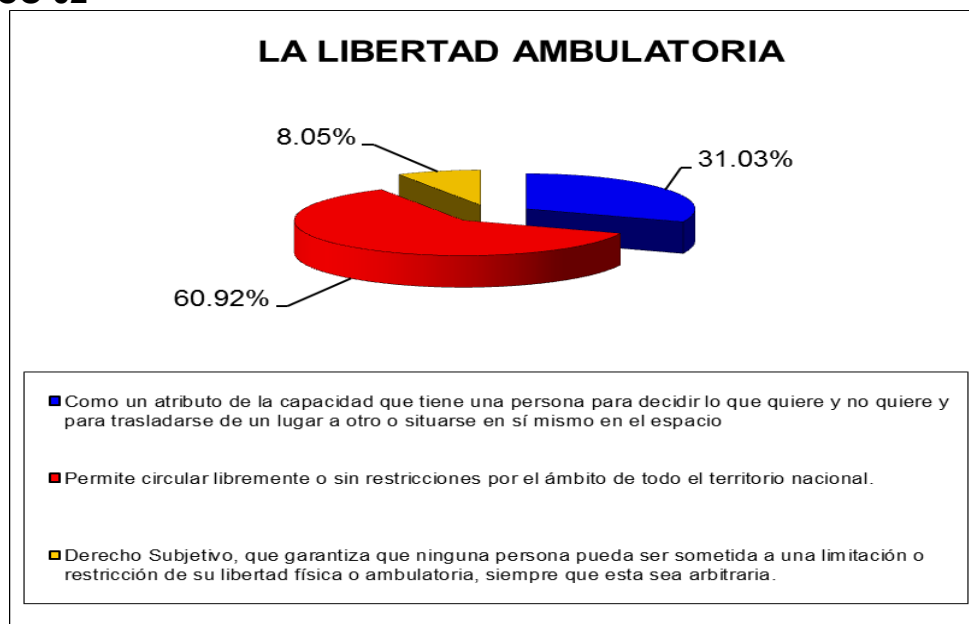
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 02: EL DERECHO DE LIBERTAD AMBULATORIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
2. Según su opinión ¿el derecho a la Libertad ambulatoria, es entendida? (puede marcar más de una opción).	Como un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere y no quiere y para trasladarse de un lugar a otro o situarse en sí mismo en el espacio.	63	21.00%
	Permite circular libremente o sin restricciones por el ámbito de todo el territorio nacional.	189	63.00%
	Derecho Subjetivo, que garantiza que ninguna persona pueda ser sometida a una limitación o restricción de su libertad física o ambulatoria, siempre que esta sea arbitraria.	48	16.00%
T O T A L		261	100%

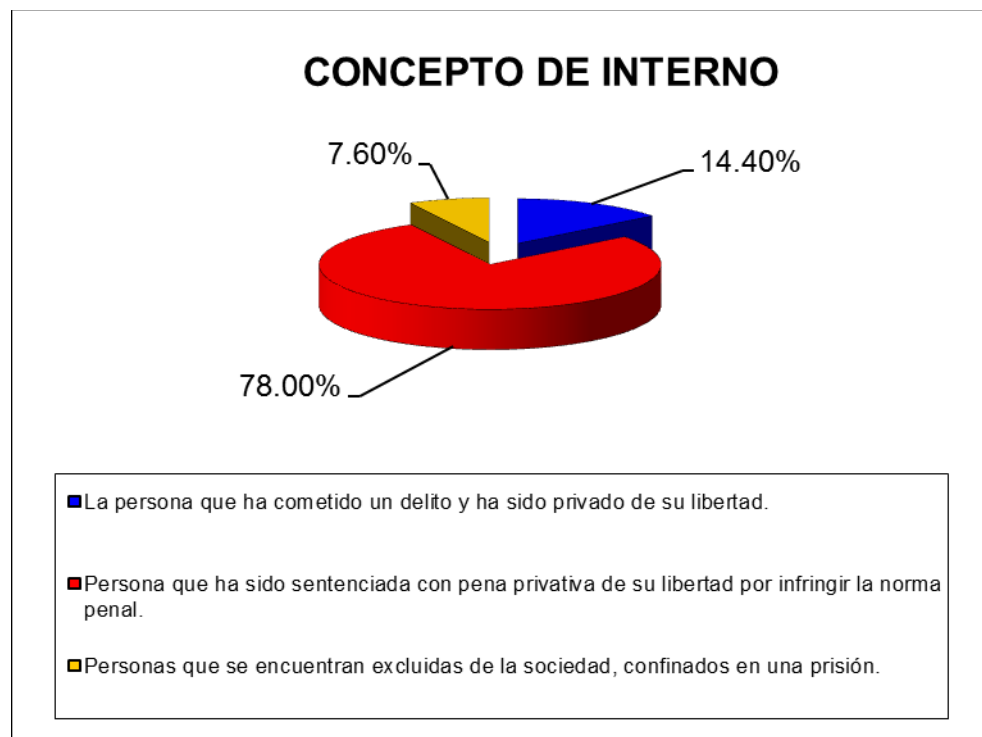
Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 02



Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)			
CUADRO N° 03: CONCEPTUALIZACIÓN DE DAÑO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
3.- A su criterio, ¿el interno en un establecimiento penitenciario se concibe como:	La persona que ha cometido un delito y ha sido privado de su libertad.	36	14.40%
	Persona que ha sido sentenciada con pena privativa de su libertad por infringir la norma penal.	195	78.00%
	Personas que se encuentran excluidas de la sociedad, confinados en una prisión.	19	7.60%
T O T A L		250	100%
Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.			

GRÁFICO 03



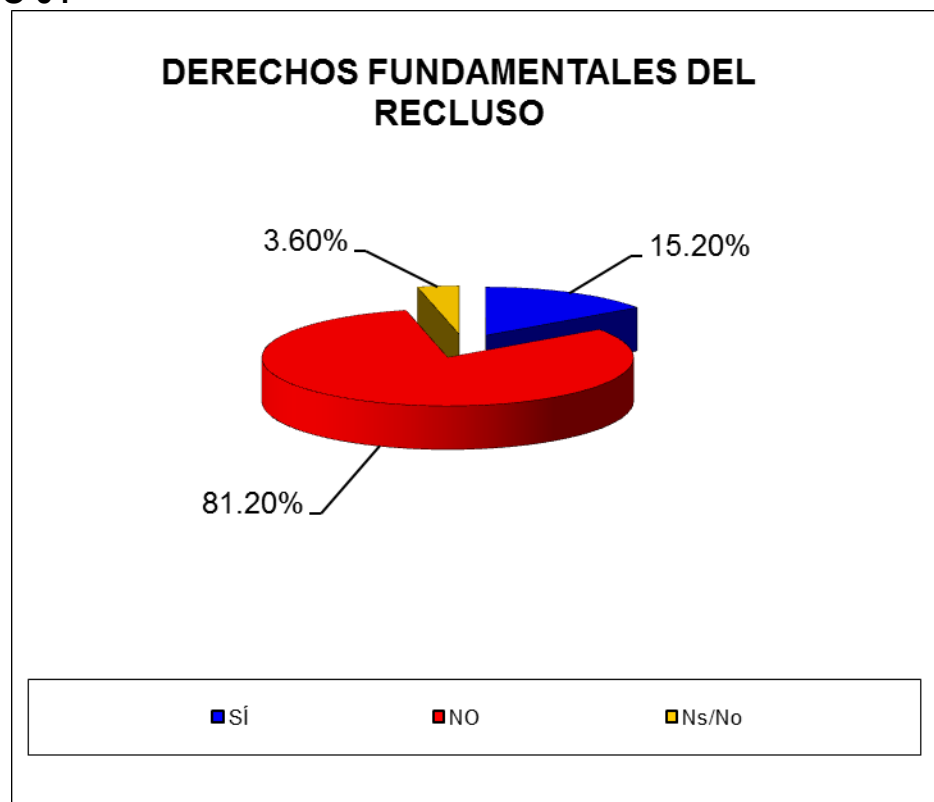
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 04: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
4.- ¿Considera que en el centro penitenciario de Chiclayo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, se respetan los derechos fundamentales de los Internos?	SÍ.	38	15.20%
	NO.	203	81.20%
	Ns/No.	9	3.60%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 04



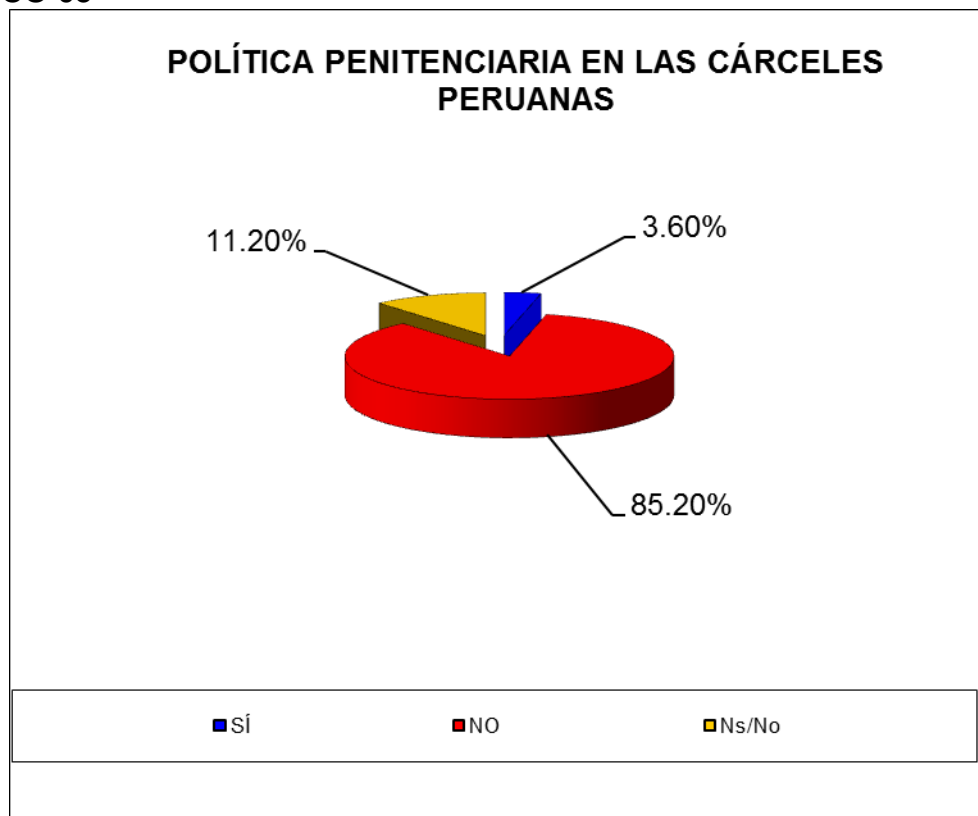
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

**CUADRO N° 05: POLÍTICA PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
5.- ¿Cree usted, que existe, en los establecimientos penitenciarios del país, una adecuada política penitenciaria que permita la resocialización de los Internos?	SI.	9	3.60%
	NO.	213	85.20%
	Ns/No.	28	11.20%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 05



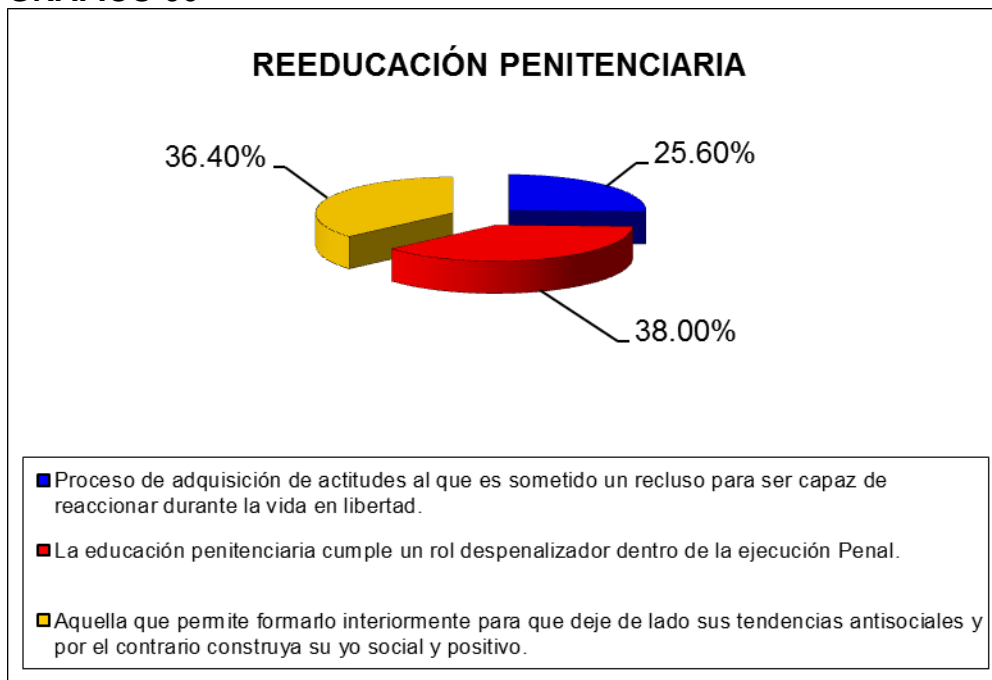
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 06: EL DERECHO DE LIBERTAD AMBULATORIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6.- Cuál de los conceptos, que a continuación se le mencionan, se ajusta con mayor proximidad, a la idea de Reeducción Penitenciaria?	Proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad.	63	21.00%
	La educación penitenciaria cumple un rol despenalizador dentro de la ejecución Penal.	189	63.00%
	Aquella que permite formarlo interiormente para que deje de lado sus tendencias antisociales y por el contrario construya su yo social y positivo.	48	16.00%
T O T A L		261	100%

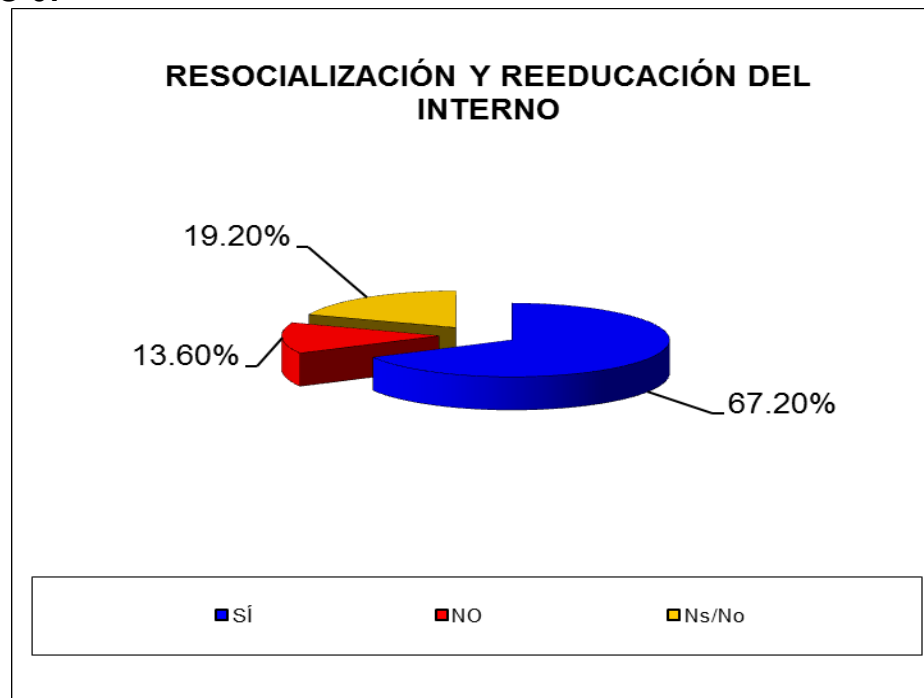
Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 06



Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)			
CUADRO N° 07: RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
7.- ¿Considera que por la Resocialización el Interno tiene derecho no solo a no perder un determinado beneficio adquirido, sino también a avanzar en el proceso de “curación” que es la reeducación?	SI.	168	67.20%
	NO.	34	13.60%
	Ns/No.	48	19.20%
T O T A L		250	100%
Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.			

GRÁFICO 07



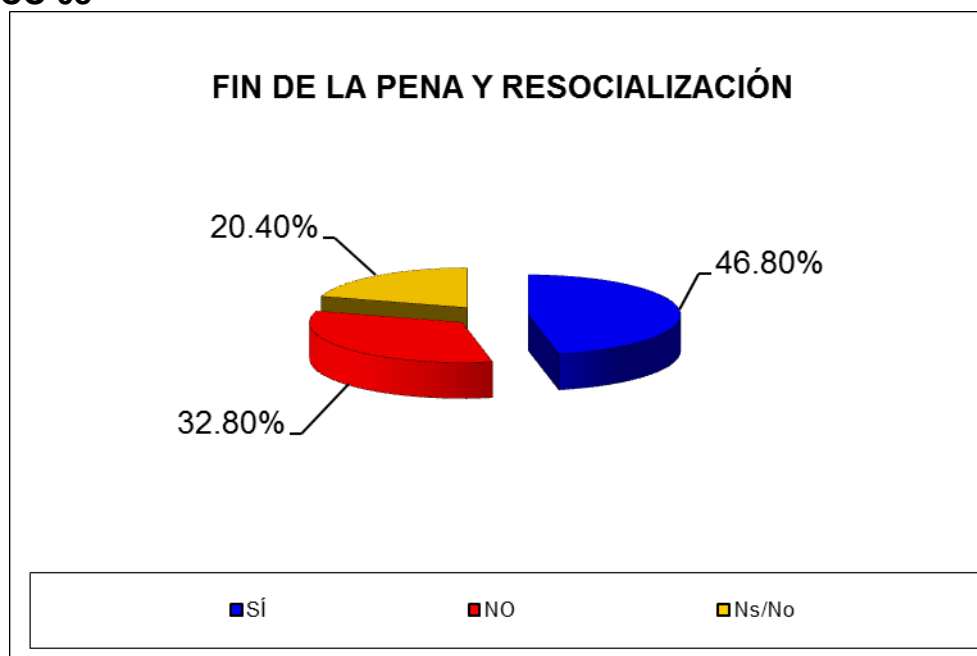
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 08: FIN DE LA PENA Y RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
8.- A su entender, si el fin último de la pena es la resocialización del recluso ¿considera que el desamparo estatal en cuanto a la asignación de recursos económicos necesarios para la resocialización del interno, es la causa fundamental de su ineficacia?	SÍ.	117	46.80%
	NO.	82	32.80%
	Ns/No.	51	20.40%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 08



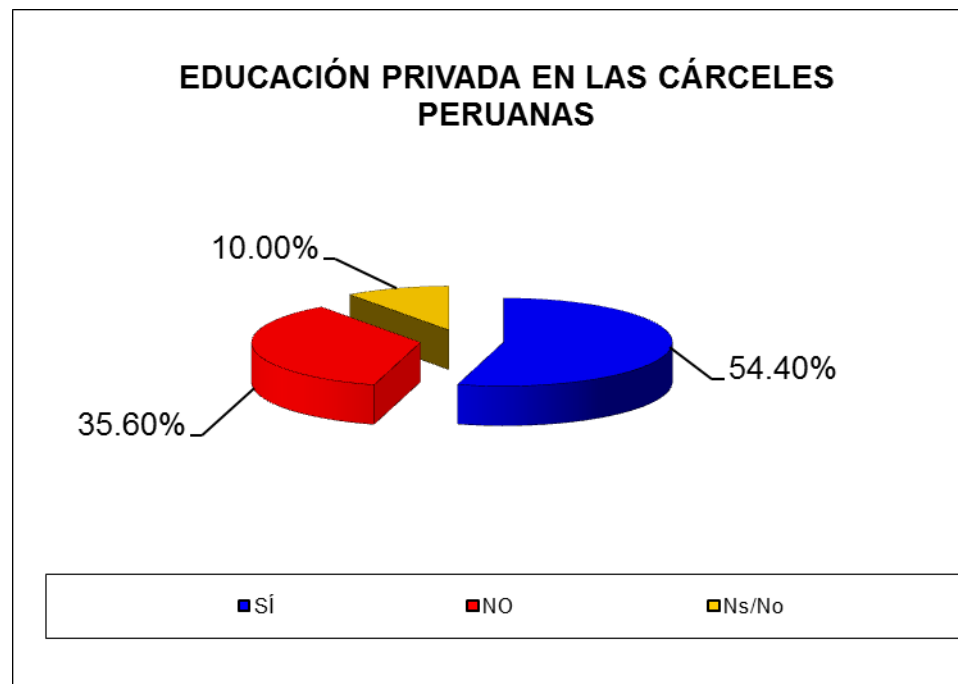
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 09: INVERSIÓN PRIVADA EN LA EDUCACIÓN PENITENCIARIA

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
9.- A los fines de dar cumplimiento a lo regulado por el artículo 139°, inciso 22° de la Constitución Política “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” ¿El Estado debe propiciar la inversión privada para brindar una adecuada educación penitenciaria que permita la resocialización del penado?	SÍ.	136	54.40%
	NO.	89	35.60%
	Ns/No.	25	10.00%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 09



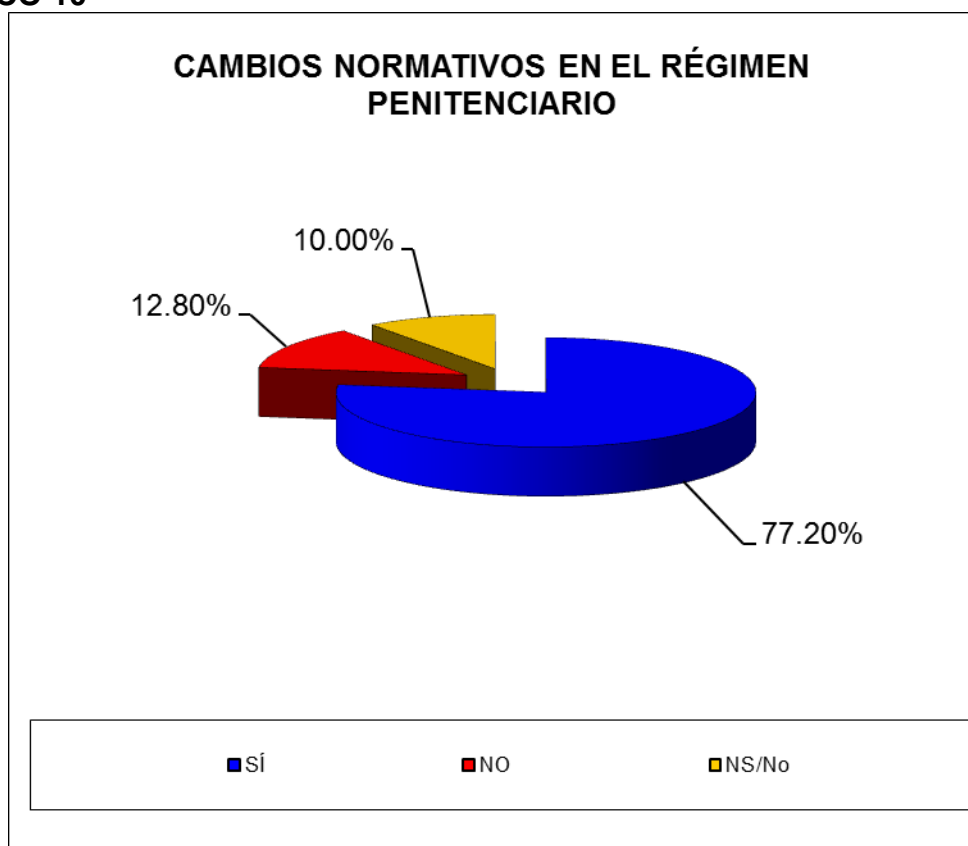
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 10: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN EL REGIMEN PENITENCIARIO

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
10.- Con respecto al Régimen penitenciario, en cuanto a que cumpla con los fines resocializadores ¿Cree que es necesario que se produzcan modificatorias en la legislación nacional?	SÍ.	193	77.20%
	NO.	32	12.80%
	Ns/No.	25	10.00%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 10



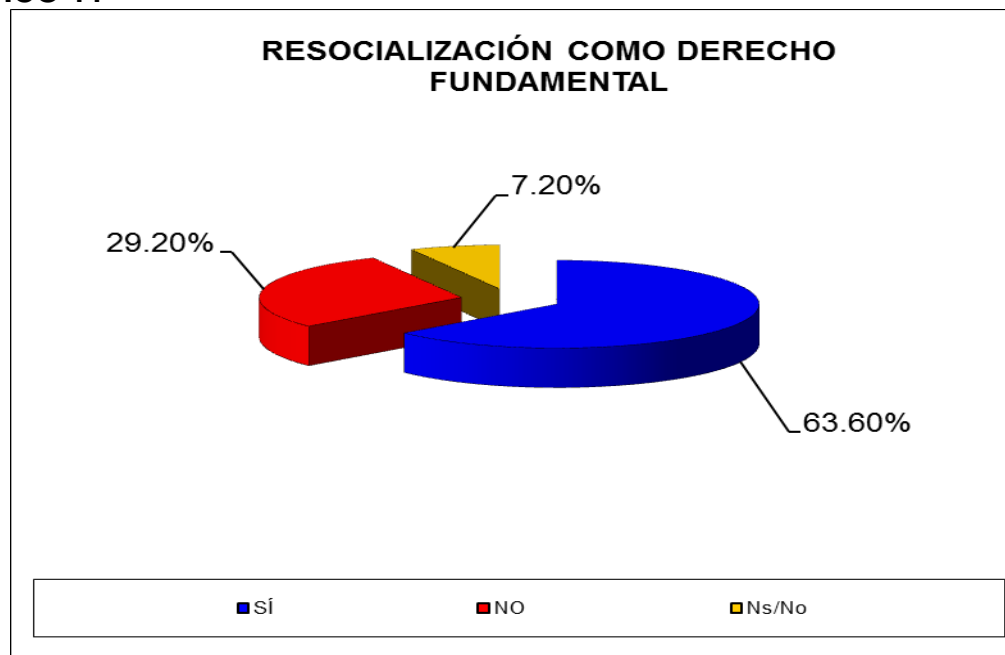
Total encuestados: 250 personas (Jueces, Fiscales y Abogados)

CUADRO N° 11: RESOCIALIZACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
11.- Para el logro de la reincorporación del sentenciado al seno de la sociedad ¿es indispensable que los derechos del recluso a la Reeducción, Rehabilitación y Reinserción social, guarden concordancia con los postulados doctrinarios de los derechos fundamentales en cuanto son propios y exclusivos del individuo, limitando la autoridad del Estado, así como que obligan a su pleno respeto y cumplimiento?	SÍ.	159	63.60%
	NO.	73	29.20%
	Ns/No.	18	7.20%
T O T A L		250	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Setiembre de 2017.

GRÁFICO 11



3.1.2. Población y hacinamiento en el establecimiento penitenciario de Chiclayo: 2012-2017.

CUADRO N° 12: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2012

CUADRO N° 13: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2013.

CUADRO N° 14: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2014.

CUADRO N° 15: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2015.

CUADRO N° 16: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2016.

CUADRO N° 17: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y
HACINAMIENTO: AÑO 2017

CUADRO N° 12: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2012					
MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	1784	641	56%	si
FEBRERO	1143	1816	673	59%	si
MARZO	1143	1868	761	63%	si
ABRIL	1143	1904	761	67%	si
MAYO	1143	1950	807	71%	si
JUNIO	1143	1959	816	73%	si
JULIO	1143	1982	839	73%	si
AGOSTO	1143	2030	887	78%	si
SETIEMBRE	1143	2077	934	82%	si
OCTUBRE	1143	2095	952	83%	si
NOVIEMBRE	1143	2160	1017	89%	si
DICIEMBRE	1143	2205	1062	93%	si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

CUADRO N° 13: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2013					
MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	2229	1086	95%	Si
FEBRERO	1143	2280	1137	99%	Si
MARZO	1143	2313	1170	102%	Si
ABRIL	1143	2352	1209	106%	Si
MAYO	1143	2407	1264	111%	Si
JUNIO	1143	2407	1264	111%	Si
JULIO	1143	2421	1278	112%	Si
AGOSTO	1143	2452	1309	115%	Si
SETIEMBRE	1143	2484	1341	117%	Si
OCTUBRE	1143	2518	1375	120%	Si
NOVIEMBRE	1143	2573	1430	125%	Si
DICIEMBRE	1143	2565	1422	124%	Si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

CUADRO N° 14: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2014					
---	--	--	--	--	--

MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	2589	1446	127%	si
FEBRERO	1143	2626	1483	130%	si
MARZO	1143	2626	1483	130%	si
ABRIL	1143	2741	1598	140%	si
MAYO	1143	2806	1663	145%	si
JUNIO	1143	2854	1711	150%	si
JULIO	1143	2890	1747	153%	si
AGOSTO	1143	2926	1783	156%	si
SETIEMBRE	1143	2950	1807	158%	si
OCTUBRE	1143	2969	1826	160%	si
NOVIEMBRE	1143	2988	1845	161%	si
DICIEMBRE	1143	3019	1876	164%	si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

C

CUADRO N° 15: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2015					
MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	3035	1892	166%	si
FEBRERO	1143	3082	1939	170%	si
MARZO	1143	3110	1967	172%	si
ABRIL	1143	3127	1984	174%	si
MAYO	1143	3164	2021	177%	Si
JUNIO	1143	3179	2036	178%	Si
JULIO	1143	3217	2074	181%	Si
AGOSTO	1143	3243	2100	184%	Si
SETIEMBRE	1143	3269	2126	186%	Si
OCTUBRE	1143	3246	2103	184%	Si
NOVIEMBRE	1143	3281	2138	187%	Si
DICIEMBRE	1143	3286	2143	187%	Si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

CUADRO N° 16: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2016

MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	3309	2166	190%	si
FEBRERO	1143	3386	2243	196%	si
MARZO	1143	3408	2265	198%	si
ABRIL	1143	3471	2328	204%	si
MAYO	1143	3493	2350	206%	si
JUNIO	1143	3535	2392	209%	si
JULIO	1143	3546	2403	210%	si
AGOSTO	1143	3586	2443	214%	si
SETIEMBRE	1143	3642	2499	219%	si
OCTUBRE	1143	3653	2510	220%	si
NOVIEMBRE	1143	3694	2551	223%	si
DICIEMBRE	1143	3720	2577	225%	si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

CUADRO N 17: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: ENERO-MAYO 2017					
MESES	CAPACIDAD DE ALBERGUE	POBLACIÓN PENAL	SOBRE POBLACIÓN (s)	% SOBRE POBLACIÓN (%S)	HACINAMIENTO (%S>20%)
ENERO	1143	3731	2588	226%	si
FEBRERO	1143	3735	2592	227%	si
MARZO	1143	3758	2615	229%	si
ABRIL	1143	3747	2604	228%	si
MAYO	1143	3814	2631	234%	si
JUNIO	1143	3863	2634	235%	si
JULIO	1143	3879	2736	239%	Si
AGOSTO	1143	3876	2733	239%	Si
SETIEMBRE	1143	3902	2759	241%	Si
OCTUBRE	1143	3910	2767	242%	Si
NOVIEMBRE	1143	3927	2784	244%	Si
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE					

3.1.3. Libertad por beneficio penitenciario y género: 2012-2017.

CUADRO N° 18: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2012.

CUADRO N° 19: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2013.

CUADRO N° 20: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2014.

CUADRO N° 21: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2015.

CUADRO N° 22: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2016.

CUADRO N° 23: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO:

AÑO 2017.

CUADRO N° 18: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2012

MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	549	515	493	22	34	31	3
FEBRERO	536	502	481	21	34	31	3
MARZO	522	490	469	21	32	30	2
ABRIL	512	481	459	22	31	29	2
MAYO	497	467	445	22	30	28	2
JUNIO	489	460	439	21	29	27	2
JULIO	473	447	426	21	26	24	2
AGOSTO	462	437	418	19	25	23	2
SETIEMBRE	451	428	409	19	23	21	2
OCTUBRE	435	412	394	18	23	21	2
NOVIEMBRE	427	406	388	18	21	19	2
DICIEMBRE	415	395	377	18	20	18	2
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

CUADRO N° 19: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2013

MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	402	384	366	18	18	18	0
FEBRERO	386	369	351	18	17	16	1
MARZO	379	362	344	18	17	16	1
ABRIL	370	354	336	18	16	15	1
MAYO	357	341	323	18	16	15	1
JUNIO	352	334	317	17	18	17	1
JULIO	347	330	313	17	17	16	1
AGOSTO	343	329	313	16	14	13	1
SETIEMBRE	333	319	303	16	14	13	1
OCTUBRE	321	307	291	16	14	13	1
NOVIEMBRE	312	299	283	16	13	12	1
DICIEMBRE	307	295	279	16	12	11	1
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

CUADRO N° 20: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2014							
MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	297	284	268	16	13	12	1
FEBRERO	293	280	264	16	13	12	1
MARZO	280	268	253	15	12	11	1
ABRIL	271	259	243	16	12	11	1
MAYO	266	254	238	16	12	11	1
JUNIO	261	249	233	16	12	11	1
JULIO	255	242	229	13	13	12	1
AGOSTO	247	235	222	13	12	11	1
SETIEMBRE	244	232	221	11	12	11	1
OCTUBRE	799	688	624	64	111	97	14
NOVIEMBRE	798	686	620	66	112	98	14
DICIEMBRE	796	684	616	68	112	100	12
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

CUADRO N° 21: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2015							
MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	233	220	207	13	13	11	2
FEBRERO	229	217	203	14	12	10	2
MARZO	226	214	201	13	12	10	2
ABRIL	229	218	205	13	11	9	2
MAYO	230	218	207	11	12	10	2
JUNIO	234	218	207	11	12	10	2
JULIO	233	220	209	11	13	10	3
AGOSTO	232	216	206	10	16	13	3
SETIEMBRE	227	210	202	8	17	14	3
OCTUBRE	224	207	199	8	17	14	3
NOVIEMBRE	222	204	196	8	18	15	3
DICIEMBRE	219	201	193	8	18	15	3
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

CUADRO N° 22: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2016							
MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	220	201	193	8	19	16	3
FEBRERO	216	198	191	7	18	15	3
MARZO	214	197	190	7	17	14	3
ABRIL	218	195	188	7	23	20	3
MAYO	215	192	186	6	23	20	3
JUNIO	217	195	187	8	22	20	2
JULIO	217	195	187	8	22	20	2
AGOSTO	221	198	190	8	23	21	2
SETIEMBRE	219	197	189	8	22	19	3
OCTUBRE	211	189	183	6	22	19	3
NOVIEMBRE	210	185	179	6	25	22	3
DICIEMBRE	210	185	178	7	25	22	3
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

CUADRO N° 23: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2017							
MESES	TOTAL	SEMILIBERTAD			LIBERACIÓN CONDICIONAL		
		TOTAL	HOM	MUJ	TOTAL	HOM	MUJ
ENERO	208	184	178	6	24	21	3
FEBRERO	212	187	181	6	25	22	3
MARZO	211	186	180	6	25	22	3
ABRIL	215	188	182	6	27	24	1
MAYO	217	189	183	6	28	25	3
JUNIO	219	190	184	6	28	25	3
JULIO	223	194	187	7	29	26	3
AGOSTO	222	192	183	9	30	28	2
SETIEMBRE	221	190	181	9	31	29	2
OCTUBRE	217	187	177	10	30	29	1
NOVIEMBRE	211	182	172	10	29	29	0
Fuente: Informe Estadístico Penitenciario- INPE							

3.1.4. VIDA COTIDIANA DE LOS INTERNOS. ENCUESTA A RECLUSOS AÑO-2018.

CUADRO N° 24: CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.

CUADRO N° 25: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO.

CUADRO N° 26: EFECTIVIDAD DE LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS A LOS INTERNOS.

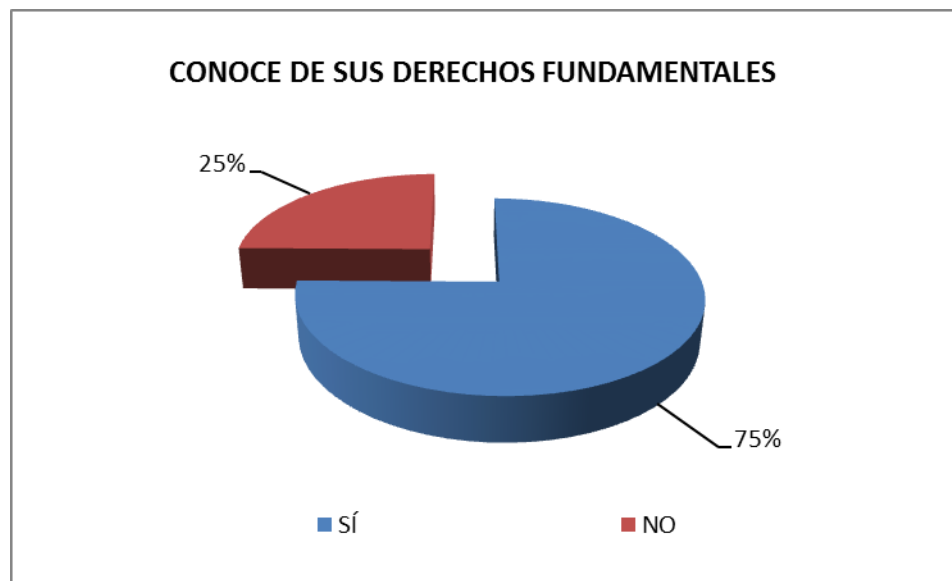
CUADRO N° 27: VIOLENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO,

CUADRO N° 28: CONSUMO DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO.

CUADRO N° 29: CLASIFICACION Y UBICACIÓN DE LOS INTERNOS DENTRO DE SUS PABELLONES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO.

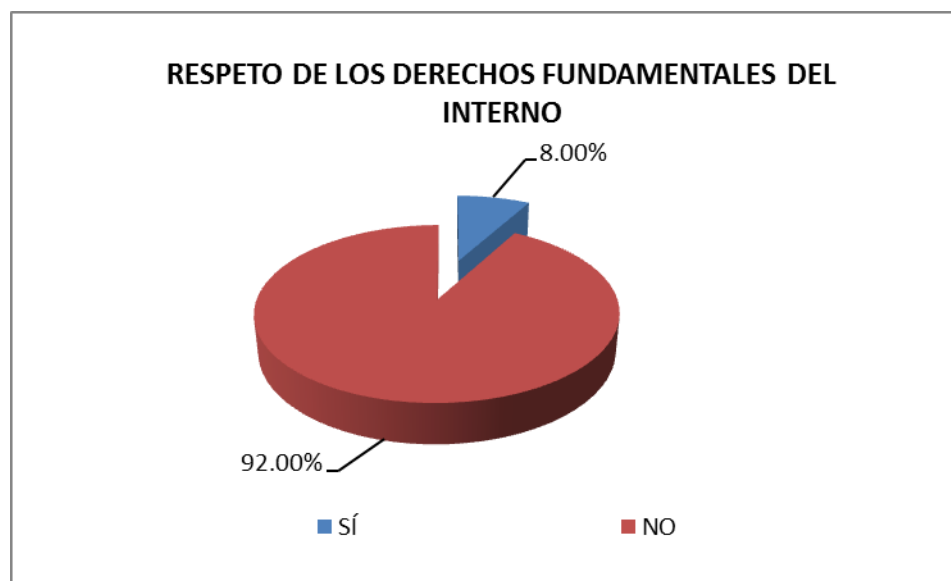
Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 24: CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
1.- Conoces cuáles son tus derechos fundamentales?	SÍ.	188	75.20%
	NO.	62	24.80%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 12



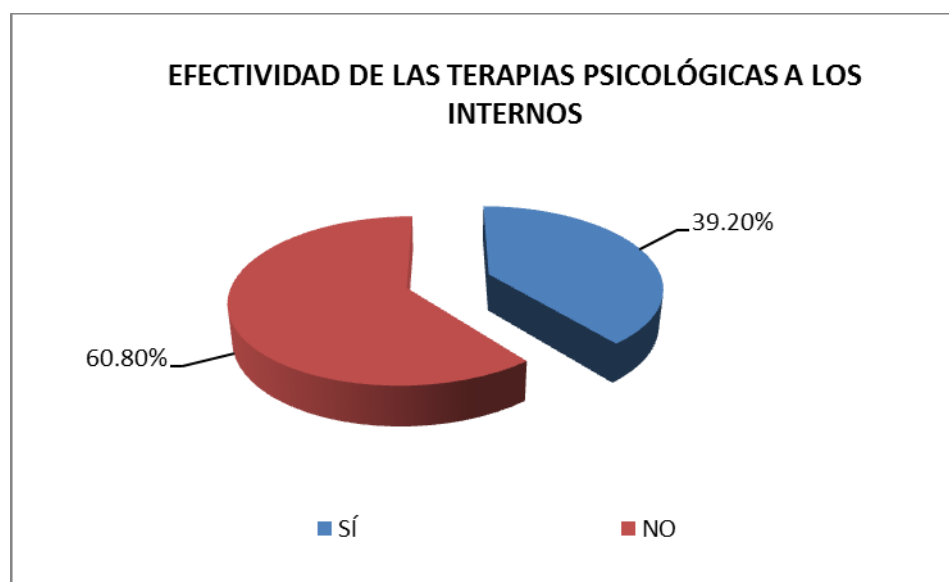
Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 25: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
2.- El personal del INPE respeta tus derechos fundamentales?	SÍ.	20	8.00%
	NO.	230	92.00%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 13



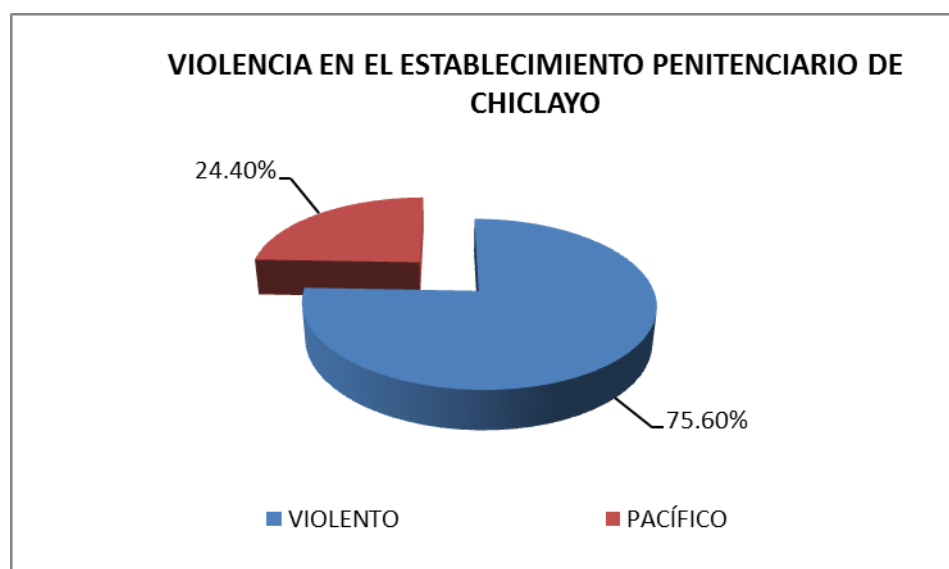
Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 26: EFECTIVIDAD DE LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS A LOS INTERNOS			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
3.- La terapias psicológicas que recibes te ayudan a reinserarse a la sociedad?	SÍ.	98	39.20%
	NO.	162	64.80%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 14



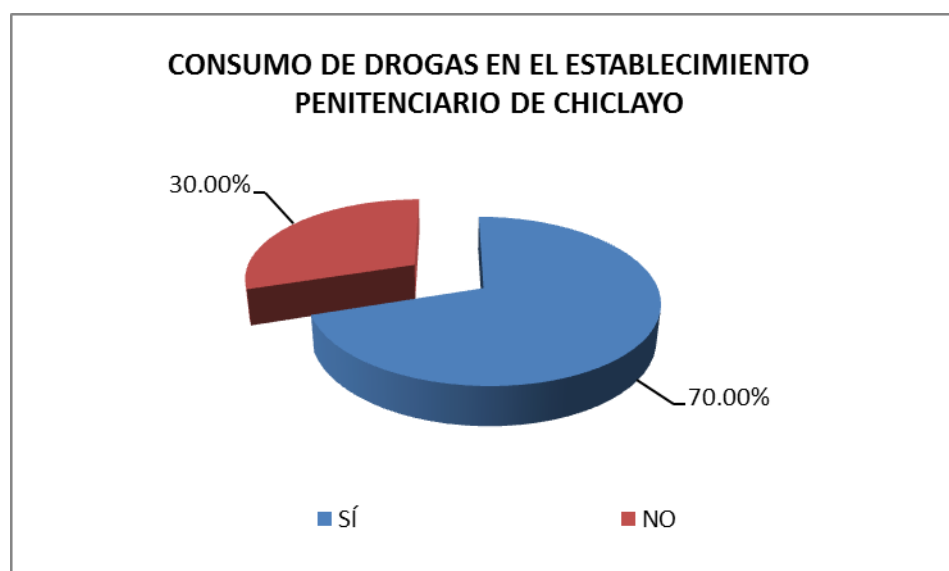
Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 27: VIOLENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
4.- Cómo Describirías al Establecimiento Penal de Chiclayo. Pacífico o violento?	Violento.	189	75.80%
	Pacífico.	61	24.20%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 15



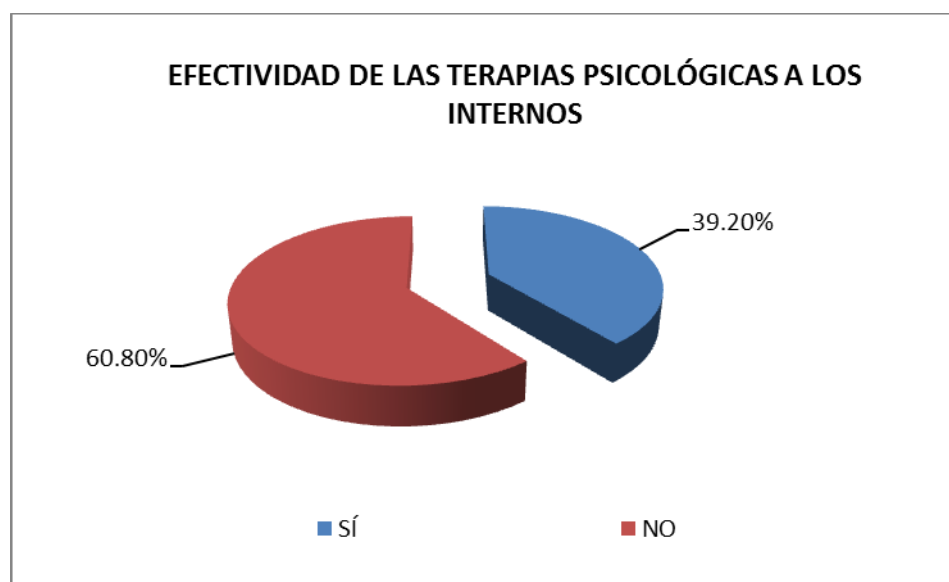
Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 28: CONSUMO DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
5.- Consumes drogas?	Si.	175	70.00%
	No.	75	30.00%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 16



Total encuestados: 250 Internos			
CUADRO N° 29: CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS INTERNOS DENTRO DE SUS PABELLONES EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE CHICLAYO			
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6.- Está conforme con su clasificación y ubicación en el establecimiento penitenciario de Chiclayo?	Sí.	118	47.20%
	No.	132	52.80%
T O T A L		250	100%
Fuente: Establecimiento penitenciario de Chiclayo, al mes de Abril de 2018.			

GRÁFICO 17



3.2. Análisis de los Resultados

La investigación para un mejor desarrollo y comprensión se estructuró en cuatro grupos, siendo el primero denominado **“ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE”**, el mismo que contiene los datos estadísticos sobre la encuesta aplicada a jueces. Fiscales y abogados en los siguientes cuadros estadísticos: El **“CUADRO N° 01: CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES”**, contiene la interrogante ¿Cuál de los siguientes conceptos logra ajustarse con mayor precisión doctrinaria a la idea de Derechos Fundamentales?, así como sus resultados, siendo que de un total de 250 encuestados entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, y de 287 opiniones vertidas, se tiene que el 60.28% del total de ellos opinó que los derechos fundamentales, son derechos que limitan desde el principio la autoridad del Estado y operan como fuente de obligaciones del mismo, por su parte el 25.09% señaló que los derechos fundamentales son reconocidos, igual que en la tradición del derecho natural como propios del individuo, previos e independientes de aquél; y el otro 14.63% restante indicó que son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Lo dicho anteriormente se encuentra corroborado con el GRÁFICO 1.

Ahora bien, del **“CUADRO N° 02: EL DERECHO DE LIBERTAD AMBULATORIA”**, se desprende que de un total de 250 encuestados entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo y de 261 opiniones vertidas, ante la pregunta según su

opinión ¿el derecho a la Libertad ambulatoria, es entendida?, el 31.03% del total de encuestados refirió que se entiende como un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere y no quiere y para trasladarse de un lugar a otro o situarse en sí mismo en el espacio; el 60.92% indicó que con el derecho de la libertad ambulatoria se permite circular libremente o sin restricciones por el ámbito de todo el territorio nacional; y, finalmente el 7.60% restante señaló que la libertad ambulatoria es el derecho subjetivo, que garantiza que ninguna persona pueda ser sometida a una limitación o restricción de su libertad física o ambulatoria, siempre que esta sea arbitraria, lo cual queda demostrado con el GRÁFICO 2.

En el **“CUADRO N° 03: CONCEPTUALIZACIÓN DE INTERNO”**, de una población encuestada de 250 personas entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, ante la interrogante de que a su criterio, el interno en un establecimiento penitenciario se concibe como: el 14.40% del total de ellos refirió interno es aquella persona que ha cometido un delito y ha sido privado de su libertad; por su parte el 78% conceptualiza al interno como la persona que ha sido sentenciada con pena privativa de su libertad por infringir la norma penal; y finalmente el 7.60% refiere que interno se refiere a las personas que se encuentran excluidas de la sociedad, confinados en una prisión. Todo lo mostrado por el cuadro en análisis se corrobora con el GRÁFICO 3.

Ante la pregunta ¿Considera que en el centro penitenciario de Chiclayo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, se respetan los derechos fundamentales de los Internos?, la misma que se encuentra contenida en el **“CUADRO N° 04: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO”**, se obtuvo como resultado que el

15.20% de la población encuestada entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, considera que en el establecimiento penitenciario de Chiclayo sí se respetan los derechos fundamentales de los internos, mientras que el 81.20% es de opinión negativa; es decir considera que en la cárcel chiclayana No se respetan los derechos fundamentales de los internos, y el 3.60% restante prefirió o emitir opinión alguna. Lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 4.

De otro lado, el **“CUADRO N° 05: POLÍTICA PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS”**, que contiene la interrogante ¿Cree usted, que existe, en los establecimientos penitenciarios del país, una adecuada política penitenciaria que permita la resocialización de los Internos?, el 3.60% cree que en los establecimientos del país Sí existe una adecuada política penitenciaria que permite la resocialización de los internos, mientras que el 85.20% del total de 250 encuestados entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, indicó que en los establecimientos carcelarios del país no existe una adecuada política penitenciaria que permita la resocialización de los internos; y, el 11.20% restante prefirió no emitir opinión, lo cual se encuentra reforzado con el GRÁFICO 5.

De una población de 250 personas encuestadas entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, El **“CUADRO N° 06: CONCEPTUALIZACIÓN DE REEDUCACIÓN PENITENCIARIA”**, muestra que ante la pregunta ¿Cuál de los conceptos, que a continuación se le mencionan, se ajusta con mayor proximidad, a la idea de Reeducción Penitenciaria?, el 25.60% del total de los encuestados refirió que la reeducación penitenciaria es el proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en

libertad; luego un 38% precisó que la educación penitenciaria cumple un rol despenalizador dentro de la ejecución Penal; y finalmente el 36.40% restante opinó que la reeducación penitenciaria es aquella que permite formarlo interiormente para que deje de lado sus tendencias antisociales y por el contrario construya su yo social y positivo. Todo lo mostrado por el cuadro materia de análisis se encuentra fundando con el GRÁFICO 6.

En ese sentido, el “**CUADRO N° 07: RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO**”, contiene la interrogante ¿Considera que por la Resocialización el Interno tiene derecho no solo a no perder un determinado beneficio adquirido, sino también a avanzar en el proceso de “curación” que es la reeducación?, muestra que de una población encuestada de 250 personas entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, 168 de ellos que equivale al 67.20% precisaron que por la resocialización el interno Sí tiene derecho a no perder un determinado beneficio adquirido y también a avanzar en el proceso de curación a través de la reeducación, mientras que el 13.60% es de opinión contraria a la anterior, y finalmente el 19.20% restante prefirió no opinar, lo cual queda demostrado con el GRÁFICO 7.

Continuando con la idea de la resocialización, se tiene que a su entender, si el fin último de la pena es la resocialización del recluso ¿considera que el desamparo estatal en cuanto a la asignación de recursos económicos necesarios para la resocialización del interno, es la causa fundamental de su ineficacia?, pregunta que se encuentra contenida en el “**CUADRO N° 08: FIN DE LA PENA Y RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO**”, de un total de 250 encuestados entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que el 46.80% precisó que el

desamparo estatal en cuanto a la asignación de recursos económicos necesarios para la resocialización del interno sí es la causa fundamental de su ineficacia, un 32.80% es de opinión negativa, y el 20.40% no emitió opinión alguna. Lo anterior se encuentra contemplado en el GRÁFICO 8.

En ese criterio de ideas, y a los fines de dar cumplimiento a lo regulado por el artículo 139°, inciso 22° de la Constitución Política “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” ¿El Estado debe propiciar la inversión privada para brindar una adecuada educación penitenciaria que permita la resocialización del penado?, pregunta contenida por el **“CUADRO N° 09: INVERSIÓN PRIVADA EN LA EDUCACIÓN PENITENCIARIA”** muestra que de un total de 250 personas encuestadas entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que el 54.40% refirió que el Estado peruano debe propiciar la inversión privada para brindar una adecuada educación penitenciaria que permita la resocialización del penado, mientras que un 35.60% no considera la inversión privada para la participación en la educación penitenciaria; y el 10% restante prefirió no opinar; siendo que todo lo manifestado se corrobora con el GRÁFICO 9.

Del **“CUADRO N° 10: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN EL RÉGIMEN PENITENCIARIO”**, que contiene la pregunta si con respecto al Régimen penitenciario, en cuanto a que cumpla con los fines resocializadores ¿Cree que es necesario que se produzcan modificatorias en la legislación nacional?, de un total de 250 encuestados entre jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que 193 de ellos, es decir el 77.20% considera que Sí es necesario que se

produzcan modificaciones normativas en la legislación nacional para que se cumpla con los fines resocializadores; mientras que el 12.80% no lo considera, y el 10% no emitió opinión alguna, lo cual se demuestra con el GRÁFICO 10.

Finalmente, el **“CUADRO N° 11: RESOCIALIZACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL”**, que contiene la interrogante de que para el logro de la reincorporación del sentenciado al seno de la sociedad ¿es indispensable que los derechos del recluso a la Reeducción, Rehabilitación y Reinserción social, guarden concordancia con los postulados doctrinarios de los derechos fundamentales en cuanto son propios y exclusivos del individuo, limitando la autoridad del Estado, así como que obligan a su pleno respeto y cumplimiento?, y de un total de 250 opiniones entre abogados, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo, se tiene que el 63.60% de ellos señala que es indispensable que los derechos del recluso a la reeducación, rehabilitación y reinserción social, guarden concordancia con los postulados doctrinarios de los derechos fundamentales en cuanto son propios y exclusivos del individuo, limitando la autoridad del Estado, así como que obligan a su pleno respeto y cumplimiento, mientras que el 29.20% es de opinión negativa y el 7.20% restante se reservó su derecho de opinar. Lo dicho anteriormente se demuestra con el GRÁFICO 11.

Por otro lado, el segundo grupo denominado: **“POBLACIÓN Y HACINAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO: 2012-2017”**, que contiene seis cuadros estadísticos. Así el **“CUADRO N° 12: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2012”**, señala el crecimiento de la población penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, desde

el mes de enero de 2012, ascendente a 1784 internos, constituyendo el 56% de hacinamiento llegando a diciembre del mismo año un total de 2205 reclusos, constituyendo el 93%, es decir se registró un aumento de 521 internos, es decir el 37% de hacinamiento penitenciario. En el año 2013, el **“CUADRO N° 13: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2013”** señala que en el mes de enero se registró un total de 2229 personas reclusas en el Establecimiento penitenciario de Chiclayo, constituyendo el 95% de hacinamiento y a diciembre de ese año 2653 internos, es decir 124% de hacinamiento. En consecuencia, entre enero a diciembre del 2013, se incrementó un total de 334 internos, significando un 29% de hacinamiento.

En el **“CUADRO N° 14: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2014”**, se desprende que en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, para enero del 2014 registró un total de 2589 internos o 164% de hacinamiento penitenciario y en diciembre un total de 3019 reclusos o 127% de hacinamiento carcelario, siendo por lo tanto que entre estos meses se registró un aumento de 430 internos o 37% de hacinamiento penitenciario. Al año siguiente, el **“CUADRO N° 15: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2015”**, muestra que en enero registró un total poblacionaria de 3035 reclusos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, es decir 166% de hacinamiento, mientras que a diciembre del mismo año un total de 3286 internos o 187% de hacinamiento; concluyendo que de enero a diciembre del año 2015 se registró un aumento de 251 internos, es decir un incremento del 21% de hacinamiento penitenciario.

El **“CUADRO N° 16: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: AÑO 2016”**, indica que en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo para enero del 2016 se registró un total de 3309 internos o un 190% de hacinamiento penitenciario y a diciembre de 2016 un total de 3720 reclusos, lo cual significa el 225% de hacinamiento carcelario. En consecuencia, entre enero a diciembre para el año 2016 se registró un aumento en la población penitenciaria de 411 internos lo cual constituye el 35% de hacinamiento penitenciario. Finalmente, del **“CUADRO N° 17: CAPACIDAD DE ALBERGUE, POBLACIÓN Y HACINAMIENTO: 2017”**, se desprende que, en el año 2017, el Establecimiento penitenciario de Chiclayo en enero registró un total de 3731 internos que equivale al 226% de hacinamiento penitenciario y a Noviembre del 2017 alcanzó una población penitenciaria de 3910 reclusos equivalente al 244% de hacinamiento, siendo en consecuencia, que la población carcelaria aumento en 129 personas.

El tercer grupo denominado: **“LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO: 2012-2017”**, el mismo que contiene seis cuadros estadísticos, siendo que el primero de ellos, es decir, el **“CUADRO N° 18: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2012”**, muestra que en el establecimiento penitenciario de Chiclayo en el mes de enero de 2012 se concedieron un total de 549 beneficios penitenciarios, de los cuales 515 fueron por el beneficio de semilibertad (a 493 hombres y 22 a mujeres) y 34 para el beneficio de Liberación condicional (a 31 hombres y a 3 mujeres) y al mes de diciembre del año 2012 se concedieron un total de 415 beneficios penitenciarios, de los cuales 395 por la

semilibertad (a 377 hombres y 18 mujeres) y 20 por el beneficio de libertad condicional (18 hombres y 2 mujeres).

El **“CUADRO N° 19: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2013”**, indica que el Establecimiento penitenciario de Chiclayo en el mes de Enero en el año 2013 se concedieron un total de 402 beneficios penitenciarios, de los cuales 384 fueron por el beneficio de semilibertad (366 a hombres y 18 mujeres) y 18 al beneficio de libertad condicional (18 hombres), y al mes de diciembre se concedieron un total de 796 beneficios penitenciarios de los cuales 684 por el beneficio de semilibertad (616 varones y 16 mujeres) y 12 para el beneficio de libertad condicional (11 varones y 1 mujer).

Del **“CUADRO N° 20: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2014”**, se desprende que en el Establecimiento penitenciario de Chiclayo se concedieron en el mes de enero del 2014 un total de 297 beneficios penitenciarios, de los cuales 284 fueron por el beneficio de semilibertad (268 para varones y 16 para mujeres) y 13 beneficios de libertad condicional (12 para varones y 1 mujer). Al mes de diciembre del mismo año se concedieron un total de 796 beneficios penitenciarios de los cuales 684 por el beneficio penitenciario (616 varones y 68 mujeres) y 112 por el beneficio penitenciario de libertad condicional (100 varones y 12 mujeres).

El **“CUADRO N° 21: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2015”**, en el año 2015 el centro penitenciario ex-Picsi indica que se concedieron en el mes de enero de este año se otorgaron un total de 233 beneficios penitenciarios, de los cuales 220 por el beneficio penitenciario de semilibertad (207

varones y 13 mujeres) y 13 por el beneficio de libertad condicional (11 varones y 2 mujeres), y al mes de diciembre de 2015 se concedieron un total de 219 beneficios penitenciarios, de los cuales 201 por el beneficio de semilibertad (193 varones y 8 mujeres) y 18 por el beneficio de libertad condicional (15 de varones y 3 mujeres).

Del **“CUADRO N° 22: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: AÑO 2016”**, se desprende que en el mes de enero del año 2016 se concedieron 220 beneficios penitenciarios en el establecimiento penitenciarios, de los cuales 201 por el beneficio semilibertad (193 varones y 8 mujeres), y 24 beneficios de libertad condicional (21 varones y 3 a mujeres), Y al mes de diciembre del mismo año se concedieron un total de 210 beneficios penitenciarios, de los cuales 185 para el beneficio de semilibertad (178 varones y 7 mujeres) y 25 para el beneficios de libertad condicional (22 varones y 3 mujeres).

Finalmente, en el **“CUADRO N° 23: LIBERTAD POR BENEFICIO PENITENCIARIO Y GENERO: ENERO-FEBRERO 2017”**, se desprende que el penal de Chiclayo en enero del 2017 ha concedido un total de 208 beneficios penitenciarios, de los cuales 184 para el beneficio de semilibertad (178 varones y 6 mujeres) y 24 beneficios de libertad condicional (21 varones y 3 mujeres). Y en noviembre de 2017 se concedieron un total de 211 beneficios penitenciarios, de los cuales 182 para el beneficio de semilibertad (172 varones y 10 mujeres) y 29 concesiones en el beneficio de libertad condicional (29 varones y 0 mujeres).

Finalmente, del cuatro grupo denominado: **“VIDA COTIDIANA DE LOS INTERNOS. ENCUESTA A RECLUSOS AÑO- 2018”**, el mismo que contiene seis cuadros, siendo que del **“CUADRO N° 24: CONOCIMIENTO DE SUS**

DERECHOS FUNDAMENTALES”, que contiene la interrogante si conoce sus derechos fundamentales, formulada a doscientos cincuenta internos del establecimiento penitenciario de Chiclayo, siendo que para el 75.2% de ellos expresó tener conocimiento de sus derechos fundamentales y el otro restante 24.80% de los encuestados indico que no conoce sus derechos fundamentales.

Del **“CUADRO N° 25: RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO”**, ante la consulta a doscientos cincuenta internos del establecimiento penitenciario de Chiclayo sobre si el INPE respeta sus derechos fundamentales, siendo que el 8% expresó que no se respetan sus derechos fundamentales en el establecimiento penitenciario y el restante 92% mayoritario indicó que el INPE no respeta sus derechos fundamentales. De otro lado, en el **“CUADRO N° 26: EFECTIVIDAD DE LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS A LOS INTERNOS”**, se desprende de doscientos cincuenta internos encuestados en el centro penitenciario de Chiclayo, ante la consulta de resultan efectivas las terapias psicológicas que reciben, para el 39.20% de ellos indico que dichas terapias si son efectivas, mientras que para el restante 60.80% mayoritario respondió que las terapias psicológicas no son efectivas.

Ahora bien, con respecto a la violencia que existe en los establecimientos penitenciarios, de tiene que el **“CUADRO N° 27: VIOLENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO”**, ante la interrogante si el establecimiento penitenciario es violento o pacífico, planteada a doscientos cincuenta internos, para el 75.80% de los encuestados indico que el establecimiento

penitenciario de Chiclayo es violento, mientras que un solo 24.2% minoritario señaló que el Centro carcelario de Chiclayo-ex Picsi es pacífico.

Luego, sobre el consumo de drogas, el **“CUADRO N° 28: CONSUMO DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO”**, muestra que ante la consulta sobre si consume drogas en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, practicada a doscientos cincuenta internos se tiene que el 71.59% precisó que si consume drogas y el 28.41% restante de los encuestados señaló que no consume drogas en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Y del **“CUADRO N° 29: CLASIFICACION Y UBICACIÓN DE LOS INTERNOS DENTRO DE SUS PABELLONES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO”** muestra que el interno del Establecimiento Penal Penitenciario de Chiclayo, desconoce cuáles son las acciones que la dirección del establecimiento, toma para evitar la corrupción, solamente cuando hay cambio de Director se presentan ante los delegados y los internos, manifestando que de hoy en adelante las cosas van a cambiar , pero al poco tiempo continúan con los mismo, no se observa ningún tipo de plan para combatirla, interno que se atreve a denunciarla con el nuevo director, sufre represalia, y valiéndose del mecanismos legal como es la regresión al tratamiento es “lanchado”. Por ellos el interno tiene que soportar cualquier acto y participar de ella, sin ningún tipo de opción.

3.3. Contrastación de Hipótesis

La hipótesis formulada en el proyecto de investigación de la presente queda plenamente contrastada, confirmándola, en primer término con la opinión especializada de juristas nacionales y extranjeros quienes entienden, también que

la educación que se recibe en los establecimientos penitenciarios no es adecuada para que los internos no sólo del establecimiento penitenciario de Chiclayo sino de todo el país puedan reeducarse, rehabilitarse, resocializarse y poder reintegrarse al seno de la sociedad.

Ello también encuentra sustento con la opinión por parte de la comunidad jurídica del Distrito Judicial de Lambayeque, conformada por Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque cuando precisan que para mejorar el nivel de educación que reciben los internos de los centros penales deben ser con intervención de la empresa privada, ya que la que reciben no es la adecuada en relación a los derechos fundamentales del interno en cuanto a su resocialización.

3.4. Pre-conclusiones

Objetivo específico 1: **“Analizar desde la óptica constitucional los Derechos del Interno a la Reeducación, Rehabilitación y Reinserción social como fines resocializadores de la pena”.**

PRE CONCLUSIÓN 1: La constitución Política peruana en su artículo 139°, inciso 22°, regula que *“el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”*. Con este artículo se prescribe determinadas finalidades al régimen penitenciario, esto es, a la ejecución de una pena privativa de la libertad: reeducar, rehabilitar y reincorporar socialmente al penado. Así, pues, el régimen penitenciario tiene por objeto: reeducar al delincuente; es decir, formarlo interiormente para que deje de lado sus tendencias antisociales y por el contrario construya su yo social y positivo. Rehabilitar al delincuente; es decir, darle las habilidades necesarias para que pueda

ejercitar su vida social positiva. Reincorporar al delincuente; es decir, permitir que se reinstale en la sociedad de manera que pueda asumir una nueva vida formal dentro de ella.

Debemos entender por reeducación al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad, esta expresión entendida en su acepción correccionalista tradicional nos remite a aquellas concepciones sumamente criticadas del positivismo criminológico. La educación es elemento indispensable del tratamiento del interno, porque al considerar el hábitat o medio carcelario, lo primero que debemos reconocer es que se ha formado allí un gran laboratorio humano para ser penetrado por las ciencias penitenciarias -la pedagogía, la psicología y psiquiatría- que son los instrumentos de la educación del condenado; y en caso contrario, nos enfrentamos a la utilización inútil del cuerpo y del tiempo del hombre del encierro, que aumenta sus fuerzas en términos de utilidad económica, y que disminuye esas mismas fuerzas, en términos de su re-adaptación, de su corrección, y en términos de todo lo que ha significado la resocialización, entre lo que reeducar implica la mayor tarea del sistema.

La rehabilitación expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.

Mientras que la reincorporación social nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado, originalmente considerado antisocial.

Recuperación que implica la introducción en la sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.

En consecuencia, mientras la reeducación nos remite a un determinado medio para alcanzar un objetivo, la reincorporación social alude al resultado obtenido con aquel proceso. Sin embargo, la constitución no hace mención a un término usualmente utilizado en el discurso político criminal de los fines de la pena, sobre todo de los fines preventivos especiales; es decir a la resocialización. Este concepto comprende tanto al proceso reeducativo como al resultado, la reincorporación social, sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de este resultado y que es determinada por la rehabilitación.

Objetivo específico 2: **“Identificar los fundamentos teórico-doctrinarios para que los fines resocializadores de la pena sean considerados Derechos Fundamentales”.**

PRE CONCLUSIÓN 2: Los derechos fundamentales son derechos que limitan desde el principio la autoridad del Estado y operan como fuente de obligaciones del mismo. Un rasgo esencial de este sistema consiste en que el ejercicio de un derecho fundamental por un individuo no necesita justificación alguna, por el contrario, la limitación por el Estado de los derechos fundamentales tiene que ser justificada. Así como un individuo no se concibe sin una sociedad y un Estado, es claro que los derechos fundamentales pueden ser sometidos a limitaciones por parte del Estado y que en el ejercicio de esta función los poderes de éste pueden vulnerarlos. En tal sentido, el modelo peruano se caracteriza por otorgar a los derechos fundamentales una protección extraordinaria en el marco de la jurisdicción

constitucional, siendo que, esta función de los tribunales constitucionales aparece, sin duda, íntimamente vinculada a la concepción del Estado que inspira esta constitución.

Entre los fundamentos teórico-doctrinarios para que los fines resocializadores de la pena sean considerados derechos fundamentales tenemos:

- A efectos de hacerla mínimamente compatible con nuestro modelo de Estado Democrático de Derecho asentando sobre el valor de la dignidad de la persona, los criminólogos y penalistas consideran que una reinterpretación del concepto de resocialización debe tomar en cuenta necesariamente tres consideraciones: En primer término, debe considerarse que la resocialización del condenado debe lograrse no a través de la pena privativa de la libertad sino a pesar de ella, es decir, la ejecución de la pena privativa de la libertad debe ser orientada a hacer menos gravosa la situación del condenado y a evitar su desocialización. En segundo lugar, la resocialización debe entender al condenado no como un objeto que pasivamente recibe instrucciones y adiestramientos sino como un sujeto de derechos. Y, en tercer lugar, la reinserción social, debe pretender también corregir las condiciones de exclusión social de los grupos de donde proviene el condenado; ello a efectos de que la situación postpenitenciaria no determine el regreso de aquel a una situación que podría ser criminógena.

- El Estado peruano debe estimular la educación en los reclusos, toda vez que ella reduce la situación de vulnerabilidad de la persona privada de libertad, y sirve como dispositivo para la prevención del delito o baja de la reincidencia. También representa una oportunidad social para desarrollar trayectorias educativas

provechosas, derecho humano y proyecto de vida y, sobretodo, de un derecho llave. Además contribuye al buen orden de la institución, ya que ayuda a mantener a los reclusos provechosamente ocupados. En consecuencia, la educación es el elemento indispensable para el tratamiento del privado de su libertad.

- El Tribunal Constitucional, señala que las exigencias de reeducación, rehabilitación, y reincorporación como fines del régimen penitenciario derivan en la obligación del legislador de prever un plazo para la culminación de la pena, de manera tal que permita al penado reincorporarse a la vida comunitaria.

- La resocialización, entendida como derecho fundamental, requiere para su plena vigencia de un desarrollo legal, tratándose, entonces, de un derecho que básicamente se hace posible con el establecimiento de una ley que regule su ejercicio, pero cuya eficacia concreta excede a la misma.

- El derecho a la resocialización prohíbe que la nueva legislación impida el acceso a determinados beneficios ya ganados, así como también prohíbe el impedimento de acceso a beneficios por ganar o expectaticios. En efecto, el derecho fundamental a la resocialización es un derecho del condenado a la progresividad del tratamiento resocializador. En ese sentido, se considera que la reinserción social es un proceso progresivo en el que a medida que avanza la reeducación del individuo debe ir también avanzando en la escala de institutos de resocialización.

Objetivo específico 3: **“Determinar cuáles son los derechos de los privados a la libertad ambulatoria que se ven más disminuidos o afectados por el sistema penitenciario, en los centros carcelarios peruanos”.**

PRE CONCLUSIÓN 3: En primer, lugar es necesario precisar que el sector de privados de la libertad ve afectado su derecho a la libertad ambulatoria o de libre tránsito y otros derechos que se señalen taxativamente en la sentencia condenatoria, pero en la realidad concreta ésta trae consigo la restricción o limitación de otros derechos que en sentencia no se encuentran sustentados o fundamentados.

Ahora bien, entre los derechos fundamentales de los reclusos encontramos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a ser tratado humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, el derecho a que la pena no trascienda la persona del delincuente, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la petición, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a que las infracciones disciplinarias y el procedimiento para su juzgamiento sean determinadas con anterioridad a la conducta por la ley, el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma infracción, el derecho a la defensa, el derecho al trabajo remunerado.

De otro lado, en los establecimientos penitenciarios del Perú y en especial el centro penitenciario de Chiclayo se vulneran muchos derechos de los internos, siendo entre estos:

- **El derecho a la vida, en conexión con la dignidad humana y la integridad física personal;** pero, estos derechos se han venido desconociendo de manera ostensible y con carácter permanente al interior de los establecimientos carcelarios cuando:

Existe grave hacinamiento, pues ello conlleva al deterioro de las condiciones de vida, por el gran número de internos en reducidos espacios. No existe un sitio digno donde alojarse, en ocasiones tiene asignadas celdas y tienen que dormir en el piso. El hacinamiento deteriora la infraestructura, en especial las instalaciones sanitarias, y los reclusos no pueden satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente, generando condiciones de insalubridad y deficiencia en los servicios públicos.

En materia de servicios públicos y asistenciales existen muchas deficiencias que han generado condiciones insalubres que deterioran la calidad de vida de los reclusos.

Se desconoce el derecho a la resocialización, pues no existe una infraestructura dotada que permita aumentar los niveles de ocupación, ni el personal idóneo para que asuma dicha responsabilidad en debida forma.

- **El derecho a la igualdad:** existe discriminación entre sindicatos y condenados, ya que solo algunos tienen acceso al estudio o al trabajo. Muchas autoridades justifican el desconocimiento de este derecho, argumentando que la legislación da la oportunidad de establecer distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la política penitenciaria y carcelaria, pero ello ha servido para abusos y arbitrariedades.

- **El derecho a la salud:** la mayoría de los establecimientos carcelarios deben disponer, por lo menos, de los servicios a primer nivel, éstos son deficientes, pues las zonas de sanidad de los establecimientos no cuentan con la infraestructura y dotación debida, ni con el personal especializado en el manejo de las enfermedades que los internos demandan y menos aún con los medicamentos que ellos necesitan, siempre hay déficit en los productos farmacéuticos.
- **El Derecho a la Educación y al Trabajo:** Para la concreción de las finalidades que la función resocializadora persigue en los establecimientos carcelarios, se requieren varios medios: la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de la familia. Sin embargo, es claro que, si bien existen talleres de educación para los reclusos, las cárceles no cuentan con los medios necesarios para impartirla, así como también no existe la infraestructura adecuada, ni personal especializado, así como la incapacidad por parte del Estado de motivar o incentivar en los reclusos los actos educativos que conlleven a una adecuada resocialización.
- Entre otros derechos de los internos que son violados, tenemos: el derecho a la familia, el derecho a ser adecuadamente rehabilitado y reinsertado a la sociedad, el derecho a la presunción de inocencia, derecho a la libertad de culto y de religión, derecho al debido proceso, los derechos políticos, entre otros (TICONA, 1999, p, 66).

Objetivo específico 4: **“Establecer el grado de eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y judiciales, respecto del**

tratamiento educativo como medio resocializador integral que reciben los internos”.

RE CONCLUSIÓN 4: En el artículo 60º del Código de Ejecución Penal se establece que la reeducación, resocialización y la rehabilitación son los fines del sistema penitenciario, el mismo que está en coherencia con lo establecido en nuestra Constitución, así, el concepto de resocialización: es un bien constitucional tanto por sus efectos para toda la sociedad como para el delincuente en sí mismo.

Ahora bien, mediante Decreto Supremo Nº 009-2007-JUS, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INPE, creándose la Subdirección de Educación Penitenciaria como una Unidad Orgánica de la Dirección de Tratamiento Penitenciario, encargada de organizar, supervisar y evaluar las actividades educativas de los internos, así como promover los programas educativos de capacitación y aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. En este propósito, y para concretar los objetivos de la educación en el sistema penitenciario, se ha planteado cinco ejes estratégicos fundamentales; promover la alfabetización, la educación básica alternativa, educación técnico productiva y la educación no formal, así como promover las bibliotecas y el fomento a la lectura.

La Subdirección de Educación Penitenciaria, tiene por visión que la educación del interno será considerada como un derecho humano fundamental e inalienable, más que como una técnica, método o área del tratamiento penitenciario, el cual exprese el desarrollo social y cultural alcanzado por las personas privadas de su libertad, con la participación activa de la sociedad civil organizada y el estado. De otro lado, tiene por misión promover y brindar un servicio educativo de calidad en las

diversas etapas, niveles programas y modalidades, con la participación activa de la comunidad y el Estado, con un enfoque multidisciplinario para resocializar al interno.

Por otra parte, es necesario señalar que en 50 establecimientos penitenciarios a nivel nacional se desarrolla actividades educativas, ello representa el 70% de los establecimientos penitenciarios existentes. En dichos establecimientos penitenciarios funcionan 30 Centros de Educación Técnico Productiva, 10 Centros de Educación Ocupacional, 7 Centros de Educación Básica Alternativa, 2 Instituciones Educativas de Adultos, 1 Institución Educativa Inicial y 08 Programas de Alfabetización distribuidos a nivel nacional.

La cobertura educativa no alcanza a la totalidad de los establecimientos penitenciarios (71 Establecimientos Penitenciarios), por diversos factores como son: hacinamiento penitenciario, falta de infraestructura y espacios físicos, carencia de personal docente, etc. En:

<http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=221&np=32&direccion=1>.

Complementariamente, se tiene que actualmente existe un psicólogo cada 387 internos, un médico cada 885, un asistente social cada 442 y un abogado cada 885 internos. Además, es menester señalar que no ha existido una política efectiva de reinserción laboral, siendo que los talleres de formación y capacitación no solo son insuficientes, sino que no se adecuan a las necesidades del mercado. Se busca que los internos sean capacitados con el objeto de participar en algún eslabón de la cadena productiva y con ello aprendan oficios que los saquen del delito.

El personal del área educativa es responsable de ejecutar las actividades y proyectos en las instituciones y programas educativos que funcionan en los establecimientos penitenciarios del país, están conformados por:

- 178 empleados de carrera del Instituto Nacional Penitenciario con formación pedagógica en educación básica y otros con capacitación adicional en diversas áreas técnicas.
- 245 como personal destacados del Ministerio de Educación, en cumplimiento al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre ambas instituciones.
- Personal de apoyo de otras Instituciones que vienen apoyando en las actividades de capacitación a través de convenios de cooperación.

En consecuencia, las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y judiciales, respecto del tratamiento educativo como medio resocializador integral que reciben los internos en los diferentes establecimientos penitenciarios e incluso el centro carcelario de Chiclayo devienen en ineficaces, toda vez que los reclusos al salir del centro penitenciario no emigran reeducados o resocializados sino que más bien salen especializados en cometer actos delictivos y muchos de ellos vuelven a reincidir.

Objetivo específico 5: “Precisar el porcentaje de reclusos que emigran de los establecimientos penitenciarios que hayan recibido programas o talleres educativos”.

PRE CONCLUSIÓN 5: La educación que se brinda en los establecimientos penitenciarios es definida como un proceso de enseñanza-aprendizaje que se

desarrolla en un contexto socio cultural altamente complejo y específico, a través del cual se asimilan y construyen conocimientos, capacidades y valores, aplicando metodologías y enfoques educativos multidisciplinarios en el tratamiento del interno. El tratamiento del interno, también se da a través de programas educativos, siendo ellos: En: <http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=479&np=32&direccion=1>

- **Programa de Alfabetización:** El cual consiste en el aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo matemático básico y el desarrollo de actitudes y valores favorables para el logro de su resocialización de parte del interno estudiante. Se desarrolla en coordinación con el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) del Ministerio de Educación.

- **Programas de Educación No Formal:** El mismo que consiste en el desarrollo de acciones complementarias a las actividades educativas y como programas estructurados establecidos por el área de educación. Entre ellos pueden ser: a)

Programas de Recreación y Deportes, con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte, a través de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.

b) **Programas de Danzas y folklore,** con el apoyo con la Biblioteca Nacional, el Instituto Italiano de Cultura, etc.

- **Programa de Educación para la Salud.** Entre ellas figuran charlas para la prevención del consumo de drogas, el VIH, enfermedades infectocontagiosas, etc.

- **Programa de Educación Ambiental,** con el apoyo de la Universidad Agraria la Molina y el Ministerio del Ambiente.

- **Programa de Actividades Artísticas.** Entre ellas tenemos: el teatro, las tertulias literarias, los concursos de poesías, las escenificaciones, dramatizaciones, mimos, etc.

Finalmente, se tiene que población liberada según el nivel de instrucción por la oficina de la región Norte- Chiclayo, hasta el mes de diciembre del 2012, fue un total de 2553 personas, de los cuales 70 fueron analfabetos, 933 con instrucción primaria (536 incompleta y 397 completa), otros 1327 fueron liberados con instrucción secundaria (724 incompleta y 603 completa), 155 con educación superior no universitaria (78 incompleta y 77 completa); finalmente 69 personas fueron liberadas con educación superior universitaria, de los cuales 34 no la llegaron a culminar, mientras que los otros 35 restantes si la completaron.

CONCLUSIONES

1. Los derechos constitucionales a la reeducación, rehabilitación y reinserción social tienen por finalidad que el penado logre reinsertarse a la sociedad de manera adecuada durante la vida en libertad y recupere todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.
2. Los fundamentos teórico-doctrinarios para que los fines de la pena sean considerados derechos fundamentales son: hacer que la situación del condenado sea adecuada y evitar su desocialización, motivación o estimulación a la reeducación, fijar un plazo límite para la culminación de la pena de manera tal que permita al penado reincorporarse a la vida comunitaria.
3. Los derechos que se ven más disminuidos en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, son: a la vida, en conexión con la dignidad humana y la integridad física personal, a la resocialización, la rehabilitación y reinserción social, a la igualdad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la presunción de inocencia, a la libertad de culto y de religión, al debido proceso, a los derechos políticos, etc.
4. Las medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento penitenciario de Chiclayo, respecto del tratamiento educativo como medio resocializador integral devienen en ineficaces, toda vez que reclusos al emigrar de una cárcel, no salen reeducados o resocializados, sino especializados en el crimen, conllevando a la reincidencia delictiva.

5. Muchos reclusos emigran de los establecimientos penitenciarios sin haber siquiera recibido un taller o programa de educación, precisándose que en la Oficina de la Región Norte- Chiclayo, hasta el mes de diciembre de 2012 fueron liberados un total de 2553 personas, de los cuales 70 fueron analfabetos, 933 con instrucción primaria, 1327 fueron liberados con educación secundaria, 155 con nivel superior no universitario y 69 personas con educación universitaria.

RECOMENDACIONES

1. Se debe considerar a los derechos a la reeducación, rehabilitación y resocialización en la categoría de los derechos fundamentales, y por tanto de obligatorio cumplimiento; siendo que por dicha razón se brindará un verdadero reconocimiento y primacía de estos derechos para un adecuado tratamiento penitenciario y el cumplimiento eficaz como fin resocializador de la pena.
2. El Estado peruano debe propiciar la participación privada en los establecimientos penitenciarios del país, para brindar un adecuado servicio de educación penitenciaria a los reclusos, adoptando políticas a corto plazo que permita captar empresas a través de la disminución de impuestos, mano de obra disponible, entre otros.
3. La reeducación debe ser considerada el eje central para una adecuada resocialización y reinserción de los privados de su libertad al seno de la sociedad, motivándolo que a través de ella encontrará múltiples beneficios, permitiendo la prevención del delito, disminución considerable de la reincidencia delictiva y que la persona adquiera la igualdad de derechos que el resto de la población.
4. Promover una propuesta modificatoria en el texto del Código de Ejecución Penal y Constitucional en lo que respecta que los derechos a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad se consideren como derechos fundamentales y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades encargadas del régimen penitenciario.

PROYECTO DE LEY

“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 60° DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL Y EL INCISO 22° DEL ARTÍCULO 139° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, CON RESPECTO A”

LEY N°...

1. **OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:** La propuesta normativa que se presenta ha de estar encaminada a modificar la regulación ordinaria respecto a que los derechos del interno como la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad deban ser considerados como derechos fundamentales y por tanto de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades encargadas del tratamiento penitenciario, para lo cual ha de modificarse el artículo 60° del Código Procesal Penal y el inciso 22°, del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.
2. **FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA-Exposición de motivos:** El artículo 60° del Código de Ejecución Penal refiere que *“el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad”*; este tratamiento debe ser individual y también de manera grupal y progresivo siendo tratado cuidadosamente por un equipo multidisciplinario o técnico conformado por médicos, biólogos, psicólogos, psiquiatras, abogados, entre otros de vital importancia. En ese sentido, el inciso 22°, del artículo 139° de la Máxima Carta Política, en lo referido al régimen penitenciario regula que *“el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”*.

La carta magna política nacional regula los derechos fundamentales de la persona en el artículo 2° (derecho a la vida, integridad y seguridad personal, libertad de conciencia, de

información, opinión y expresión, de inviolabilidad del domicilio y comunicaciones, de reunión, de asociación, de contratación, de trabajo, etc.). Esta es una enumeración enunciativa, pues el artículo 3° deja abierto el reconocimiento a otros derechos, expresa que la enumeración de los derechos fundamentales de la persona establecidos en el primer capítulo, “no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. Este artículo (refiriéndose a su antecedente el artículo 4° de la Constitución de 1979), según el maestro Fernández Sessarego, es ejemplar dentro del constitucionalismo comparado, encierra el principio general de tutela unitaria e integral de la persona. En esta norma, que opera como cláusula general y abierta, los jueces tienen el fundamento para proteger cualquier interés de la persona ante la presencia de una laguna legal.

Ahora bien, se debe entender por reeducación al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad, esta expresión entendida en su acepción correccionalista tradicional nos remite a aquellas concepciones sumamente criticadas del positivismo criminológico. Esta educación debe impartirse conforme a la condición del interno. La administración penitenciaria fomenta la educación, la formación moral y cívica y el deporte y pueda otorgar certificados, diplomas y títulos.

La rehabilitación expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.

La reincorporación social nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado, originalmente considerado antisocial. Recuperación que implica la introducción en la

sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. En consecuencia, mientras la reeducación nos remite a un determinado medio para alcanzar un objetivo, la reincorporación social alude al resultado obtenido con aquel proceso. Sin embargo, la constitución no hace mención a un término usualmente utilizado en el discurso político criminal de los fines de la pena, sobre todo de los fines preventivos especiales; es decir a la resocialización. Este concepto comprende tanto al proceso reeducativo como al resultado, la reincorporación social, sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de este resultado y que es determinada por la rehabilitación.

Debemos indicar que estos derechos fundamentales derivan de uno de mayor arraigo como es el derecho a la dignidad humana, siendo que al respecto, señala FERNANDO SCHILLER citado por HUGO ÁLVAREZ (2017) que: El juzgador que respeta la dignidad humana es completamente libre y moralmente superior. La crueldad, el odio, la venganza nos hace esclavos de nuestros propios instintos inferiores. No se puede prescindir de este principio básico, hecho conciencia de la forma más racional en un Estado constitucional de derecho. El juzgador debe actuar con el debido respeto de la dignidad del reo, en ella obra con libre racionalidad en las decisiones jurisdiccionales. Quien actúa de esa forma tiene una claridad mental y una energía superior a los demás, según su concepto y esencia. Por cierto, en su afán justiciero no tiene necesidad de recurrir a la humillación, el trato cruel o denigrante del reo. Le basta ser justo respetando al reo que debe responder por sus actos propios con una pena justa de hallársele culpable (p, 253).

En el ámbito internacional, en la jurisprudencia constitucional de colombiana se advierte “La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales relegados en nuestra

sociedad a los lugares de suciedad. Sentencia T-388 de 2013". La Corte Constitucional colombiana, ha declarado, en tres oportunidades, el estado de cosas inconstitucional²² en nuestras prisiones (Sentencias T-153/98, T-388/13 y T-762/15), ante la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de los reclusos. Para adoptar la primera de estas providencias, se visitaron dos establecimientos carcelarios ubicados en las ciudades de Bogotá y Medellín. Allí se encontraron, entre otros hallazgos, pozos de aguas negras cerca de rebosar; la sección de enfermería y sanidad se encontraba destinada parcialmente para albergar presos con perfil de máxima seguridad, percibiéndose adicionalmente malos olores; los internos habitaban túneles húmedos y oscuros, que no tienen ventilación ni luz y los baños habían sido adaptados como dormitorios. Durante la visita nocturna, se percibieron olores fétidos, poca ventilación y escasa iluminación; los internos dormían en los pasillos y en las letrinas e, incluso, las personas que adelantaron la diligencia, pisaron algunas cabezas de internos durante el transcurso de la inspección. Con base en lo anterior, se concluyó que las condiciones en las que vivían los internos de estos establecimientos carcelarios eran inhumanas y no se compaginaban con el principio de la dignidad humana, sin que en estas condiciones se pueda cumplir en debida forma con los presupuestos establecidos para el tratamiento penitenciario. Adicionalmente, en el fallo de tutela, se determinó que esta situación era pregonable no solo de estos establecimientos carcelarios, sino de todos los demás que integran el sistema penitenciario y carcelario colombiano.

La modificación legislativa que se propone justifica su abordaje, en torno de dos ejes fundamentales, tanto en su parte teórica, como práctica; por la primera, se precisa que existen suficientes argumentos teóricos y doctrinarios que justifican que los derechos de los reclusos a la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad se consideren como derechos fundamentales y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por parte de todas las autoridades o

responsables de tratamiento penitenciario; en su segundo eje, o justificación práctica, debe estarse a la forma como se imparte adecuadamente la educación en los establecimientos penitenciario y como se motiva para que la población penitenciaria al emigrar del centro carcelario se reintegre con todos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población ciudadana, así como también que no vuelva a delinquir.

Finalmente, la propuesta que se adjunta, traducida en el Proyecto de Ley, se espera sea objeto del análisis y debate por parte de la comunidad jurídica local, regional y nacional, a cuyas críticas nos sometemos, pues lo aportado de ninguna manera pretende constituirse en un cúmulo de conocimientos que dan por agotado el debate jurídico en torno al tema de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad para ser considerados como derechos fundamentales y de obligatorio cumplimiento por los responsables del tratamiento penitenciario.

3. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

3.1. MODIFICACIÓN LEGAL:

“Artículo 1°.- Modifíquese el inciso 22° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en los siguientes términos:

<<Inciso 22°, artículo 139°.- El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, **los mismos que se consideran como derechos fundamentales**”

“Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 60° del Código de Ejecución Penal, en los siguientes términos:

<<Art. 60°.- El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, **los cuales deben ser**

tratados como derechos fundamentales y por lo tanto de obligatorio cumplimiento>>.

Artículo 3°.- Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley”.

- 4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO:** El presente proyecto se enmarca en la forma como se encaminan los derechos del interno a la reeducación, rehabilitación y reincorporación a ser tratados como derechos fundamentales y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los responsables del tratamiento penitenciario, con la finalidad que se logre una adecuada resocialización del penado; no generando, la modificación legislativa, costo alguno al fisco.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- ALTAMANN, Julio (1962). *"Bases para un plan de futura Política Penitenciaria Nacional"*. Editorial Mejía Baca.
- ANTOLISEI, Francisco (1988). *"Manual de Derecho Penal. Parte General"*. Octava. Edición. Editorial Temis. Bogotá.
- BACIGALUPO, Enrique (1999). *"Principios Constitucionales del Derecho Penal"*. Editorial Hammurabi. Buenos Aires.
- BACIGALUPO, Enrique (2004). *"La función del derecho penal y las Teorías de la pena. Derecho penal. Parte General"*. Editorial ARA Editores EIRL. Lima.
- BARATTA, Alessandro (2004). *"Criminología Crítica y crítica del Derecho Penal. Introducción a la Sociología Jurídico Penal"*. Primera Reimpresión. Editorial Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires.
- BARATTA, Alessandro (2004). *"Criminología y Sistema Penal. Compilación in memoriam"*. Editorial B de F. Buenos Aires.
- BECCARIA BONESANA, César (1993). *"Tratado de los delitos y de las Penas"*. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires.
- BERGALLI, Roberto; BUSTOS RAMÍREZ, Juan y MIRALLES, Teresa (1983). *"El Pensamiento Criminológico"*. Volumen I. Editorial TEMIS. Bogotá.
- BERGALLI, Roberto; BUSTOS RAMÍREZ, Juan y Otros (1983). *"El Pensamiento Criminológico"*. Volumen II. *"El Estado y Control"*. Editorial TEMIS. Bogotá.

- BERNAL PÁLIDO, Carlos (2003). *“El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”*. Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
- CABALLERO ROMERO, Alejandro E. (1999). *“Metodología de la Investigación Científica. Diseño con hipótesis explicativas”*. Editorial UDEGRAF S. A. Lima.
- CALDERÓN CEREZO, y CHOCLAN MONTALVO J. A. (2001). *“Derecho Penal. Parte General”*. Tomo I. Segunda Edición. Editorial BOSCH. Madrid.
- CARRARA, Francesco (1972). *“Programa de derecho criminal. P. G.”*. Volumen II. Editorial Temis. Bogotá.
- CASTILLO CÓRDOVA, Luís (2008). *“Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales”*. Editorial Grijley. Lima.
- CHANAMÉ ORBE, Raúl (2007). *“Comentarios a la Constitución”*. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima.
- CHANAMÉ ORBE, Raúl (2007). *“Diccionario de Derecho Constitucional”*. Quinta Edición. Abogados editores. Lima.
- ESCOBAR, Guillermo (2007). *“Sistema Penitenciario”*. En Federación Iberoamericana de Ombudsman. V Informe sobre Derechos Humanos. Editorial Trama. Madrid.
- ESPINOZA VELÁSQUEZ, Kenia Margarita y MENGANA CASTAÑEDA, Milagro (2007). *“Crisis carcelaria y Privatización de las prisiones en la modernidad”*. Editorial Universitaria. La Habana.
- FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos (1997). *“Metodología de la investigación”*. Editorial Mc Graw-Hill. México.

- FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (1998). *"Derecho de la Personas"*. Tercera Edición. Editorial Grijley. Lima.
- FERRAJOLI, Luigi (1995). *"Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal"*. Editorial Trotta. Madrid.
- FERRAJOLI, Luigi (2001). *"Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales"*. Editorial Trotta. S. A. Madrid.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (1990). *"Derecho Penal"*. Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. México.
- GARCÍA MORILLO, Joaquín (1995). *"El Derecho a la Libertad Personal"*. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia.
- GARCÍA- PABLOS DE MOLINA, Antonio (1995). *"Derecho Penal. Introducción"*. Editorial servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- GARRIDO MONTT, Mario (2001). *"Derecho Penal. Parte General"*. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile.
- HESSE, Konrad (2001). *"Significado de los Derechos Fundamentales"*. En BENDA. *"Manual de Derecho Constitucional"*. Segunda Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid.
- JACOBS, Gunter (1995). *"Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación"*. Ediciones Jurídicas S. A. Madrid.
- JACOBS, Gunter y CANCIO MELÍA, Manuel (2003). *"Derecho Penal del enemigo"*. Editorial Civitas. Madrid.

- LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Análisis Artículo por Artículo (2005). "*Obra Colecta por 117 destacados Juristas del País*". Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Director. Walter Gutiérrez. Lima.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (2004). "*Derecho Penal. Parte General*". Tomo III. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- LÓPEZ REY, Manuel (1975). "*Criminología*". Editorial Aguilar. Madrid.
- MAPELLI CAFFARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan (1996). "*Las Consecuencias Jurídicas del Delito*". Editorial Civitas. Madrid.
- MEJÍA VALERA, José (1964). "*Lecciones sobre metodología de Investigación Social*". Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
- MUGUERZA, Javier (1989). "*El Fundamento de los Derechos Humanos*". Editorial Debate. Madrid.
- MUÑOZ CONDE, Francisco y HASSEMER, Winnfried (1989). "*Introducción a la Criminología y al Derecho Penal*". Editorial Titant Lo Blanch. Valencia.
- MUÑOZ CONDE, Francisco (1975). "*Introducción al Derecho Penal*". Segunda Edición. Editorial Bosch. Barcelona.
- MUÑOZ CONDE, Francisco (2001). "*Derecho Penal. Parte Especial*". Editorial Tirant lo Blanch. Barcelona.
- NEUMAN, Elías (1997). "*El problema sexual en las cárceles*". Editorial Universidad Buenos Aires. Buenos Aires.
- NÚÑEZ, Ricardo (1999). "*Derecho Penal. Parte General*". Cuarta Edición Actualizada. Editorial editora Córdoba. Argentina.

- OSSORIO, Manuel (2005). "Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales". Editorial Dastasean S. A. Guatemala.
- PECES-BARBA, Gregorio (1996). "*Derechos Fundamentales*". Cuarta Edición. Fondo Editorial de la Universidad Complutense. Madrid.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio (1999). "*Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General*". Editorial Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado. Madrid.
- PEÑA-CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2010). "*Derecho Penal. Parte Especial*". Tomo I. Segunda Reimpresión. Edición Actualizada. Editorial IDEMSA. Lima.
- PEÑA CABRERA, Raúl (1977). "*Derecho Penal Peruano. Parte General*". Editorial San Marcos. Lima.
- PÉREZ LUÑO, Enrique (1998). "*Los Derechos Fundamentales*". Séptima Edición. Editorial Tecnos. Madrid.
- PICK, Susan y otros (1994). "*Cómo investigar en Ciencias Sociales*". Editorial Trillas. México.
- POLANIO NAVARRETE, Miguel (2004). "*Derecho Penal. Modernas Bases dogmáticas*". Editorial Grijley. Lima.
- POQUET, Alejandro (2005). "*Temas de Derecho Penal y Criminología*". Editorial Ediar. Buenos Aires.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2000). "*La Función de la Pena y sus Teorías. Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú*". Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- PRIETO SANHIS, Luis (1992). "*Estudios sobre Derechos Fundamentales*". Editorial Debate. Madrid.

- QUISPE CORREA, Alfredo (2007). *"Derecho Constitucional I"*. Comité Editorial de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Lima.
- RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2007). *"Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento- Y cómo sustentar expedientes"*. Cuarta Edición revisa-aumentada. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- RIBENDER, Manfred (1981). *"Sociología del Derecho"*. Editorial Pirámide. Madrid.
- ROXÍN, Claus (1997). *"Derecho Penal. Parte General"*. Tomo I. *"Fundamentos de la Teoría del Delito"*. Traducción de la segunda edición alemana por Diego-Manuel Luzón Peña; Miguel Díaz y García Conlledo. Editorial Civitas. Madrid.
- ROY FREYRE, Luis Eduardo (2001). *"Derecho Penal Peruano. Parte Especial"*. Tomo II. Editorial Grijley. Lima.
- RUBIO CORREA, Marcial (1999). *"Estudio de la Constitución Política de 1993"*. Tomo 1. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- RUBIO CORREA, Marcial (1999). *"Estudio de la Constitución Política de 1993"*. Tomo 5. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- SALDAÑA BARRERA, Eloy Espinoza (2005). *"Derechos Fundamentales: La conveniencia de adoptar una teoría general"*. En *"Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional"*. Jurista Editores E.I.R.L. Lima.
- SALINAS SICCHA, Ramiro (2008). *"Derecho penal. Parte Especial"*. Tercera Edición Corregida y aumentada. Editorial Grijley. Lima.

- SERNA, Pedro y TOLLER, Fernando (2000). *“La Interpretación Constitucional de los Derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos”*. Editorial La Ley. Buenos Aires.
- SERRANO PIEDECASAS, José Ramón (1994). *“Manual de Derecho Penal. Parte General”*. Editorial Praxis. Barcelona.
- SMALL ARANA, Germán (2006). *“Situación Carcelaria del Perú y Beneficios Penitenciarios”*. Editorial Editora Jurídica Grijley. Lima.
- SOLER, Sebastián (1992). *“Derecho Penal Argentino”*. Tomo II. 10° Reimpresión Total. Buenos Aires.
- SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1999). *“Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal”*. Editorial Editora FECAT. Quinta Edición. Lima.
- TICONA, Víctor (1999). *“El debido proceso y la demanda civil”*. Tomo I. Editorial Rodhas. Segunda Edición. Lima.
- TORIBIO BARBA, José (2005). *“Las Cárceles de la Democracia, del déficit de ciudadanía a la producción de control”*. Editorial Creative commons. Madrid.
- VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2006). *“Derecho Penal. Parte General”*. Editorial Grijley. Lima.
- ZARZOSA CAMPOS, Carlos (1993). *“Derecho Penal. Parte General I”*. Editorial Fondo de Fomento o la Cultura. Trujillo.
- ZELAYARAN DURAND, Mauro (2002). *“Metodología de la investigación Jurídica”*. Ediciones Jurídicas. Lima.

HEMEROGRÁFICAS

- ARIAS MARTÍNEZ, Joaquín (2001). "El valor constitucional del mandato de resocialización". En: Revista Española de Derecho Constitucional, N° 63, Septiembre-Diciembre.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Programa de asuntos penales y Penitenciarios (2006). *"La Realidad del Sistema Penitenciario en el Perú. Diagnóstico, limitaciones y retos"*. Editorial Roel. Lima.
- ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (2000). "Intimidad, Libertades informáticas y algunas técnica para poder hacer frente a una disputa aparentemente inacabable". En Revista Peruana de derecho Constitucional, N° 2, Lima.
- DIARIO OFICIAL EL PERUANO. Sistema Penal. Sección: Política. Editorial. Pág. 2. Del 18 de Julio 2004.
- PAREDES YATACO, Emilio Iván (2008). "Derechos Fundamentales y Jurisprudencia Constitucional en materia Penitenciaria". En: JUS CONSTITUCIONAL. Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editorial Grijley, Agosto 8, Lima.
- PEDRAZA, Wilfredo. "(Situación de la Ejecución Penal en el Perú. Primera Aproximación empírica". Consejo de coordinación Judicial. Abril de 1998).
- PEDRAZA SIERRA, Wilfredo (2007). "La Clasificación de Internos y el Crimen Organizado". En Actualidad Jurídica. Editorial Gaceta Jurídica, Tomo N° 165, Agosto, Lima.
- PEDRAZA, SIERRA, Wilfredo (2006). "Informe de Gestión INPE 2004-2006". Febrero, Lima.

JESCHECK, Hans Heinrich (1981). “La crisis de la Política Criminal”. En Nuevo Foro Penal N° 10.

SÁNCHEZ MORENO, José Ugaz (1998). “Cultura inquisitiva y presos sin sentencia”. En: IUS ET VERITAS N° 11,1995. Instituto Nacional Penitenciario Anuario estadístico Penitenciario, Oficina de Estadística, Lima.

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 019-2005-PI/TC. Párrafo 11.

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 2496-2005-PHC/TC. Párrafo 5.

SENTENCIA DE la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday.

Sentencia del Tribunal Constitucional. N° 3482-2005- PHC. Fundamento Jurídico 5 (caso Luis Brain Delgado y Otros).

Sentencia del Tribunal Constitucional. N° 6322-2005- PHC. Fundamento Jurídico 12 (caso César Inca Soler).

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 0050-2004-AI/TC. Fundamento 72.

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 1042-2002-AI/TC. Fundamento 2.2.

SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. “*Política Penal y Política Penitenciaria*”. Cuaderno N° 8. Editorial del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Setiembre de 2008.

LEGISLACIÓN

CÓDIGO PENAL PERUANO

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004.

CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. *Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.*

LINKOGRAFIA

<http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-primera-generacion-o-derechos-civiles-y-politicos>

<http://www.monografias.com/trabajos23/derechos-humanos/derechos-humanos.shtml>

<http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/humanos/info/infoinpe.htm>

<http://www.slideshare.net/arthurforever/beneficios-penitenciarios>

<http://www.ilustrados.com/tema/2633/fines-pena-medidas-seguridad.html>

<http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=221&np=32&direccion=1>

<http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=479&np=32&direccion=1>